

Entre crisis te veas
Enrique Semo

Entre crisis te veas

Enrique Semo

Introducción

Los ensayos presentados a continuación giran, pese a su diversidad, alrededor de tres temas fundamentales: la crisis económica, la democracia y la cuestión comunista.

En uno de ellos, escrito hace doce años, coincidía con los economistas que pronosticaron que el auge de la posguerra había terminado y que se iniciaba en la economía mundial, un ciclo depresivo de larga duración. Opiné que el año de 1974 quedaría en la historia como el fin de la *Belle Epoque* y que los síntomas ya presentes de la enfermedad: lento crecimiento, crisis del Estado social, desocupación e inflación persistirían durante un tiempo prolongado. El *lunes negro* de octubre del año pasado nos recuerda que los desequilibrios se mantienen y la frenética oscilación de los pronósticos entre catástrofe y euforia, indica que la incertidumbre que envuelve una economía cuyas fisuras siguen agrandándose no se han disipado.

Lo que nadie previó es el carácter global del fenómeno. La crisis abarca los tres mundos. Países capitalistas altamente desarrollados, “socialistas”, subdesarrollados, todos han sentido el impacto devastador de las crisis petroleras, las vertiginosas innovaciones técnicas, la emergencia de nuevos competidores, la inestabilidad financiera, las gigantescas deudas externas. Uno de sus efectos ha sido la agudización de todas las contradicciones. Riqueza y pobreza, excelencia técnica y atraso se polarizan como nunca antes.

En los países desarrollados, los ingresos de la población no han dejado de crecer, pero aumenta también dramáticamente la desigualdad. Revirtiendo tendencias de los años cincuenta y sesenta, la misma sociedad produce en un extremo grupos de profesionistas de alto nivel, bien pagados y mejor educados, con acceso a los puestos de decisión y en el otro, una minoría creciente expuesta al empobrecimiento absolutos, los trabajos rutinarios, la desocupación, el endeudamiento y la desesperación. En los países del bloque soviético en los cuales la superación del subdesarrollo y la seguridad social fueron logrados con altos costos políticos y humanos, el crecimiento se estanca, la vida de la población urbana se degrada, los obstáculos a la innovación técnica y administrativa se multiplican.

Una peculiaridad de la actual onda depresiva en su coincidencia en el tiempo con una revolución científica y técnica sin precedentes. Aunados a las crisis, sus

efectos imponen a la economía y la sociedad contemporánea rasgos que ponen en entredicho el concepto de *Progreso* que desde la Ilustración es el principio rector tanto del liberalismo y el positivismo como del marxismo. El problema no es nuevo, pero nunca se había presentado en términos tan dramáticos. Envueltos en proyectos sociales regresivos, la automatización, la informática, la robotización pueden crecer un mundo de pesadilla. La “modernidad” impuesta como imperativo del mercado internacional, las bolsas de valores, las divisas fuertes, hacen aparecer las necesidades reales de los pueblos menos desarrollados como despreciables restos arcaicos. Urge una revisión radical de los valores y las prioridades del desarrollo, la invención de nuevas formas de control democrático de la producción y la distribución.

En América Latina, la crisis llegó más tarde. El producto por habitante aumentaba, la urbanización avanzaba. La industria dio pasos importantes y para un sector de la población, las expectativas de vida y condiciones sanitarias y educativas mejoraron. Aun cuando el crecimiento benefició casi exclusivamente a los ricos y las clases medias, había cierto optimismo acerca del futuro. Pero a partir de la crisis de 1981-82, la situación ha empeorado bruscamente. Se imponen tendencias regresivas que pueden borrar muchos de los logros de los últimos veinte años. En 1987, el producto por habitante de la zona es 6 por ciento más bajo que el de 1980. En el mismo periodo, debido a la inflación y las políticas de austeridad, en países como México, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay los salarios mínimos urbanos cayeron en términos reales entre 36 y 48 por ciento. Presionados por los déficits presupuestales los Estados descuidan los servicios públicos. Las condiciones alimentarias se deterioran, la contaminación de las grandes ciudades adquiere expresiones amenazantes, el desempleo y el subempleo crecen día con día.

La situación existente exige una acción concertada, en dos frentes, que tarda en producirse. Hacia el exterior, renegociar la deuda cuyo servicio ahoga la economía y frena las inversiones necesarias para la recuperación. En la producción, reiniciar el crecimiento industrial y agrícola orientado hacia el mercado interno. En una época de incertidumbre de la economía mundial la relativa independencia de las fluctuaciones internacionales es todavía más deseable y ella no tiene por qué frenar el desarrollo de la exportación. Ni sustitución de importaciones a costos prohibitivos en divisas, ni aumento de la exportación a costa de las condiciones de vida internas.

Si en el pensamiento político la idea de la democracia tiene una larga historia, como realidad social es un fenómeno reciente. Todavía a principios del siglo XIX en Estados Unidos, los negros eran esclavos, en Inglaterra sólo 250 mil ciudadanos participaban en la elección de la Cámara de los Comunes y en Francia, que tenía una población de 30 millones, los electores eran 200 mil. El gobierno republicano basado en el sufragio universal sólo se consolidó en algunos países de Europa y Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX. Todavía

después, varios de ellos pasaron por experiencias totalitarias, devastadoras. Hace medio siglo Alemania, Italia y Japón vivían bajo un régimen fascista y los miembros de la comunidad europea, España, Portugal y Grecia acaban de salir de prolongadas y cruentas dictaduras. El sistema democrático basado en el sufragio universal, el pluralismo y el respeto a los derechos civiles, sólo ha adquirido universalidad en las últimas cuatro décadas. En su ascenso, presenta problemas no previstos tanto por el liberalismo como por el marxismo. El nuevo sistema se revela amenazado por los peligros de la ingobernabilidad y portador de nuevas posibilidades de cambio social en la democracia.

Siglo y medio después de haberse iniciado en los regímenes republicanos, el pueblo de México no ha podido consolidar los principios de transparencia electoral, división de poderes y alternancia de partidos en el gobierno. En la campaña electoral de 1988 vuelven a manifestarse como objetivos por conquistar. Pero incluso después de logrados, la democracia sigue enfrentándose a su enemigo principal: las tendencias a la concentración del poder. Todo sistema que excluye a la mayoría de los ciudadanos de los procesos de toma de decisión, permite a un pequeño grupo el ejercicio del poder por encima de los órganos representativos y obstaculiza la movilidad de las élites dirigentes, es autoritario, sea cual sea su forma de organización política. En todas las sociedades actuales, incluso las más democráticas, existen estructuras, fuerzas e instituciones que se oponen al ejercicio de la democracia y pueden, en un momento dado, cancelarla.

En una sociedad como la mexicana, los factores de concentración del poder tienen un doble origen, arcaico y moderno. Su fuente más importante es la economía. La desigual distribución del ingreso, la educación, la cultura margina desde el nacimiento. El "mundo de los negocios" influye decisivamente en la conducta de los gobiernos. Su fuerza se multiplica con las estructuras oligopólicas en la producción y los medios de difusión.

Reproduciendo viejas estructuras oligárquicas, un pequeño grupo de familias y clases concentran en sus manos poder económico y político. En los gobiernos locales, el caciquismo subvierte la democracia en una ambiente de clientelismo, corrupción y nepotismo.

La cúspide burocrática de la "familia revolucionaria" concentra en sus manos innumerables hilos de poder, viendo con suspicacia todo espacio democrático no controlado. El tráfico de atribuciones entre esos centros de concentración (como sucede con las nacionalizaciones o la venta de empresas estatales al sector privado) no altera el patrón general.

La democratización es transparencia parlamentaria, pero también pluralismo de centros de poder con autonomía reconocida por la ley. En la lucha por una sociedad libre, los frentes son muchos y el proceso interminable.

El 6 de noviembre de 1981, dejó de existir el Partido Comunista Mexicano. Después de 62 años de vida ininterrumpida, su XX Congreso acordó por unanimidad disolverlo para formar con otras cinco organizaciones el Partido Socialista Unificado de México. Así terminaba la historia de la más antigua de las corrientes de la izquierda mexicana.

Desde 1963 hasta ese día fui miembro del Comité Central del PCM y cuando se decidió la fusión, formaba parte de su Comisión Política. Perteneczo a la generación que se inició en la izquierda bajo la influencia de la rebelión obrera de 1958, la imposible pero triunfante revolución cubana y el Movimiento de Liberación Nacional, ese gran intento de formar una izquierda unida en México.

La década de los sesenta fue un periodo de intensas luchas populares. Las invasiones campesinas de tierras, los movimientos democráticos contra gobernadores impopulares en la provincia, las luchas por la autonomía sindical, la emergencia del nuevo movimiento estudiantil. Se sucedía. Nuestro mundo cultural se nutría de los manuales de marxismo pero también de las encendidas proclamadas del Che Guevara y Camilo Torres, de las novelas del realismo socialista, de *La Región más transparente* de Fuentes, el *José Trigo* de Fernando del Paso y las crónicas de Monsiváis. La revista *Historia y Sociedad* reinició el pensamiento social marxista y *Política* fue fértil cantera de ideas de una izquierda que se reponía lentamente de sus derrotas. Participé en la redacción de ambas.

América Latina vivía una época esperanzas e ilusiones dominadas por la idea de una revolución de nuevo tipo, tan inevitable como inminente. Las luchas de liberación nacional y los movimientos guerrilleros que se difundieron como reguero de pólvora, alimentaban en la juventud una misión heroica, el ansia de volver al pueblo, el desprecio por el populismo y el reformismo. El “enemigo principal”, el imperialismo estadounidense, respondió con intervenciones militares como la de Bahía de Cochinos, golpes de Estado al estilo del orquestado contra Goulart en el Brasil... y la Alianza para el Progreso.

El 68 fue la culminación de todas esas victorias y derrotas, de las esperanzas frustradas de libertad individual y colectiva forjadas a golpes de audacia. El Partido Comunista no quedó al margen de ese proceso. En él siempre había quien veía con extrema suspicacia esos movimientos tan poco ortodoxos. El dogmatismo era fuertísimo. Pero muchos de sus miembros – sobre todo los jóvenes – participaron activamente en los movimientos y el Partido se comprometió sin reservas con el 68. Para quienes no participaron en ellos, es fácil llamarnos dogmáticos, soñadores, utópicos como otros que viven de añoranzas, insisten en erigir en mitos todas las ingenuidades y los errores del periodo. México y América Latina son muy diferentes a los de entonces. Pero la década de los sesenta sigue viva, porque la mayoría de sus aspiraciones de justicia social, democracia e independencia no han sido alcanzados.

Quizás sea prematuro enjuiciar la disolución del PCM. En México, la fusión de los comunistas con otras corrientes del socialismo era inevitable. Es más, tardó demasiado. En un país como el nuestro, los partidos y organizaciones de la izquierda, para ser masivos, tienen que ser ideológicamente, pluralistas. Lo que es y seguirá siendo materia de discusión es si los procedimientos adoptados fueron los más adecuados. En todo caso, no hay ya vuelta atrás. El PCM pertenece al pasado de la izquierda mexicana, su experiencia es parte inseparable de los movimientos socialistas de hoy y de mañana.

La “cuestión comunista” es uno de los grandes temas de la izquierda contemporánea. La revelación de los horrores del estalinismo, la momificación burocrática de las sociedades estatistas, los problemas sociales y económicos que las aquejan han nulificado el atractivo que ejercía. Los fracasos de los partidos comunistas de Francia y España y el *impasse* en el cual se encuentra el comunismo italiano, así como la marginación de muchos partidos comunistas en Latinoamérica y Europa Occidental ponen en entredicho el futuro histórico de la corriente originada en la Tercera Internacional. Y sin embargo, la última palabra no está dicha. Si el impulso de la Primavera de Praga, las luchas del pueblo polaco, la *Perestroika* de Gorbachev se despliegan con éxito; si la crisis cada vez más definida de la Nueva Derecha en Occidente abre oportunidades para una recomposición de la izquierda, las posibilidades de un movimiento socialista libre de transformismo socialdemócrata y monolitismo burocrático mejorarán.

Simone: *¿Deberíamos seguir luchando cuando el enemigo ya venció?*

El Ángel: *¿Está soplando el viento de noche?*

Simone: *Sí.*

El Ángel: *¿Hay un árbol en el patio?*

Simone: *Sí, el álamo.*

El Ángel: *¿Y sus hojas susurran cuando el viento las mueve?*

Simone: *Oh, sí.*

El Ángel: *Entonces debes seguir luchando aun cuando el enemigo haya vencido.*

BERTOLDT BRECHT: *Las visiones de Simone Machard.*

Entre crisis te veas

1974 ¿El fin de la *belle époque*?¹

Quizá sea porque la inflación y los impuestos han aumentado las preocupaciones de todos los que no comparten las ganancias de los monopolios, o bien porque los misterios de la sucesión presidencial tuvieron ocupada la imaginación especulativa de muchos. El hecho es que en México ha pasado casi desapercibida la trascendencia histórica de estos últimos dos años. Y sin embargo, un capítulo de la historia del capitalismo se ha cerrado. Otro nuevo se inicia.

En estos años, se ha afirmado con violencia inaudita el derrumbe de tendencias y situaciones que caracterizaron el sistema durante el último cuarto de siglo. Se produce una reestructuración gigantesca de la economía, la sociedad y la política que afecta inevitablemente a todos los países del llamado "mundo libre" y a las fuerzas políticas que en él actúan. Los problemas particulares de siempre se plantean ahora en un contexto diferente.

El fenómeno más visible es la crisis cíclica que se inició en 1974 y que aún se mantiene en todos los países imperialistas. Veintiún meses ininterrumpidos de descenso o estancamiento de la producción industrial; dieciocho millones de desocupados; quiebras al por mayor de empresas pequeñas y medianas; inestabilidad financiera y monetaria; inflación incontrolable. Sin discusión, la crisis más aguda desde 1929. Un proceso menos aparatoso pero probablemente más profundo que su antepasado.

Sin embargo, la virulencia del fenómeno cíclico es sólo un síntoma de males más hondos. La crisis abarca al conjunto del sistema, desde las fuerzas productivas (el caso de los energéticos) hasta la superestructura institucional e ideológica (debilitamiento de las fuerzas y partidos en el poder, entre otros). Por primera vez en la posguerra, se extiende a todos los países imperialistas a la vez y a las diferentes esferas de las relaciones internacionales.

Sólo es posible intentar un sondeo del futuro si se considera la combinación de la crisis cíclica con la agudización de una serie de problemas estructurales que aquejan al capitalismo contemporáneo. Es posible que a lo largo del año de 1976 se inicie una lenta recuperación en los principales países afectados. Es más, Estados Unidos parece ya haber entrado en esta fase del ciclo. Sin embargo, los elementos de crisis estructural no tienen una solución cíclica. Muchos de ellos seguirán actuando. No está a la vista el derrumbe del capitalismo. Tampoco es seguro que la crisis actual desemboque en un largo periodo de estancamiento. Pero existen razones suficientes para afirmar que la próxima década no se parecerá en nada al auge espectacular de los años 1960-1973.

Durante el prolongado *boom* de posguerra, la actividad revolucionaria de la clase obrera de los países capitalistas desarrollados pareció estancarse. Sus organizaciones sindicales y políticas se fortalecieron y en muchos lugares el

¹ Conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 3 de mayo de 1976.

número de obreros organizados aumentó. Pero sus luchas se centraban en las reivindicaciones económicas o en la exigencia de reformas que no afectaban la esencia misma del sistema capitalista.

Bajo esas circunstancias, proliferaron las teorías que declaraban superadas las contradicciones del “viejo” capitalismo y proclamaban el advenimiento de un nuevo orden social de abundancia, seguridad y plena ocupación sin que fuera necesaria la abolición del régimen burgués. Este mito fue cuidadosamente elaborado y ampliamente difundido en las teorías de la sociedad afluyente, la economista del bienestar, la sociedad industrial, la convergencia de los sistemas (capitalista y socialista), el capitalismo popular.

La crisis actual, en sus aspectos económicos y políticos, obliga a un nuevo examen de esas teorías. La idea de un capitalismo sin crisis clínica cobra visos de utopía; la plena ocupación sin socialización de los medios de producción demuestra ser imposible. La imagen del “capitalismo popular” se derrumba ante realidades incontrovertibles. En Estados Unidos – paradigma del éxito capitalista – los salarios reales están bajando hace varios años, el desempleo afecta a más de 40 por ciento de los jóvenes negros, muchos obreros están hundidos en deudas y los beneficios que les otorga el seguro de desempleo se agotan.

La crisis ha infundido nuevos bríos al movimiento obrero. Se multiplican las huelgas en todo el mundo. Ahí donde hay ascenso del movimiento popular, la clase obrera se coloca a la cabeza. En los países donde domina o dominó el fascismo, los obreros están en el centro de la lucha por la democracia. Las demandas económicas aparecen cada vez más ligadas a las políticas revolucionarias. La perspectiva de una alternativa socialista que se plantea en varios países se manifiesta indisolublemente ligada al destino de la clase obrera.

¿No son estas reflexiones oportunas para un año nuevo como el de 1976?²

DOS AÑOS DESPUÉS

Algunos economistas ubican su inicio en el último tercio de 1973. Otros, lo identifican con el brusco descenso de la producción en los primeros meses de 1973. Sea como fuere, en 1978 están por cumplirse cinco años del comienzo de la crisis estructural más profunda del capitalismo de posguerra. En México, sus efectos más agudos sólo se sintieron en el último trimestre de 1976. Eso explica la tardanza con la cual se ha captado la magnitud del fenómeno.

La crisis rebasa ampliamente los límites de la economía, afectando profunda e irreversiblemente la política y el pensamiento contemporáneo. La envergadura de los cambios es tal, que cuando todo eso termine, el mundo de posguerra habrá desaparecido.

² *El Día*, 8 de enero de 1976.

La sacudida de 1974-1975 fue una típica crisis capitalista de sobreproducción. Los niveles de producción volvieron rápidamente a sus niveles anteriores y luego la mayoría de los países capitalistas los han superado. Pero la recuperación no ha desembocado en una expansión similar a la de los años cincuenta y sesenta. Por el contrario, 1974-1975 fue la señal de inicio de un prolongado periodo depresivo cuyas manifestaciones más importantes, son las siguientes:

1. El ritmo de crecimiento del PNB de la mayoría de los países capitalistas se ha vuelto más lento.
2. La desocupación ha aumentado considerablemente, alcanzando en los principales países capitalistas altamente desarrollados, la alarmante cifra de 15 a 20 millones de personas.
3. Pese a la capacidad productiva ociosa y la reducción de la demanda global, los altos niveles de inflación se mantienen.
4. Continúa la inestabilidad de los mercados cambiarios y financieros.
5. El comercio internacional se ve cada vez más afectado por los profundos desequilibrios en la balanza de pagos de muchos países, principalmente Estados Unidos.
6. No se han producido una desvalorización del capital y una reducción de los salarios reales suficientes, para elevar las tasas de ganancia en forma significativa. Por eso es inevitable la explosión de nueva crisis, una de las cuales está quizá gestándose en estos días.
7. Los gobiernos burgueses y socialdemócratas no han podido aplicar una política acorde con la gravedad de las circunstancias. La actitud que prevalece es vacilante y conservadora. Si ya surgió el moderno Keynes de la economía burguesa, aún no se manifiesta. Si el proyecto para un nuevo modelo de desarrollo capitalista ha sido ya elaborado, todavía no se logra aplicar. Las estrategias "anticrisis" adoptadas se reducen a "administrar la crisis". Ninguna se propone la ocupación plena o los ritmos acelerados de desarrollo.

Para comprender la situación política y las tendencias ideológicas actuales, debe tenerse presente que las salidas económicas que pueden preverse, sólo son posibles a largo plazo. Las dificultades actuales continuarán todavía durante un lapso de tiempo bastante prolongado.

La agudeza y la prolongación de la crisis económica estructural plantea a la burguesía, en forma cada vez más apremiante, una disyuntiva fundamental. Para restituir el capitalismo su dinámica, es necesario permitir que la crisis o las crisis realicen hasta sus últimas consecuencias la labor destructiva que les está asignada. Pero una política de deflación, cierre de fábricas, bancarrotas y aumento masivo de la desocupación, llevaría a una violenta explosión social.

Por ahora, la crisis ha producido un equilibrio inestable entre las fuerzas del capitalismo y las que pugnan por una transformación socialista. Las primeras no

pueden adoptar las medidas drásticas que exigen las circunstancias de la economía capitalista. Las segundas no cuentan aún con la fuerza, ni encuentran el camino para inclinar decisivamente la balanza en favor del socialismo. El estancamiento puede durar todavía algún tiempo, pero en muchos países las rupturas son inevitables.

La crisis económica no ha hecho sino revelar un conjunto de contradicciones gestadas en el auge de los sesenta. Por eso ha sido anunciada y es acompañada de una profunda crisis del pensamiento contemporáneo. Tanto el pensamiento burgués, como el socialista están rehaciendo febrilmente su visión del mundo, porque el mundo está dejando de ser lo que fue. El primero no puede defender al capitalismo con las ideas de hace dos décadas: los revolucionarios no pueden cambiarlos sin someter el estalinismo y sus secuelas a una crítica radical.

Durante siglo y medio, los pensadores burgueses concibieron las ventajas del sistema capitalista como absolutas. Las crisis cíclicas, la desocupación, el desarrollo desigual, etcétera, eran consideradas como contingencias insignificantes frente a la prosperidad, el desarrollo, la libertad y la democracia que son la esencia del capitalismo.

En la posguerra, la actitud era ya mucho más cauta. La apologética directa del capitalismo tenía pocos partidarios inteligentes. Crisis, desocupación e inflación, eran consideradas por lo general como tendencias inmanentes al sistema. Pero el auge alimentaba la fe en la posibilidad de controlarlos, mitigando sus efectos más negativos. La defensa del sistema se ligaba a la posibilidad de reformarlo. El ideal no era ya el capitalismo tal cual, sino el capitalismo reformado. Las ilusiones del “capitalismo popular”, el *welfare state* y el “neocapitalismo” florecían. La “sociedad industrial” y la “convergencia de los sistemas” eran visiones optimistas.

Pero ya desde la segunda mitad de los sesenta el panorama comenzó a cambiar y en los últimos años se han transformado más aún. ¿Quién puede ser optimista con el capitalismo de los setenta? Ha llegado la hora del pesimismo y las visiones apocalípticas. Se reconoce con Spengler que la sociedad occidental está condenada. No se defiende ya al capitalismo, ni se cuestiona su inevitable fin, se niega simplemente que el socialismo marxista sea la alternativa a sus problemas. No se pretende demostrar la superioridad del capitalismo, sino la existencia del socialismo. No se oculta el fracaso del liberalismo, se intenta demostrar que el fracaso del marxismo es mucho más aplastante.

Se acepta que ésta es una época de grandes decisiones, pero se alteran los elementos de la contradicción: no se trata de elegir entre capitalistas y socialismo, sino entre libertad y Estado totalitario. Los bardos del “capitalismo popular” ceden su lugar a la danza macabra de los “nuevos filósofos”.

La crisis del comunismo es de otra índole. El socialismo avanza por medio de la revolución en la revolución. Marx es la superación del socialismo utópico: el

pensamiento revolucionario de Lenin. Rosa Luxemburgo y Liebnicht es la negación dialéctica de la Segunda Internacional: el socialismo revolucionario del periodo de crisis actual nace de la crítica del dogmatismo estaliniano y de la experiencia histórica de los países del socialismo embrionario.

Los problemas actuales del socialismo tienen también que ver con la crisis, pero no emanan de la decadencia del capitalismo, sino de la maduración de nuevas condiciones revolucionarias. No reflejan el destino de la burguesía, sino el futuro de los trabajadores. Su origen más profundo es la necesidad intrínseca de superar todos los obstáculos, rémoras, mitos y dogmas que impiden plantear las tareas del socialismo en los países capitalistas y también en los socialistas de acuerdo con los imperativos de hoy.³

EL “ESTADO SOCIAL” Y LA CRISIS

La ampliación de las funciones económicas del Estado burgués contemporáneo, ha creado indudablemente posibilidades para la corrección de los mecanismos del ciclo capitalista. El aumento del gasto estatal y su transformación en un elemento permanente de la economía capitalista; la creciente importancia de los “servicios sociales”; la creación de un amplio sector de empresas estatales unificadas bajo una dirección central; el desarrollo y refinamiento de los mecanismo de control de la circulación monetaria y el crédito, fueron procesos más o menos espontáneos cuyo objetivo no era influir en el ciclo. Durante cierto tiempo no existía algo que pudiera realmente llamarse una política anticíclica, pero hacia la segunda mitad de la década de los cincuenta, una vez que los mecanismos estaban ya funcionando, uno tras otro, los Estados fueron elaborando y aplicando políticas anticíclicas definidas.

Hoy nadie puede negar que el Estado burgués contemporáneo influye en el ciclo económico. Su acción ha logrado en varias ocasiones “cierta nivelación” del ciclo, el debilitamiento de la dinámica espontánea de la crisis, la disminución de niveles de sobreproducción y la violencia de sus expresiones.

Dejemos por ahora el estudio de las posibilidades que ofrecen los nuevos mecanismos de intervención estatal y planteemos la siguiente pregunta: *¿Cuáles son los límites objetivos de la intervención anticíclica del Estado en la fase actual del capitalismo monopolista?*

La crisis actual viene a demostrar una vez más que el Estado contemporáneo es incapaz de *impedir* el carácter cíclico del desarrollo de la economía capitalista y *preservar* a ésta de las crisis estructurales. La intervención del Estado en la economía se ha ampliado y refinado pero no puede liberarse de su limitación intrínseca: el ser un Estado cuyo objetivo principal es la conservación de la propiedad capitalista y el sistema económico que sobre ella descansa. Mientras

³ *Proceso*, número 96, 4 de septiembre de 1978.

éste exista, no es posible que el Estado oriente totalmente el proceso de reproducción.

Para superar el carácter cíclico del funcionamiento de la economía, el Estado tendría que: a) impedir a los monopolios el libre uso del capital-dinero acumulado; b) liquidar los sectores no monopolistas de la economía cuya actividad no puede ser programada. En el sistema actual lo primero es imposible porque implicaría un cambio fundamental en la relación entre el Estado y los monopolios y lo segundo también, porque debilitaría sustancialmente la base social del régimen.

El Estado burgués contemporáneo no cuenta con los medios necesarios para impedir las crisis cíclicas. Es sabido que la base material del ciclo es el movimiento del capital fijo. Además, en la economía contemporánea hay que considerar las inversiones de los consumidores en enseres domésticos de cuya renovación depende la demanda de bienes de consumo duradero. Supongamos que logre preverse con exactitud la demanda de estos sectores. El Estado puede aumentar sus actividades repartiendo a los monopolios pedidos en las ramas más críticas; puede instaurar exenciones fiscales para estimular la sustitución de las instalaciones productivas; reducir las tasas de interés para estimular las compras a crédito; tratar de contrarrestar la reducción en la producción de otras mercancías de consumo o servicios de infraestructura. Lo que no puede hacer, es adquirir las máquinas, los automóviles, las televisiones, las telas que no han podido ser realizadas. Aun adoptando todas las medidas aconsejables, el Estado no puede obligar a los capitalistas a reponer sus instalaciones, poco después de adquiridas ni a los consumidores a deshacerse de sus bienes durables apenas comprados. En el campo de la *base material* del movimiento cíclico, el Estado es impotente.

La crisis actual adopta rápidamente una envergadura mundial. Sus efectos se expresan inmediatamente en la economía internacional que no es, ni mucho menos, una suma de las economías nacionales. Por eso, las crisis no pueden ser combatidas exclusivamente por medidas individuales en cada país, pero las contradicciones imperialistas frenan, retardan e incluso impiden la adopción de medidas adecuadas a nivel de la economía mundial.

Otro límite es la imposibilidad de ligar permanentemente a los monopolios a una programación económica de mediano alcance. Así lo prueban los fracasos sufridos en los intentos de programación, incluso en los países como Francia y Japón, en los cuales esta práctica se ha desarrollado al máximo. Los planes se cumplen siempre en exceso o por debajo de los objetivos señalados. Esto es así porque los monopolios, que también participan en la elaboración de las cifras de control, prefieren aprovechar la coyuntura que tratar de suavizarla y así abandonan rápidamente los objetivos fijados. En su esfuerzo por acrecentar sus ganancias, cuando la coyuntura es más favorable que lo previsto, aumentan su producción y sus inversiones por encima de los objetivos fijados y cuando sucede lo contrario, los reducen más drásticamente de lo previsto. Además, los casos en

los cuales la política anticíclica coincide con los intereses de todos los grupos monopolistas, son más bien excepcionales. Por lo general cada medida despierta inmediatamente la oposición de algún sector de la clase dominante. El aumento o reducción de los impuestos, los cambios en las tasas de interés y de descuento, los aumentos en los pedidos a determinados sectores de otros, el aumento o disminución del presupuesto armamentista o de trabajos públicos, producen serios choques políticos dentro de la clase gobernante que pueden impedir la adopción de las medidas adecuadas o reducir su oportunidad.

La conveniencia de las medidas anticíclicas dependen fundamentalmente de la capacidad de prognosis del Estado. Pero los instrumentos con que éste cuenta por ahora para este fin, son todavía rudimentarios. Últimamente, se han comenzado a utilizar modelos econométricos para el estudio y previsión de la coyuntura. Pero debido a la resistencia de las empresas, no es posible obtener información estadística veraz respecto a factores fundamentales de la economía o bien ésta llega tarde.

La crisis actual – la más virulenta de la posguerra – pone a prueba las posibilidades de acción anticíclicas del Estado y vendrá a exhibir las limitaciones del *welfare state* surgido en la época de auge.

Crisis y Guerra⁴

La historia enseña que existe una relación estrecha entre crisis y guerra. La primera conflagración mundial estalló después de las crisis de 1907 y 1913. La segunda tuvo como preludio las crisis de 1929-33 y 1937-39.

Para iniciar un periodo de ascenso, el capitalismo necesita renovar su capital fijo y la guerra puede ser una de las formas de su renovación. La militarización total de la economía y la destrucción por medio del aparato económico no utilizable es una de las vías más inhumanas pero más efectivas para lograr ese objetivo.

Las crisis acentúan las tendencias más reaccionarias en el interior de los países capitalistas y propician la agresividad en el exterior. El primer paso de Hitler hacia el poder fue la obtención del apoyo de los grandes industriales alemanes de Dusseldorf y el segundo, la adopción de actitudes agresivas hacia sus vecinos.

El anticomunismo de los nazis fue acogido con simpatía por las clases gobernantes de las potencias occidentales. Por eso toleraron la política intervencionista de Hitler hacia Austria, España y Checoslovaquia.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la militarización de la economía se ha transformado en una parte orgánica de la estructura del capitalismo. Es uno de los principales medios con que cuentan muchos monopolios para elevar sus tasas de ganancias y es considerada también como instrumento “anticíclico” eficaz. El armamentismo representa una demanda estable para los productores en la forma de compras estatales que absorben la mayor parte de la producción de muchas de las trasnacionales más conocidas en el mundo. La Guerra Fría y las guerras de Corea y Vietnam aumentaron enormemente la demanda de armamentos, consolidaron la posición de estas corporaciones y aumentaron la dependencia de la economía capitalista de la rama de los armamentos. Así, por ejemplo, los gastos militares de los países de la OTAN se multiplicaron por seis durante el periodo 1949-1971. El ascenso del armamentismo, sobre todo en Estados Unidos, intensificó la fusión de los círculos militares con los grandes monopolios industriales y ha conformado lo que ahora se conoce como los “complejos militar-industriales”.

A raíz de la crisis actual, es de esperarse que la tendencia al armamentismo se acentúe y las agresiones se multipliquen. Muchas trasnacionales esperan preservar sus ganancias con base en pedidos militares, por eso se oponen al desarme, la disolución de los pactos militares y la distensión, a la vez que promueven aventuras bélicas de todo tipo.

Sin embargo, la guerra no elimina directamente la crisis de la economía y hoy “la guerra ya no puede ser considerada una prolongación de la política por otros

⁴ *Proceso*, número 497, 12 de mayo de 1986.

medios". Los círculos más agresivos saben perfectamente que en las condiciones de la guerra nuclear, el fin de ésta puede ser el holocausto.

Por eso la gran contradicción de nuestra época es que a medida que la crisis se acentúa, la guerra mundial se hace más necesaria para restablecer las condiciones de la acumulación ampliada, pero al mismo tiempo, el desarrollo técnico de las armas contemporáneas la vuelve menos factible. El resultado es una política de máximo armamentismo sin confrontación final: una paz armada al borde de la guerra.⁵

1936-1986

La situación internacional de los años 1985-86 comienza a parecerse peligrosamente a la de 1935-36.

Reagan lanza el proyecto Guerra de las Galaxias, amaga militarmente a Nicaragua, invade Granada, lleva a cabo una expedición "punitiva" contra Libia, impone en Tokio resoluciones sobre el terrorismo y el accidente de Chernobyl. Al mismo tiempo, se encuentra con Gorbachov para hablar de desarme y promueve una democratización conservadora en Filipinas, Chile y México.

La audaz combinación de agresiones consumadas y gestos conciliatorios no encuentra una respuesta decidida. El mundo parece hipnotizado por los pases magnéticos del *Gran comunicador Mario y el mago*. Mientras la política de fuerza de Reagan socava el equilibrio establecido después de la guerra de Vietnam, los rivales de Estados Unidos aparecen empantanados en una política de apaciguamiento cada vez más vacilante. En la economía, la crisis arrecia. Deudas externas impagables, derrumbe de los precios del petróleo y las materias primas; inestabilidad cambiaria; desequilibrios comerciales en un sistema internacional cada vez más vulnerable.

En Estados Unidos el síndrome de Vietnam es superado y el espíritu belicista gana terreno. En el resto del mundo, el movimiento pacifista declina, las actitudes de expectación pasiva se generalizan.

Los nazis subieron al poder en Alemania en 1933, en medio de una crisis económica mundial extraordinariamente severa. Durante los primeros dos años, su política exterior fue cauta. Querían tranquilizar a las otras potencias, recelosas de los designios de Hitler y lograr el consenso popular para una política belicista. Para ello, recurrieron a una hábil combinación de amenazas dosificadas y acciones sorpresivas con iniciativas de negociación y declaraciones pacifistas.

Pero hacia 1935, el poder absoluto en el interior del país estaba asegurado y el complejo económico-militar se estaba reconstruyendo. Entonces Hitler no dudó en revelar sus verdaderas intenciones. Estaba convencido que una hábil política de chantaje, de hechos consumados y promesas de paz, neutralizaría a las potencias

⁵ Conferencia en la Facultad de Economía, UNAM, junio de 1976.

occidentales. Consideraba que, decadentes, éstas preferirían replegarse palmo a palmo a arriesgar una guerra mundial. Para esa política, logró rápidamente el apoyo de la Italia fascista.

Tres son los momentos iniciales de esta línea que había de desembocar en la Segunda Guerra Mundial: la anexión de Renania (marzo de 1935), la agresión a Abisinia (octubre de 1935) y la Guerra Civil Española (julio de 1936). En marzo de 1935, infringiendo flagrantemente los Tratados de Versalles que habían hecho de Alemania un país sin ejército, Hitler instauró el servicio militar obligatorio e inició la formación de una gran fuerza aérea. Un año más tarde quedó consumada la ruptura con los tratados: 21 días antes de las elecciones para el Reichstag, el 8 de marzo de 1936, las tropas alemanas ocuparon la provincia desmilitarizada de Renania. Contra la opinión de sus generales, que consideraban que no podían hacer frente a una reacción militar francesa, Hitler apostó a la debilidad política de una Francia dividida y acertó. Era la apoteosis. En las elecciones, los nacionalsocialistas obtuvieron 99 por ciento de los votos. Inmediatamente, ofrecieron a los países más afectados por la ocupación, Francia y Bélgica, la firma de un pacto de no agresión.

A principios de 1935, el gobierno fascista italiano inició una intensa campaña contra los “horrores” del régimen interno de Abisinia, encabezado por el Negus Haile Selassie. El 3 de octubre, sin declarar la guerra, los italianos invadieron Etiopía. Un ejército moderno de 400 mil hombres con tanques y aviones se lanzó contra las mal armadas tropas de Selassie. Mussolini, que necesitaba una victoria estrepitosa, ordenó bombardeos masivos y el uso de gases. Seis meses más tarde, el comandante de las tropas italianas, general Badoglio, entró en la capital de Etiopía, por lo cual obtuvo el título de duque de Addis Abeba. En Italia, el prestigio de Mussolini llegó a su punto culminante. La propaganda oficial aseguraba que Italia podría resistir por sí sola el ataque de 50 naciones. Las sanciones aprobadas por las Naciones Unidas contra el agresor fueron presentadas como un “intento de estrangular a la nueva Italia”.

A mediados de 1936, se inició la Guerra Civil Española, que había de terminar con la primera gran victoria del fascismo. Esta guerra cimentó la alianza entre Alemania e Italia, y creó en los países del eje la sensación de que las condiciones para alterar definitivamente la relación de fuerzas en Europa, estaban dadas.

La guerra de España adquirió rápidamente un carácter ideológico y social universal. Todas las fuerzas conservadoras se volcaron al apoyo de Franco. Alemania envió cerca de 10 mil soldados (sobre todo aviadores) y un abundante material bélico. Mussolini mandó 50 mil hombres del ejército regular italiano, disfrazados de “voluntarios”, 800 aviones, 2 mil cañones y 80 unidades de marina.

Inglaterra y Francia en cambio aplicaban una política de apaciguamiento. Ante la ocupación de Renania, Inglaterra negoció unilateralmente, legitimando la acción alemana y Francia y URSS no lograron ponerse de acuerdo para responder a la

provocación. Frente al ataque a Abisinia, la Sociedad de Naciones declaró agresora a Italia e impuso sanciones económicas, pero seis meses más tarde las levantó y las potencias occidentales reconocieron la anexión.

Pero la ceguera de estos países se manifestó sobre todo en España. El primero de agosto de 1936, con la esperanza de evitar una ayuda masiva al fascismo español, el gobierno socialista francés de León Blum propuso a las potencias una política de “no intervención”. Se adhirieron a ella no sólo la Gran Bretaña sino también Alemania e Italia. Pero mientras las dos últimas violaron sistemáticamente los acuerdos, las potencias occidentales limitaron realmente su ayuda a material no bélico. La única potencia que ayudó militarmente a los republicanos fue Unión Soviética.

La Segunda Guerra Mundial se produjo porque Francia e Inglaterra subestimaron la determinación de las ideas expuestas por Hitler en *Mein Kampf*. Y porque éste estaba convencido que las potencias occidentales seguirían ad infinitum la política de apaciguamiento. El precio pagado en vidas humanas fue incalculable.

Existen, es verdad, diferencias fundamentales entre la situación actual y la de hace cincuenta años. Estados Unidos no es un país fascista y la política expansionista de Reagan encuentra una recia oposición. La posibilidad de una guerra mundial tiene como límite espeluznante el holocausto nuclear. La experiencia de Vietnam recuerda que las guerras coloniales pueden tener un alto precio. Sin embargo, los paralelismos son alarmantes. La crisis estructural de la economía que se inició hace doce años parece no tener fin. El peligro de una guerra local de grandes proporciones crece y la posibilidad de un accidente atómico no puede descartarse. Y sin embargo, nadie parece querer levantar el guante lanzado por el presidente de Estados Unidos.

La economía mexicana cuesta abajo⁶

Los años de 1971-1975 representan para la economía mexicana un periodo de inestabilidad y dificultades crecientes. La tasa de crecimiento del producto nacional bruto, que en el sexenio anterior era de 6.8 por ciento, ha descendido a 5.9 por ciento, y el crecimiento per cápita se ha reducido más aún: de 3.5 por ciento a 2.3 por ciento. El desempeño de la economía fue sumamente desigual: 1971 y el primer semestre de 1972 fueron años de recesión; luego vino una recuperación que duró dos años, para desembocar en un nuevo periodo de desaceleración a partir del segundo semestre de 1974, que se extiende hasta el presente.

La situación es particularmente grave en la agricultura. El valor de la producción a precios constantes de 1975 fue superior sólo en 9 por ciento a la de 1965, mientras que la población del país ha crecido en más de 40 por ciento en el mismo periodo.

La industria se desarrolló en forma desigual. Mientras que algunas ramas lo hacen a un ritmo superior al del sexenio pasado, sectores básicos como la petroquímica, la electricidad, la construcción y la industria de transformación han conocido disminuciones sustanciales en sus tasas anuales de crecimiento.

En el sector externo, la inestabilidad y la dependencia se han acrecentado a pasos agigantados. La deuda pública externa se ha triplicado. En 1970 ascendía a 47 mil millones de pesos y en 1975 alcanzaba la cifra de 147 mil millones. Mientras que en 1970, el déficit de la balanza de mercancías y servicios ascendía a unos 19 mil millones de pesos, en 1975 era de 52 mil millones. En 1970, las empresas con inversión extranjera enviaron a sus matrices, por concepto de dividendos, intereses y otros pagos, unos 4.5 mil millones de pesos; en 1974 eran 10.6 mil millones y en 1975 ascendían a 12 mil millones.

La inflación llegó a niveles sin precedentes, sobre todo en 1973 y 1974, y si en 1975 se observa cierta disminución de las tendencias inflacionarias, eso sólo se debe a la recesión en la economía.

El informe anual del Banco de México sobre la actividad económica del país en el año de 1975, visto en su conjunto, confirma las tendencias generales ya apuntadas.

El producto nacional bruto creció en 3.8 a 4.2 por ciento, contra 7.6 por ciento en 1973 y 5.9 por ciento en 1974.

La producción manufacturera aumentó 4 por ciento, contra 8.7 por ciento en 1973 y 6.7 por ciento en 1974. Se mantuvo el estancamiento de la construcción, y las ramas de petróleo, petroquímica y energía eléctrica crecieron más despacio que en el año de 1974.

⁶ *El Día*, 4 de marzo y 1° de abril de 1976.

La agricultura acentuó sus tendencias contradictorias: el aumento de la producción para el mercado interno se vio nulificado por la baja en la producción de algodón para la exportación.

El comportamiento de ramas claves para la dinámica actual de la economía mexicana, como son la de bienes de consumo duradero y los bienes de inversión, fue decepcionante. La primera estuvo estancada y la segunda creció a un ritmo inferior al de 1974.

Aun cuando en algunos renglones el segundo semestre del año pasado fue mejor que el primero, los síntomas de recuperación son demasiado débiles para prever un mejoramiento notable de la coyuntura antes del último tercio del año de 1976.

Pero existe un indicador de la gravedad estructural de la situación ante el cual todos los demás índices palidecen y se vuelven insignificantes: el de la desocupación y la subocupación, que se mantienen a niveles inauditos.

En nuestro país se contabilizan más cuidadosamente las actividades de los bancos que las actividades de los trabajadores. En realidad, no existen cifras fidedignas sobre la ocupación. Sin embargo, algunas declaraciones oficiales pueden dar una idea aproximada de la magnitud del problema: Saúl Trejo, de la Comisión de Salarios Mínimos, calcula que 6 de los 15 millones de mexicanos que forman la fuerza de trabajo están desocupados o subocupados. Declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, ex secretario de Trabajo, confirman esas cifras, y el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, estima en 5 millones el número de los subocupados. En el último tercio del siglo XX, una economía que condena a 4 de cada 10 de sus ciudadanos a la subocupación solo puede ser considerada seriamente enferma. Ningún éxito parcial puede ocultar este hecho fundamental que refleja, en este momento de crisis, la verdadera esencia clasista de un desarrollo económico tan pródigo para una minoría y tan terriblemente cruel para los verdaderos creadores de toda la riqueza de nuestro país.

Los síntomas son ya demasiado evidentes para que alguien pueda negarlo. México participa de la crisis. En nuestro país, como en el resto del sistema, no se trata solo de crisis cíclica, sino de una crisis de estructuras. La superación de las tendencias desastrosas de 1974-75 no representa una salida.

La vacilante reanimación cíclica de la economía no es suficiente para liberarnos de la monstruosa desocupación, la capacidad ociosa de la industria, el estancamiento de la inversión, la creciente deuda exterior, la crisis agrícola, la inflación, etcétera. Al contrario, se multiplican los signos que demuestran que en México ha terminado un periodo de auge y desarrollo acelerado capitalista y se inicia otro de problemas y desequilibrios cada vez más graves que durará un lapso prolongado.

Aquí, como en el resto de los países capitalistas, los círculos dominantes insisten obstinadamente en que el origen de la crisis era externo; todavía no han

renunciado definitivamente a ese argumento. Pero las fuentes de la crisis no pueden ser a la vez externas a todos los países y presentarse en cada uno de ellos. Las causas radican en el sistema en general y en cada economía nacional a la vez. *Por eso todos los países capitalistas participan en la crisis, pero cada uno de ellos lo hace en forma desigual, particular, distinta.* En cada uno de ellos empieza a resquebrajarse la estructura y el modelo de desarrollo predominante en la posguerra, pero cada caso tiene no sólo peculiaridades nacionales sino que se refiere a modelos diferentes, niveles de desarrollo distintos y, por tanto, el contenido concreto de la crisis es otro. *Por eso la lucha contra los efectos de la crisis, para impedir que sus consecuencias recaigan sobre los trabajadores, por una salida democrática y avanzada, es una tarea de carácter fundamentalmente nacional.* Para responder al agravamiento de la crisis general del capitalismo, las múltiples crisis de estructura del sistema, las fuerzas democráticas y revolucionarias de cada país deben desarrollar un programa adecuado a las condiciones y posibilidades concretas que privan en él, sin olvidar naturalmente los objetivos e iniciativas de carácter internacional. Mientras más ajustados sean los programas a las condiciones locales, mayores serán las posibilidades de impedir que los monopolios internacionales y las burguesías locales impongan soluciones reaccionarias opuestas a los intereses de los trabajadores de todo el mundo.

¿Cuáles son las características específicas, nacionales de la crisis mexicana? Sería jactancioso pretender que se tiene una respuesta acabada a esa pregunta. Sin embargo, podemos señalar algunos de sus rasgos más salientes.

La economía mexicana sigue funcionando en buena parte como un sistema dirigido hacia el exterior. Pese a las innumerables declaraciones oficiales contra la dependencia en el pasado y el presente, dos de los motores fundamentales siguen siendo la importación de capital extranjero (en forma de inversiones directas e indirectas) y las exportaciones. La primera sirve para el servicio de la deuda externa y nuevas inversiones; las segundas deben proporcionar salidas a varias ramas de la producción, para las cuales el mercado interno reducido por la estratificación social es insuficiente. En un periodo de crisis financiera, contracción del mercado internacional y restricciones generalizadas a las importaciones no esenciales, este sector se vuelve extraordinariamente errático.

El proceso de industrialización que conoció México en los años 1940-1970 no estuvo basado en la creación de mercados internos masivos. La reproducción de estilos de vida propios a los países imperialistas entre la burguesía y la pequeña burguesía, produjo una concentración del ingreso muy elevada. Así, 60 por ciento de la población está excluida de los beneficios del desarrollo industrial y el aumento de la productividad. Debido a que la acumulación de capital en el sector que produce para los ricos es más acelerada que en el resto de la economía, el ritmo de concentración del ingreso y la constitución de grandes monopolios sigue acentuándose. La crisis viene a inflar más aún el ejército de los que no tienen

ocupación fija y los que sobreviven a niveles de subsistencia. Crecen las diferencias entre ricos y pobres, se acentúa, por un lado, la prepotencia de los monopolios y, por el otro lado, el atraso de importantes sectores de la economía que proporcionan trabajo a la mayor parte de la población.

La crisis económica va aparejada a una crisis política. Las formas de dominio antidemocráticas y autoritarias que caracterizaron el periodo de "auge", exhiben fisuras cada vez más profundas.

La encrucijada ante la cual se encuentra el país es la siguiente: continuar por la misma vía de desarrollo y capear mal que bien el periodo de depresión y crisis aplastando y reprimiendo las exigencias populares o bien optar por un modelo de desarrollo más democrático e independiente, apoyándose en el movimiento en ascenso de los trabajadores del campo y de la ciudad. Todavía durante un tiempo, los platillos de la balanza podrán seguir vacilando. Pero a medida que la crisis se agudiza y prolonga, tendrán que inclinarse inexorablemente hacia un lado.

La crisis ubica a México en una encrucijada: mantenerse en una vía de desarrollo que beneficia exclusivamente a la consolidación y expansión de los monopolios autóctonos asociados al capital extranjero o internarse por un camino más independiente y democrático, que considera los intereses de los trabajadores y las capas medias de la población.

Las posibilidades de conciliación entre los dos caminos serán en los años venideros, cada vez más reducidas. Sólo una sucesión de milagros económicos y políticos internacionales y nacionales pueden mantener al país en la maraña de equilibrios que han caracterizado la política del presidente Echeverría. A medida que se prolongue y/o se agudice la crisis, será inevitable la adopción de una serie de medidas que impongan un curso más definido al proceso.

Es necesario, ante todo, establecer claramente las premisas del problema. Lo que se decide actualmente en el país no es la alternativa entre capitalismo y socialismo. La fuerza política de los trabajadores no es suficiente para plantear la cuestión en esos términos. México no está aún maduro para una nueva revolución. Sólo una confusión lamentable entre ideología y realidad, entre proceso histórico y momento táctico puede explicar una visión tal de la situación presente.

Sin embargo, la forma como la izquierda revolucionaria responda al reto actual tiene mucho que ver con el futuro de México. Una de las características de los últimos años es el debilitamiento de la hegemonía de la ideología dominante. Sus concepciones del presente y el futuro de México son cuestionadas cada vez más persistentemente. Se multiplican las actitudes críticas no solo hacia las ideas políticas, sino contra todo el proyecto histórico que ha impuesto al país.

Desde los años treinta no había existido una oportunidad tan notable de ganar sectores importantes del pueblo para una alternativa histórica diferente y opuesta a la de la burguesía. La elaboración de un programa realista y adecuado para salir de la crisis actual, de un proyecto viable que permita hacer confluír no sólo a las fuerzas políticas de oposición de izquierda *sino, sobre todo, a las corrientes y movimientos que no han llegado a tener una expresión política o se mueven dentro de los organismos tradicionales controlados por el Estado*; la adopción de una táctica que permita sumar el máximo de fuerzas para inclinar al país hacia una vía de democracia e independencia, pueden ser el inicio de la conformación de una gran alternativa política; de un bloque de fuerzas en el cual la ideología socialista sea hegemónica.

Para llegar a eso, la izquierda revolucionaria (y no hablo solo de la “vieja” sino también de la llamada “nueva izquierda”) debe liberarse de todos los fantasmas del pasado; superar la demonología de los sectarismos, los dogmas, los esquemas importados, las discusiones escolásticas, las adhesiones incondicionales a la política de tal o cual país socialista, que han permitido que la burguesía la arrincone en los suburbios de la vida nacional. Debe poner los pies firmemente en tierra mexicana, enraizarse profundamente en la cultura popular, en las aspiraciones actuales de los trabajadores, en las peculiaridades y particularidades de nuestra vida política y cultural. El hecho de que la crisis mexicana forme parte de la crisis del capitalismo no significa que podamos derivar mecánicamente de la situación mundial un plan concreto para México.

La lucha por elaborar una salida democrática viable a la crisis actual que haga retroceder a los monopolios nacionales y extranjeros, que debilite el despotismo que corroe la vida política del país, que mejore las condiciones de vida materiales y espirituales del pueblo, puede transformarse en el punto de convergencia entre el ideal de un futuro socialista para México y el movimiento de masas. No lo dejemos escapar.

Emigración y capital⁷

Los espaldas mojadas están de moda. El *Times* escribe sobre ellos. La prensa mexicana publica largos reportajes. Mondale habla sobre la Ley Simpson-Mazzoli y el gobierno mexicano hace declaraciones cautelosas y ambiguas.

¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Se trata de un fenómeno coyuntural? De ninguna manera.

El trabajador inmigrante indocumentado mexicano es un elemento de la mexicana, desde hace cerca de un siglo. En algunas zonas de ambos países —sobre todo en las fronteras— representa un porcentaje importante de la fuerza de trabajo. En las ciudades fronterizas y algunas regiones agrícolas de Estados Unidos, prácticamente todas las empresas emplean inmigrantes mexicanos indocumentados. En México, cientos de miles de familias derivan parte o todos sus salarios de alguno de sus miembros que emigra regularmente a Estados Unidos o se establece, sin documentos, en aquel país.

Aun cuando no ha sido posible cuantificar con exactitud la migración, los estudios más conservadores calculan entre 1.5 y 2.5 millones el número de indocumentados mexicanos que residen en Estados Unidos. Los más desorbitados llegan, inclusive, a la cifra de 4 millones. El número de personas que cruza la frontera en esas condiciones, en los últimos quince años, ha ido en aumento y actualmente no debe ser menor al medio millón anual.

En periodos de auge económico el problema del inmigrante indocumentado tiende a ser silenciado. Los medios estadounidenses hablan poco de ellos y los mexicanos se contentan con verter alguna lágrima de cocodrilo sobre la suerte de “nuestros infortunados paisanos”. Pero en momentos de recesión o crisis, los órganos de difusión masiva de ambos países se ocupan profusamente del tema. Es decir mientras la migración indocumentada cumple con eficacia las funciones que le han sido asignadas por el capital de ambos países, nadie se acuerda de ella, por más terrible que sea para sus víctimas. En periodos de crisis apenas la migración adquiere dimensiones indeseables para alguna de las partes, el tema es ampliamente debatido.

Así, el lector puede recibir la impresión de que la migración llamada “ilegal” es un fenómeno indeseable, un mal necesario tanto para los círculos empresariales y oficiales de Estados Unidos, como para los mexicanos. Nada más contrario a la verdad. La migración indocumentada es un fenómeno altamente necesario y benéfico tanto para el capital norteamericano como para el mexicano. Los dos sistemas económicos lo producen. Es más, hoy casi todos los países capitalistas altamente desarrollados cuentan con un sector de trabajadores inmigrantes provenientes de países de menor desarrollo. El *gastarbeiter* de Alemania Federal y el *illigal alien* de Estados Unidos no son sino ejemplo de un fenómeno

⁷ *Proceso*, número 404, 30 de julio de 1984.

generalizado en los países altamente industrializados en la presente etapa de su desarrollo. Un fenómeno que las clases dominantes fomentan y toleran, a la vez que hacen blanco de lamentaciones morales y de vez en cuando de alguna denuncia tan encendida como estéril.

En Estados Unidos los trabajadores no documentados son de 4 a 12 millones o sea entre 6 y 14 por ciento de la fuerza de trabajo. Hacia fines de la década pasada, en Alemania Federal, los trabajadores extranjeros representaban 9.8 por ciento de los asalariados; en Francia 8 por ciento; en Bélgica 7.2 por ciento; en Gran Bretaña 6.9 por ciento y en Suiza 29.8 por ciento.

La presencia de trabajadores inmigrantes, nada tiene que ver con la demanda absoluta de mano de obra. El flujo de inmigrantes acompaña, y muchas veces crece paralelamente, al aumento de la desocupación en los países receptores. Casi siempre, inmigración y desempleo coexisten. Obedece más bien a otra lógica: la lógica de la acumulación de capital.

En el sistema capitalista, existe una tendencia crónica de la tasa de la ganancia a descender. En épocas de crisis esta tendencia se vuelve particularmente aguda. Una de las medidas fundamentales para contrarrestarla, es la elevación del nivel de explotación y esta se logra ya sea mediante una productividad más alta, resultante de innovaciones tecnológicas o por medio de la intensificación de la explotación. Este último objetivo se alcanza por dos medios fundamentales: la reducción del costo de la fuerza de trabajo y el aumento de la duración y/o la intensidad del trabajo. La inmigración está íntimamente ligada con ambas medidas. Los salarios que recibe el inmigrante por el mismo trabajo son sustancialmente más bajos y las jornadas de trabajo más largas. El capital del país desarrollado se ahorra los costos de “crianza” y jubilación y parte de los costos de reproducción (excepción hecha de los envíos a las familias en el país de origen). Debido a la intensidad de la explotación, la capacidad productiva de los inmigrantes es agotada rápidamente y después estos son arrojados a los márgenes de la sociedad o regresados a sus países de origen.

El “indocumentado” rara vez compite con el trabajador norteamericano. Aun cuando sea contratado en industrias, sus condiciones de vida y de seguridad en el trabajo pertenecen a un submundo que está muy lejos de los promedios históricos logrados por la clase obrera del país vecino. Sin embargo, su presencia es usada para presionar sobre los niveles de vida y de organización existente en el seno de la clase obrera local.

La emigración no es menos benéfica para el capital mexicano. Durante casi medio siglo, nuestro modelo de desarrollo ha estado basado en una elevación permanente de la relación capital-trabajo en las grandes empresas modernas y el atraso, decadencia e incluso ruina, de la pequeña y mediana industrias. Esto ha producido un desempleo y un subempleo gigantescos. Una población que para el capital es totalmente superflua. Millones de mexicanos que “ni producen ni

consumen” y cuya desaparición sería acompañada por el capital con un inmenso suspiro de alivio. Esto explica la posición de los últimos gobiernos mexicanos hacia la emigración. En una entrevista para el *New York Times* en 1977, López Portillo reconocía que la migración “ilegal” a Estados Unidos funciona claramente como una válvula de seguridad económica y política. Los subocupados (entre 30 y 45 por ciento de la fuerza de trabajo) son el símbolo del fracaso de un modelo de desarrollo y los emigrantes sin documentos, su manifestación más dramática. Por eso, al mismo tiempo que el gobierno mexicano hace algunas declaraciones, se guarda muy bien de tomar medidas serias para defender a las víctimas.

Por lo general, sobre este tema, existe una colusión entre el gran capital norteamericano y el mexicano. Los conflictos sólo surgen en épocas de crisis, en que este último puede estar interesado en propiciar procesos migratorios, mientras que el norteamericano prefiere frenarlos. Leyes como la Simpson-Mazzoli no se proponen de ninguna manera acabar con el fenómeno de la inmigración indocumentada. Su verdadero propósito es presionar al inmigrante para que acepte condiciones todavía más onerosas a las actuales y preparar el ambiente para expulsiones masivas en caso de una coyuntura económica extraordinariamente adversa.

El problema de la inmigración indocumentada se resuelve así no en una contradicción entre norteamericanos y mexicanos, sino en una contradicción entre capital norteamericano y mexicano, por un lado, y por clases obreras a ambos lados del río, por el otro.

El capitalismo monopolista en México⁸

La historia del capitalismo en México, como en otras partes del mundo, es la historia de la formación de un mercado nacional, es decir, de la transformación de los medios de producción en capital y de la fuerza de trabajo en mercancía.

Las características específicas del capitalismo en cada país surgen de la forma concreta en que se constituye el capital comercial y el capital industrial; de la participación de las masas trabajadoras en la destrucción del viejo régimen; de las particularidades de la inclusión del país en el sistema capitalista internacional.

En México, durante el periodo de transición del siglo XIX, predominó tanto en la agricultura como en la industria, la vía reaccionaria del desarrollo del capitalismo. Los primeros intentos de industrialización fueron promovidos por el capital comercial íntimamente ligado al viejo régimen. En el último tercio del siglo, el desarrollo de los ferrocarriles, la minería, la industria de energéticos y parte de la industria de consumo estaban en manos de consorcios internacionales. La hacienda semifeudal inició su metamorfosis capitalista sin una transformación radical de las relaciones de producción. Las revoluciones de Independencia y Reforma aceleraron el proceso por medio de la liquidación de los restos de despotismo tributario y del poder corporativo de la Iglesia, así como por la consolidación del Estado nacional. Sin embargo, no fueron suficientes para alterar la vía del desarrollo.

La acción de los campesinos, los obreros y la pequeña burguesía radical en la revolución de 1910-1920 alteró profundamente este proceso. Por primera vez en la historia de América Latina se manifestaron tendencias poderosas a un desarrollo revolucionario del capitalismo. Se produjo una reforma agraria burguesa. Los terratenientes fueron separados del poder y la burguesía afianzó su hegemonía en el Estado. Este comenzó a intervenir activamente promoviendo el desarrollo capitalista y el ascenso de una burguesía proveniente del agro, que rápidamente se transformó en industrial y luego en monopolista.

2

La historia del capitalismo *como modo de producción dominante* se inicia en México a principios del siglo XX. El carácter relativamente reciente de su dominio determina algunas de sus particularidades, como son su difusión incompleta, la coexistencia contradictoria de diferentes niveles de desarrollo y las sobrevivencias de otros modos de producción.

Las relaciones capitalistas se afirman en nuestro país cuando el sistema mundial del capitalismo comienza a declinar y a ser sustituido por sociedades poscapitalistas. Por eso el ascenso de las nuevas relaciones tiene un carácter contradictorio. *Progresista en relación al modo de producción precapitalista que*

⁸ *Historia y Sociedad*, segunda época, número 17, 1978.

las antecederon en el ámbito nacional, es reaccionario con respecto a las tendencias generales de la economía mundial. El capitalismo mexicano exhibe en forma temprana, manifestaciones de parasitismo y putrefacción, así como la incapacidad de superar radicalmente una serie de obstáculos.

El capitalismo mexicano se ha desarrollado en condiciones de supeditación y dependencia. El imperialismo está infiltrado en todos los poros de su sistema, acumulando impedimentos a su desenvolvimiento y deformando su estructura. A cada fase del desarrollo capitalista, corresponden formas de subordinación específicas. La dependencia de México se agrava con los problemas que se derivan de nuestra ubicación fronteriza con el país imperialista más poderoso del orbe.

3

La economía mexicana es en la actualidad una economía heterogénea en la cual pueden distinguirse cinco sectores: a) el monopolista, de capital extranjero y autóctono; b) el sector estatal; c) las empresas medias de capital mexicano; d) un mar de pequeñas empresas mercantiles, y e) residuos precapitalistas que tienden a desaparecer. Los cinco sectores se encuentran articulados en un solo sistema, se entrelazan e influyen mutuamente, pero los dos primeros son, sin lugar a dudas, los más dinámicos y modernos.

La sociedad mexicana ha sido heterogénea desde que el capitalismo se instauró como modo de producción dominante. Pero los sectores que la componían y la importancia de cada uno de ellos ha ido cambiando con el tiempo. Debido a que el capitalismo mexicano es tardío, no ha conocido las etapas clásicas del desarrollo. Es por lo contrario, la combinatoria de los sectores, la que les da el carácter distintivo a cada una de ellas.

Hasta los años treinta del presente siglo, los sectores de la economía mexicana eran, por orden de su importancia: 1) el imperialista hipertrofiado; 2) las empresas medias de capital mexicano; 3) estatal; 4) la pequeña producción mercantil, y 5) elementos — todavía poderosos— de relaciones precapitalistas. No existía aun un sector monopolista mexicano; el Estado no había afirmado su papel rector en la economía, ni estaban en proceso de desaparición los restos precapitalistas. Es a partir de 1935, cuando se producen los cambios, que culminan hacia 1960, con la nueva combinatoria de los diferentes sectores.

4

La concentración y centralización de capital ha llegado en México a un nivel muy elevado. En 75 por ciento de las ramas industriales, los grandes establecimientos determinan el funcionamiento del conjunto de las empresas. En promedio, las cuatro empresas principales generan 42.6 por ciento de la producción de cada rama. Unos treinta poderosos grupos dominan totalmente el comercio, empleando

a miles de trabajadores en cientos de sucursales. Doscientas empresas de servicios controlan esa importante rama de la economía que cuenta con más de 150 mil establecimientos. Siete poderosos grupos bancarios rigen el sector financiero. Algunas transnacionales y doscientos grandes empresarios de las regiones de riego, controlan la agricultura moderna de México.

En este sector deben distinguirse dos facciones: la representada por las grandes empresas extranjeras, filiales de transnacionales, y los grupos monopolistas mexicanos.

Ciento setenta de las 500 corporaciones más importantes de Estados Unidos operan en México a través de 242 filiales, 191 de ellas están ubicadas en la industria y 40 en el comercio. Estos establecimientos forman parte de corporaciones de gran magnitud que dominan la producción, tecnología y comercio de ramas enteras de la economía mundial. Debido a ello, su influencia es muy superior a lo que deja entrever su participación cuantitativa en la economía mexicana.

En algunos círculos existe la tendencia a negar la importancia de los monopolios mexicanos y a considerarlos como simples apéndices del capital extranjero. Esta es una concepción equivocada. Entre las quinientas empresas privadas más importantes del país, la mitad son mexicanas. Algunas ramas de la economía están totalmente dominadas por el capital nacional y en otras, operan importantes establecimientos de capital autóctono. Tal es el caso de las ramas de hierro y acero; artículos eléctricos y electrónicos, papel y celulosa, alimentos, azúcar, cerveza, vinos y licores, hilados y tejidos, ropa y calzado, vidrio, construcción y otros. El capital financiero mexicano ha alcanzado un alto nivel de desarrollo y está organizado en poderosos grupos que extienden operaciones a las más diversas ramas de la economía con una estructura típicamente monopolista. Aun cuando a nivel mundial estas empresas no pueden medirse con las transnacionales, en el ámbito nacional, apoyadas por el Estado, mantienen una posición fuerte.

5

El Estado ha jugado un papel de gran importancia en el desarrollo del capitalismo mexicano. Ha sido el instrumento principal utilizado por la burguesía para promover la acumulación de capital nacional y su propia transformación, de una burguesía agraria media, en una gran burguesía industrial y financiera.

La intervención del Estado en la economía adopta multitud de formas. Sus empresas controlan o influyen sustancialmente en las industrias petroleras, la eléctrica y los ferrocarriles; en la industria metalúrgica, automovilística, de granos y fertilizantes, de maquinaria textil, así como en la producción de tubos. En el medio rural, el Estado controla una parte sustancial del sistema de irrigación y un conjunto de agroindustrias. En el comercio interviene a través de la Conasupo e

instituciones afines. En la banca, controla a través de 20 instituciones, la mitad de los recursos crediticios del país. Las inversiones estatales representan entre 40 y 50 por ciento del total. A través de subsidios y de su política fiscal, y monetaria, influye constantemente en la orientación del sistema.

El papel especial jugado por el Estado en el desarrollo capitalista de México, ha determinado la aparición de una fracción burocrática en la burguesía, directamente ligada al manejo del sector estatal. La política económica impulsada por esa burocracia aburguesada jugó un papel decisivo en la expansión del capital monopolista. Pero el ascenso de este plantea una serie de problemas, el más importante de los cuales, es el cuestionamiento del papel hegemónico del sector estatal en la economía; de la burguesía burocrática en el bloque de fuerzas en el poder; en fin, el problema de las formas específicas que tomará la asociación del capital monopolista y el Estado, en nuestro país.

El surgimiento del capital monopolista de Estado en nuestro país exhibe algunos rasgos particulares. Mientras que en los países desarrollados se parte de una situación en la cual el Estado no interviene (o bien interviene marginalmente) en la economía, para pasar a una intervención multifacética de aquel en el proceso de acumulación y reproducción, en México el Estado mantuvo una posición rectora en el periodo que precede al dominio de los monopolios. El surgimiento del CME representa inevitablemente un cambio en la relación de fuerzas entre Estado y capital monopolista privado, y una relativa subordinación del primero. Los conflictos y fricciones que originara ese proceso, será un aspecto muy importante de la realidad mexicana en las próximas décadas.

6

La empresa media constituye un ente difícil de definir. Su capital y el número de obreros empleados es suficiente para que el propietario se separe totalmente de la producción. Sin embargo, su magnitud no alcanza las proporciones necesarias para formar parte de los grupos monopolistas. Aun cuando está muy por encima del taller artesanal, la tienda de barriada y el pequeño restaurante, su capacidad para influir individualmente en el nivel de precios, tecnología y producción de la rama en la cual opera, es a nivel nacional, nula. Su funcionamiento está cada vez más determinado por las pautas que marcan las empresas "líderes" y para su funcionamiento depende de la banca privada y pública. El sector de empresas medias forma un conjunto heterogéneo. Algunas son de tecnología atrasada. Otras en cambio, son modernas y dinámicas. En ciertas ramas, las empresas medias tienen un peso importante; en otras, como por ejemplo las de energéticos, tabaco, fibras sintéticas, vehículos automovilísticos y productos farmacéuticos, los grupos monopolistas se reservan la parte del león del capital y los obreros ocupados. A diferencia de lo que sucede en el sector monopolista, la inmensa mayoría de las empresas medias son de capital mexicano. La participación directa

del capital extranjero es restringida. Existen unas cien mil empresas de este tipo diseminadas en la agricultura, la industria, el comercio y los servicios.

7

La pequeña producción mercantil se caracteriza porque el propietario realiza la mayor parte del trabajo y sólo coyunturalmente, o bien en escala muy reducida, utiliza fuerza de trabajo asalariada. Este tipo de empresas es, por lo general, sumamente atrasado, y sus dueños viven en una penuria extrema. Integrada al mercado capitalista y sometida a una despiadada explotación, la pequeña empresa mercantil sólo subsiste gracias a la pauperización de los campesinos y artesanos. En nuestro país este tipo de empresas está aún muy difundido. Su número debe ser superior al medio millón. Sin embargo, sólo en la agricultura tiene una participación importante en la producción.

La pequeña producción mercantil sirve frecuentemente para disfrazar el subempleo estructural. Su profusión en el comercio es una expresión de las imperfecciones del mercado capitalista. Sin embargo —debido a una serie de condiciones particulares—, su reducción será un proceso lento y accidentado.

8

Los restos precapitalistas se ubican en su mayor parte en las zonas agrícolas más atrasadas. Están ligadas con los restos de la hacienda, la comunidad agraria y el tribalismo. Su importancia como modo de producción es muy reducido. Sin embargo, las prácticas y reminiscencias de explotación precapitalistas están bastante difundidas, incluso en sectores modernos de la economía. A diferencia de lo que sucede con la pequeña producción mercantil, los restos precapitalistas se disuelven rápidamente. Pero esto no impide que sigan influyendo en el conjunto del sistema en la medida en que no sean definitivamente desplazados por un avance sustancial de la industrialización. Uno de los aspectos que distinguen a México de los países subdesarrollados que inician su desarrollo capitalista, es precisamente la debilidad de este sector.

9

En los países de desarrollo capitalista tardío y dependiente, los monopolios hacen su aparición muy pronto. Capitalismo y monopolios van unidos desde el principio. Sin embargo, una cosa es la existencia de monopolios y otra muy diferente, la fase monopolista del capitalismo. Un país sólo llega a ese periodo de su desarrollo, cuando se han creado las condiciones que hacen posible la transformación de los monopolios en el sector dominante del sistema, considerado en su conjunto. En México, los primeros grandes monopolios aparecen ya a principios del siglo XX. Sin embargo, la fase monopolista no se alcanza, sino en la década de los sesenta.

Para que en un país de desarrollo tardío y dependiente pueda hablarse de etapa monopolista del capitalismo, es necesario que por lo menos se cumplan los siguientes requisitos:

a). Que la industria se transforme en la rama rectora de la economía. El monopolio capitalista surge de la socialización de la producción y sólo puede originarse en el seno de la industria moderna. Por eso no puede hablarse de fase monopolista en una economía predominantemente agraria. La industrialización es un fenómeno sobre todo de las décadas de los cuarenta y los cincuenta. Sólo a finales de ese periodo México dejó de ser un país fundamentalmente agrario, para transformarse en un país industrial-agrario.

b). Que se constituya el capital financiero autóctono. Sin la presencia de un capital surgido del proceso de acumulación interno, basado en la unión del capital industrial y el bancario, no puede hablarse de etapa monopolista de la economía. En México ese proceso se da sólo en las décadas de los cincuenta y los sesenta.

c). Que las inversiones extranjeras dejen de ser enclaves y se integren al mercado interno. Hasta mediados del presente siglo, el capital extranjero se concentraba sobre todo en la explotación de los recursos mineros y de materias primas. El desarrollo de esas ramas tenía poca relación con los demás y en general con el mercado interno. Las ganancias de esas empresas se exportaban en su mayor parte. El personal de dirección y supervisión era extranjero y gastaba sus salarios fuera del país. En esas condiciones, las filiales de los consorcios internacionales constituían prolongaciones de la economía de la metrópoli y no pueden ser consideradas como integrantes de una estructura monopólica interna. Todavía en 1940, 87 por ciento del capital extranjero estaba invertido en la minería, los servicios públicos y los transportes. Actualmente 73.8 por ciento se encuentra invertido en la industria de transformación.

d). Que el mercado interno adquiriera una envergadura verdaderamente nacional, lo que significa un grado elevado de división social de trabajo. Diferenciación de la industria, aparición junto a ella de un importante sector capitalista de la agricultura y de un complejo moderno de transportes, comercio y servicios; integración de los principales mercados locales en un mercado único, etcétera. Sólo en un mercado de esa magnitud puede el monopolio moderno imponerse a la empresa mediana.

Los monopolios nacionales surgieron y se desarrollaron al *mismo tiempo que maduraban esas condiciones*. Los monopolios extranjeros participaron en el proceso de industrialización desde el principio, integrándose rápidamente al mercado interno. Pero si los monopolios aparecieron simultáneamente al proceso de consolidación del capitalismo industrial, de una *fase monopolista*, es decir *del dominio de los monopolios sobre la economía*, sólo puede hablarse a partir de la década de los sesenta.

El capital monopolista constituye ya el sector más dinámico de la economía. Sin embargo, no debe olvidarse en ningún momento, que los monopolios sólo son la cúspide de una pirámide. No sólo subsiste la libre competencia en muchas ramas de la economía sino que están presentes todas las formas del atraso a las cuales ya nos referimos. *En países como el nuestro, la homogeneización capitalista de la economía sólo puede darse bajo condiciones de dominio monopolista.*

La crisis actual del capitalismo acelera el desarrollo de los monopolios y su penetración en todos los resquicios de la economía. La extraordinaria difusión de la pequeña producción mercantil y los restos precapitalistas, los desajustes que produce la heterogeneidad de la economía, representan serios frenos para el ascenso del sector monopolista.

10

Decía Lenin que si se quisiera estampar una definición sintética de la fase imperialista, podría decirse que el “imperialismo es el estado monopolista del capitalismo”. Las paradojas de la historia quieren que a finales del siglo XX, un grupo de países llegue a la fase monopolista del desarrollo, sin transformarse al mismo tiempo en imperialista. Es decir, que estos países contaran con una burguesía monopolista, pasaran por todos los rigores del dominio de los monopolios, pero seguirán siendo importadores de capital y dependientes. El dominio imperialista seguirá siendo privilegio de un puñado de superpotencias y la exportación de capitales estará controlada por las transnacionales. Los monopolios “nacionales” de países como México, llegan tarde al festín capitalista.

La exportación de capitales es un resultado inevitable de la sobrecapitalización en los países que llegan a la etapa monopolista de su desarrollo. Casi desde su nacimiento, los monopolios tienden simultáneamente al dominio del mercado interno y el exterior. Pero en el mundo contemporáneo, las posibilidades de los monopolios mexicanos, brasileños o argentinos, de competir en el mercado internacional con los monopolios de Estados Unidos o los de la RFA, son extraordinariamente reducidos. Esto no representa contradicciones insalvables mientras el mercado nacional siga creciendo y ofrezca un campo de acción más o menos amplio a los incipientes monopolios locales. Pero una vez que estos lleguen a un grado determinado de su desarrollo, la exportación de capitales se transforma en una necesidad insoslayable.

En la época actual, el desarrollo de las fuerzas productivas ha alcanzado tal envergadura, que en muchas ramas ya no es posible producir en el marco de un solo país, no solo debido a la magnitud del mercado, sino también por los capitales, técnicas y ubicación de las plantas necesarias. La internacionalización de las fuerzas productivas, lleva también a la internacionalización del capital. La concentración y la centralización del capital trasciende las fronteras nacionales. Surgen los grandes consorcios transnacionales, es decir, las empresas que producen y venden a nivel internacional.

En esas condiciones, los nuevos monopolios nacionales no tienen más salida que su asociación con las transnacionales. Es decir, su desarrollo como unidades productivas y su participación en el mercado mundial, sólo es posible a través de su asociación con los grandes *trusts* que dominan el mundo capitalista. Pero esto no significa que se transformaran en simples apéndices o filiales de estos. La integración —que ya está en marcha— se produce en medio de una lucha incesante en la cual los nuevos monopolios aprovechan todas las contradicciones existentes entre las transnacionales y entre los bloques de países imperialistas, así como el desarrollo desigual del capitalismo.

El ascenso de los monopolios nacionales no significa el fin de la dependencia. La dependencia no impide el acceso de países como México, a la etapa monopolista del desarrollo.

En países de una conformación heterogénea y pluriparticular, el dominio de los monopolios agudiza al extremo todas las contradicciones de un sistema en el cual conviven, *dentro del mercado nacional*, las formas más elevadas de la organización capitalista junto a estadios anteriores de ese sistema y restos no capitalistas.

La invención democrática

Democracia y revolución⁹

La crisis y el terremoto, catástrofe humana una, natural la otra, han revelado las debilidades de la sociedad que heredamos de una historia en la cual la Revolución Mexicana juega un papel decisivo.

A partir de 1982 han estado esfumándose las ilusiones del subdesarrollo superado, la independencia consolidada, el Estado benefactor, la democracia parlamentaria en marcha, la tecnocracia incorruptible, el progreso industrial sostenido, el gran *boom* petrolero. Atónitos, descubrimos el México bárbaro de 1985. Diferente al de 1910, es cierto, pero a la vez tan lleno de reminiscencias. Hoy, más que nunca, la historia se hace presente. Sólo que sus claves han cambiado: la euforia nacionalista provocada por la acumulación interna de los años cincuenta y sesenta, se resuelve en la huida de 40 mil millones de dólares de capital mexicano en cinco años; la corrupción, tolerable en el auge, se hace insoportable en la crisis; la inmensa capital concebida en los años cincuenta como monumento eterno a la modernización, es, a fines del siglo, el epitafio de un modelo de industrialización fallido. El ejército de burócratas que fue el orgullo de un Estado surgido de la guerra civil, se ha transformado en un peso muerto que ahoga a la sociedad.

México ha entrado, irrevocablemente, en la era del desengaño o crisis de las utopías y modelos que guiaron a las últimas dos generaciones. Y eso impone la necesidad de una revisión de la Revolución Mexicana acorde con los imperativos de un presente que fija férreos límites de realismo.

De la Revolución Mexicana queda la indomable oposición del pueblo mexicano a la tiranía, su vocación transformadora, su vitalidad histórica. Pero en 1985, no se puede imaginar el futuro de nuestro país en términos de liberalismo, ni de nacionalismo revolucionario. Sus ideas sólo cobran sentido como punto de partida para su superación. ¡La revolución ha muerto, viva la revolución! El desengaño deberá dejar lugar a alternativas cuyos contornos no se precisan aún. En un mundo marcado por el fracaso del experimento soviético y la crisis de la socialdemocracia, será imprescindible internarse por sendas no holladas: la invención de nuevas posibilidades de progreso, democracia, socialismo y orden mundial.

El desarrollo de la democracia no es el único criterio para juzgar la grandeza de una revolución. Revoluciones que cambiaron radicalmente la historia de la humanidad, desembocan en regímenes autoritarios. La revolución francesa culminó en la dictadura de Napoleón, y la rusa en la de Stalin.

La revolución de 1910-1940 se define en múltiples impulsos: la lucha contra el latifundio y las concesiones excesivas al capital extranjero; las aspiraciones a la modernización capitalista y la creación de un Estado ampliado moderno; la

⁹ *Proceso*, número 472, 18 de noviembre de 1985.

defensa de los derechos elementales de una naciente clase obrera. Estos fines no son siempre compatibles con la democracia política. A veces los avances en algunos de ellos exigen un poder autoritario. La historia no es un camino real, sino el infinito encuentro y desencuentro de múltiples senderos.

Pero si la democracia no puede ser el criterio único para juzgar los éxitos de la revolución, no debe excluirse, como frecuentemente se ha hecho hasta ahora. La visión oficialista de la historia es autoritaria, como es el Estado del cual parte. Por eso el problema de la democracia aparece siempre al final de la escala de valores que sirve de pauta para su evaluación.

En el México de hoy, esta posición es ya insostenible. La idea de progreso sin democracia contradice los movimientos sindicales de las últimas dos décadas, la experiencia del 68, la reforma política. Comenzamos a cuestionar a la Revolución Mexicana en una de sus dimensiones menos conocidas. ¿Cuál fue su contribución al desarrollo de la democracia?

La mayoría de las interpretaciones del sistema político mexicano coinciden en un punto: la democracia es débil; las estructuras autoritarias, fuertes.

La democracia es un viejo anhelo. Existe desde la aparición del Estado y probablemente sobrevivirá su extinción. A través del tiempo, guarda una lógica interna de aspiración a la igualdad frente al poder y de participación en él. Sin embargo, en cada época y lugar, las diferencias en el ideal democrático son sustanciales. Como es común que se origine en la lucha contra el despotismo, su significado se define en relación con el despotismo específico que combate. La democracia es un ideal que no muere, porque todo sistema político estable es una combinación de autoritarismo y democracia en permanente lucha.

No existen modelos universales de democracia. La ateniense, que excluía al 90 por ciento de los habitantes de la ciudad — extranjeros o esclavos— fue insuficiente para el siglo XIX. La versión liberal decimonónica es incapaz de responder a las necesidades de una sociedad como la actual, sacudida por constantes revoluciones técnico-científicas, amagada por el ascenso triunfal de la burocracia, amenazada en sus limitaciones nacionales por el peligro de un conflicto internacional de proporciones mortales. El modelo inglés es inaplicable en México y el sistema norteamericano jamás funcionaría en Vietnam. Cada realidad tiene su propia vía hacia la democracia, pero esta no es una idea ambigua.

Una concepción de la democracia posible en México hoy, incluiría esencialmente los siguientes componentes: 1) Participación directa de los ciudadanos en la elaboración de la política; 2) Sistemas de representación fidedignos; 3) División e igualdad de poderes en el seno del Estado; 4) Garantía de los derechos individuales y colectivos; 5) Descentralización del poder.

La revolución de 1910 hizo del sistema mexicano el más estable de América Latina, preservándolo de la sucesión de golpes militares que afligen a la mayoría de los países del subcontinente: es la fuente principal del consenso con el que cuenta. Pero no puede ser desvinculada de los vicios que lo distinguen. Pese al alto nivel de participación popular, la revolución no pudo eliminar herencias del siglo XIX. Además, creó un nuevo autoritarismo, desconocido en el México prerrevolucionario.

La revolución produjo grandes experimentos democráticos, pero todos ellos fracasaron. Uno liberal, el de Madero que insistía en establecer un régimen de derecho. El segundo, anarquista, inspirado en una visión libertaria de consejos obreros. El tercero, campesino, basado en las tradiciones comunitarias de las huestes de Zapata. El cuarto, la Convención, probó el pluralismo político. Pero el nuevo Estado surgió y se consolidó de la derrota de estos intentos. El poder se fue construyendo en la búsqueda de consenso y eliminación cada vez más drástica de la participación autónoma de las masas en la política. Los objetivos de la modernización capitalista y el Estado central fuerte, fueron relegando inexorablemente los impulsos democráticos.

La Constitución de 1917, momento supremo de la legislación revolucionaria, encierra posibilidades democráticas indudables. Pero la práctica cotidiana del poder las vulnera en forma sistemática. Esta contradicción entre ley escrita y realidad política, heredada también del siglo XIX, está en la esencia del sistema mexicano y sólo puede ser superada en una nueva democracia que la Revolución Mexicana no pudo crear.

Si bien la revolución de 1910-40 fue escenario de ensayos democráticos y antecedente de una legislación avanzada, está también íntimamente ligada a los elementos autoritarios del sistema político mexicano actual.

Algunas revoluciones son rupturas irreversibles con viejas formas del Estado. La Revolución Francesa acabó definitivamente con la monarquía absoluta, la rusa puso término a siglos de despotismo zarista, la nicaragüense canceló la dictadura de la familia Somoza. La mexicana, en cambio, no logró producir una ruptura con dos legados del siglo XIX: los sistemas electorales viciados, en los cuales el fraude, el hostigamiento a la oposición y el desconocimiento violento de los resultados verdaderos, impiden que el voto sea ex-presión legítima de la voluntad popular y el caudillismo y el caciquismo que siguen permeando el sistema político, sobreviven a la sombra de leyes que no registran su presencia.

El sistema electoral mexicano sigue plagado de vicios que hacen inevitable el fraude electoral, cada vez que la supremacía del partido gobernante es amenazada. La reforma política de 1917 ha introducido un cambio de grado pero por lo general, sigue hoy excluyendo el principio de alternancia en el poder a través del voto, como en tiempos prerrevolucionarios. Esta es una secuencia ininterrumpida de la historia del México independiente. Entre 1824 y 1876 la gran

mayoría de las elecciones fueron cuestionadas por asonadas militares, de manera que cuando se realizaban, rara vez influían en la selección de los gobernantes.

Después de un breve intermedio entre los años 1867 y 1876, las elecciones volvieron a perder toda importancia. En las que periódicamente legitimaban su reelección, Porfirio Díaz nunca tuvo oponentes y los otros puestos de elección eran ocupados por personas directamente designadas por él. En 1910, cuando su poder pareció amenazado, el candidato de oposición, Francisco I. Madero, fue encarcelado algunos días antes de las elecciones y sus partidarios ferozmente perseguidos.

Finalizada la revolución, muchas cosas comenzaron a cambiar, pero las elecciones no se transformaron en la fuente de un sistema representativo. Carranza fue elegido para la Presidencia, sin contendientes. Obregón tuvo que recurrir en 1920 a una insurrección armada para hacerse del poder. Las elecciones de 1924 y 1929 fueron marcadas por rebeliones militares. La primera elección sin violencia armada fue la de 1934.

Sin embargo, la sucesión presidencial de 1940 estuvo de nuevo marcada por la violencia, el fraude y los choques armados. La justa que enfrentó al candidato oficial Ávila Camacho y al general Almazán, quien logró unificar a la mayoría de las fuerzas de la oposición, culminó en elecciones tan fraudulentas que nadie conoce sus verdaderos resultados. Según los datos oficiales Ávila Camacho obtuvo 94 por ciento de los sufragios y Almazán sólo 5.7 por ciento. En los meses de septiembre y octubre de ese año se registraron rebeliones almazanistas armadas en nueve estados de la República que —según algunos historiadores— provocaron más de mil muertos. Pero al fracasar en su intento de lograr el apoyo de Estados Unidos, Almazán renunció a la lucha.

Doce años más tarde, la política de Miguel Alemán produjo serias fracturas en el seno de la “Familia Revolucionaria” y una importante oposición popular. En 1952, la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano lanzó contra el candidato oficial, Adolfo Ruiz Cortines, la candidatura del general Miguel Henríquez Guzmán, que logró canalizar el creciente descontento del pueblo. Durante la campaña, los actos de la oposición fueron violentamente hostilizados, algunos de sus dirigentes apresados y el día de las elecciones fue escenario de descarados fraudes que arrojaron un resultado que millones de mexicanos no creyeron: 74 por ciento de los votos para Ruiz Cortines y sólo 18 por ciento para Henríquez Guzmán. Pero lo más lamentable sucedió el 7 de julio, en la Alameda, cuando miles de campesinos celebraban el “triunfo” de la oposición. Las tropas dispararon matando a varios cientos. La revolución de 1910 no logró conferir al voto el papel que le corresponde en un verdadero sistema representativo. En esa esfera primordial de la democracia, no se produjo ruptura alguna.

Otra herencia intocada por la revolución es la del caciquismo y el caudillismo. El poder en el México de hoy no está en manos de caciques y caudillos sino de

burócratas y empresarios. Pero el conjunto de la estructura política no es concebible sin los primeros. No sólo conservan su influencia en las zonas más atrasadas del campo, sino que permean la estructura del Estado y la vida política desde sus niveles más elevados, hasta los más ínfimos. Han sobrevivido a todos los intentos de modernización, transformándose, adaptándose, diversificándose.

La figura del Presidente de la República conserva los rasgos principales del caudillo máximo. Los grupos clientelares siguen dominando incluso en la nueva tecnocracia; el mediador principal entre el Estado moderno y las masas campesinas, sigue siendo el cacique. En vano buscaríamos en las leyes escritas que nos rigen una codificación escrita de esa relación. El caudillismo es una característica semioculta de la cultura mexicana. Ejerce al poder a través de redes políticas, culturales y socioeconómicas informales y no por medio de instituciones y partidos.

El caciquismo es la concentración del poder en las manos de un jefe y su clientela. Necesita el consenso del pueblo, pero lo excluye drásticamente de la toma de decisiones y el ejercicio del poder. Basado en su sistema vertical de lealtades, compadrazgos, intereses económicos y violencia organizada, no permite la representatividad y la alternancia en el poder. Si la democracia es el reconocimiento de que todos los miembros de la sociedad tienen igual valor y, por lo tanto, deben participar activamente en el proceso político mediante el cual se establecen los valores colectivos, el caciquismo y el caudillismo son enemigos irreconciliables de la democracia moderna.

El cacique es una figura heredada del México colonial, el caudillo es una criatura del siglo XIX. Está íntimamente ligado a la decadencia y más tarde a la liquidación del Estado colonial y al ascenso del hacendado, el máximo beneficiario de los procesos económicos y sociales de todo el siglo XIX hasta la revolución de 1910.

Después de la Independencia, el debilitamiento del poder central de la minería, del comercio con el exterior, eleva a la preeminencia el mundo agrario en el cual reina el hacendado y su contraparte política, el caudillo. El general López de Santa Anna, que ocupó la Presidencia de la República once veces entre 1832 y 1855, es el prototipo de esta forma de ejercer el poder que dominará completamente los primeros 40 años de vida independiente en México.

Porfirio Díaz logra transformarse en el ingeniero de un nuevo sistema de poder, sólo porque era ya uno de los principales caudillos del país desde la lucha contra los franceses. Su hazaña consistió en la capacidad de fusionar la estructura caudillista real de la política mexicana, con el proceso de erección de un gobierno central fuerte, cuya conducta se ajusta a un proyecto ambicioso de modernización.

Durante la Revolución, rota la fuerza del poder central, el caudillismo domina totalmente la escena de las luchas por el poder y la orientación del movimiento. Los años veinte han sido llamados por muchos historiadores, y con razón, la era

de los caudillos. Esta es otra herencia que la Revolución no pudo revertir y acabó integrando.

Las bases económicas que dieron nacimiento al caudillismo han desaparecido o se han debilitado considerablemente, pero el fenómeno político se mantiene vivo como un recordatorio de los límites transformadores de la revolución.

Pero ni la ausencia de un sistema electoral legítimo, ni el caudillismo son las fuentes principales del autoritarismo en el México contemporáneo. Estas deben buscarse en otro fenómeno, mucho más reciente y moderno, cuyos orígenes se remontan a la revolución misma: el sistema corporativo.

El corporativismo es el sistema en el cual las organizaciones representativas de los diferentes sectores populares son obligatorias, jerárquicas y no competitivas. Deben ser reconocidas y autorizadas (si no creadas) por el Estado, que les otorga un monopolio representativo deliberado en su esfera de acción, a cambio de que respeten cierto control en la selección de los dirigentes y en la articulación de demandas. Sí esta definición es cierta, debemos reconocer que el sistema mexicano no es neocorporativo. No fascista u oligárquico, sino burgués y evolucionista. En México, cada sector de la población —obrero, campesino, empresarial, clasemediero— se manifiesta a través de una o varias organizaciones representativas de intereses, que están ordenadas jerárquicamente y que gozan de un monopolio representativo, a cambio de aceptar las limitaciones impuestas por el Estado en el planteamiento de sus demandas y la selección de sus dirigentes. Esta relación ha adquirido un status casi legal e influye en la política del gobierno, por encima de las diversas y múltiples instituciones parlamentarias y judiciales.

El corporativismo es un obstáculo fundamental a la vigencia de la democracia. Limita y deforma sistemáticamente el derecho de asociación y expresión de todos los miembros de las organizaciones corporativas que disienten de la política de las direcciones oficiales. Antítesis del pluralismo político, el corporativismo es una limitante radical de los derechos democráticos del ciudadano. Este sólo existe políticamente, como constituyente de una organización controlada por el Estado.

El carácter corporativo del sistema político mexicano se gesta en los años 1935-40, en medio de una aceleración de la reforma agraria, la nacionalización del petróleo y un gran impulso a la educación popular.

Es durante ese lapso, cuando la alianza entre las organizaciones políticas y los gobiernos de la posrevolución comienza a adquirir la forma de una subordinación a un Estado que aparece como único portador del proyecto nacional global. Fue en ese periodo cuando el PNR deja de ser el centro desde donde se maneja el Estado, para transformarse en instrumento suyo, al mismo tiempo, el partido institucionaliza los sectores, representantes de organizaciones populares y comienza a adquirir la estructura corporativa que lo distingue hasta hoy.

El siguiente paso fue imponer la autoridad del Estado como árbitro de la vida social a los patrones, obligándolos a reconocerlo como intermediario incuestionable entre ellos y los obreros. A la vez que estimulaba la inversión y la creación de nuevas empresas, ratificaba el derecho de nacionalización e impedía la intervención de los patrones en la organización sindical.

La misma actitud se adoptó hacia las organizaciones populares. Al mismo tiempo que se estimulaba la organización de la CTM, se le impedía que integrara a los campesinos, tarea que el Estado se reservaba para sí mismo, creando para ese efecto una nueva organización.

Apoyándose en la euforia producida por su política reformista, el gobierno de Cárdenas propició la integración de las organizaciones populares al Partido Nacional Revolucionario (PNR), que se había transformado en el partido de Estado. A la vez que los trabajadores encontraban la oportunidad de plantear demandas largamente postergadas, sometían el control de sus organizaciones al Estado. Este es como —ha dicho Arnaldo Córdova— la base de la ideología populista del Estado y la ideología estatista de las masas.

A diferencia de otros aspectos del sistema que han tenido una larga y accidentada evolución, los orígenes del corporativismo pueden ser ubicados con exactitud. La estructura corporativa se consolida al final de la revolución, en los años 1935-40. Desde entonces ha sufrido modificaciones importantes, pero sus rasgos esenciales se conservan intactos. El corporativismo que permea la vida política de nuestro país es creación directa de la Revolución y parte del Estado que de ella surgió.

La invención de una democracia pluralista y representativa exige, ante todo, la superación del corporativismo, ley no escrita de las relaciones políticas mexicanas. Exige también la liquidación de las dos herencias ancestrales, el fraude electoral y el caudillismo clientelar.

Las nuevas alternativas trascienden las ideas y la práctica de la corriente vencedora de la Revolución Mexicana. Pueden encontrar inspiración en los intentos democráticos de los vencidos, pero deben buscar su programa, encarando problemas inexistentes en los albores del presente siglo.

Liberalización o pluralismo¹⁰

Después de la crisis económica, el tema más debatido es el de la democracia. El gobierno promete la lucha contra la corrupción, la descentralización y el Estado de derecho. El Partido Acción Nacional se erige en campeón de la democracia representativa. El Partido Revolucionario Institucional se afana en una democratización interna. La izquierda demanda una nueva reforma política. Enrique Krauze inicia una discusión sugestiva y *Vuelta* abre sus páginas a versiones alternas y constatamos que también en México democracia es un término plurivalente, concepto de múltiples significados. Frente a la dictadura y el autoritarismo, todos los demócratas, liberales o socialistas, tienen algo en común. Pero en una época de crisis de las ideologías, una democracia sin adjetivos es tan imposible como un desarrollo económico sin calificativos. Hoy no se puede ser partidario de la democracia sin definirla y decir cuándo, cómo y dónde es posible.

Se ha sostenido muchas veces que México es un país sin tradiciones democráticas. Se trata de una ilusión óptica que sólo ve los sistemas neoliberales en sus resultados e ignora las cruentas luchas que los hicieron posibles. ¿Cómo olvidar el largo camino que en Europa lleva de la monarquía absolutista a la república parlamentaria? ¿Es permisible olvidar que hace sólo medio siglo el fascismo triunfaba en Italia, Alemania y España? Las tradiciones democráticas se adquieren en el trayecto, no en su final.

Precisemos. México es un país de grandes impulsos democráticos derrotados. Su historia es rica en gestas democratizadoras de todos los géneros, desde el autogobierno comunal hasta los gran-des proyectos de federalismo liberal, pero las tendencias autoritarias han sido más fuertes que ellas.

El hambre de democracia, que invadió a la sociedad mexicana desde 1958, no es un fenómeno inédito, sino la renovación de una conciencia adormecida durante dos decenios. El terco federalismo republicano del primer medio siglo de vida independiente, el espíritu comunitario de las huestes de Zapata, el antiestatismo de los anarquistas de principios de siglo, el proyecto liberal de Vasconcelos, los impulsos de democracia sindical presentes y derrotados en la creación de la CTM, resurgieron del olvido para dar vida y color a los movimientos del periodo. El terreno está abonado. No se trata de improvisar sino de continuar con imaginación lo ya iniciado.

La reforma política aunada al *boom* petrolero parecía suficiente para hacer regresar a su jaula al tigre democratizador. Aquellos que auguraban un largo periodo de paz social parecían haber acertado. Pero la inesperada crisis cambió el panorama. El gobierno de De la Madrid hace frente a problemas más graves que sus dos antecesores, no sólo en el terreno económico, sino también en el de la democracia. Es verdad que las consecuencias políticas de la crisis no se dejan

¹⁰ *Proceso*, número 396, 4 de junio de 1984.

sentir aún. Pero no tardarán en hacerlo. Movidos por las crecientes penurias, los intereses encontrados que alberga la sociedad chocarán. Los patrones defenderán sus menguadas ganancias, las capas medias intentarán recobrar jirones de su paraíso perdido y los obreros acabarán por lanzarse al salvamento de lo que queda de sus salarios. Mantener en esas condiciones la situación política actual, se antoja tarea imposible. O se amplía y profundiza la democracia, dando a los conflictos un cauce legal y parlamentario o se cae en el endurecimiento y la represión. Por eso es tan urgente y necesaria la invención democrática. El proceso democratizador no tiene por qué recurrir a esquemas doctrinarios. Debe, por lo contrario, innovar partiendo de impulsos ya existentes en la sociedad mexicana y responder con audacia a la gravedad de la situación presente.

Por debajo de las disputas ideológicas se definen dos proyectos. Uno se concreta a liberalizar el sistema vigente desde 1940 hasta nuestros días. Otro propone internarse decididamente por el camino de la democracia pluralista y representativa. El primero pone el énfasis en mejorar la consulta y la negociación, la reforma administrativa y el saneamiento de las instituciones existentes, pero sin modificar el control corporativo de las organizaciones sociales, el monopolio electoral del PRI y el centralismo presidencialista. La segunda, parte de la premisa de la libertad de asociación autónoma de todas las fuerzas de la sociedad; el respeto al principio de alternabilidad a todos los niveles del Estado; el reforzamiento de las funciones de los poderes Legislativo y Judicial; el desarrollo de la autogestión en los organismos sociales, políticos, educativos y culturales. La transformación propuesta es profunda. No equivale a un cambio de régimen social, pero sí a una revolución política. Y hoy coinciden en ella no sólo los socialistas demócratas, sino también muchos liberales que en otros aspectos no son de izquierda.

Los partidarios de la liberalización aducen que el proyecto de democracia plural es utópico e incluso peligroso. ¿No han fracasado ya en nuestro país todos los intentos liberales? ¿Acaso no demuestran las experiencias de Chile, Uruguay e inclusive de Perú que el sistema pluralista conduce a la inestabilidad y la dictadura? ¿No es probable que quienes se aprovechen de ella sean la iglesia conservadora y el gran capital, fuerzas principales de la sociedad civil? Apelan al miedo a lo nuevo, al espíritu conservador que se ha apoderado de muchos mexicanos golpeados por una crisis que vino a interrumpir un largo idilio de crecimiento y estabilidad.

La democracia, es verdad, tiene sus riesgos y la libertad su precio. No se vale extasiarse con sus resultados sin asumir su historia. Juárez no sería un restaurador de repúblicas sin las derrotas de José María Luis Mora. Mientras en la mente del pueblo el sistema político vigente sea identificado con el auge económico, tendrá sus partidarios. ¿Pero, no terminó éste hace 10 años? No es lo mismo corporativismo de abundancia que autoritarismo de crisis. Para preservarse sin cambios sustanciales, el sistema tendría que hacerse más rígido. La elección

no es entre la *belle époque* y el abismo de lo desconocido, sino entre una democracia posible y una dictadura probable. Vivimos un fin de época y quien vuelva la mirada hacia atrás se convertirá en estatua de sal.

ESTATISMO Y ECONOMÍA¹¹

La prolongación de la crisis y los recientes triunfos del PAN, partido de vocación antiestatista, vuelven a poner de actualidad, la discusión sobre la relación entre Estado y economía. En la actualidad la única disyuntiva que parecen tener los mexicanos es la de una sociedad regida por los grandes monopolios o por un Estado todopoderoso. Un futuro poco edificante.

Para un sector de la izquierda, la respuesta es clara. El Estado ha sido y es el sujeto o agente de la modernidad y la independencia nacional. En las condiciones actuales, el fortalecimiento y la expansión del sector estatal son la única garantía del desarrollo económico. Su contracción es, inevitablemente, un triunfo del gran capital, nacional y extranjero. Otro sector en cambio señala el carácter de clase del Estado, su tibieza hacia las transnacionales, su complacencia con la polarizada distribución del ingreso. La baja productividad de muchas empresas estatales, la corrupción, la hipertrofia de una burocracia que concentra en sus manos el poder económico y el político, la hacen recelosa de su crecimiento. Observa que la omnipotencia estatal no sólo coarta la democracia política, sino también ahoga la potencialidad económica de la sociedad. Sin embargo, su alternativa económica no es siempre clara.

La pregunta es si puede diseñarse, en el marco de la sociedad mexicana, un proyecto económico de izquierda que no esté basado en la expansión económica ilimitada del Estado.

El sistema actual está basado en cinco formas de propiedad: 1) el sector estatal; 2) las grandes empresas monopolistas; 3) las empresas medianas no monopolistas; 4) la pequeña producción artesanal y campesina; 5) el sector social: ejidos, cooperativas y comunidades. Mientras exista el capitalismo en México, estas formas subsistirán, lo que cambia es el papel que cada una de ellas juega en el conjunto del sistema.

No existe un modelo único de desarrollo capitalista. La historia es testigo de múltiples vías de industrialización. La que ha privado en nuestro país está basada en una estrecha alianza entre el gran capital y el capitalismo de Estado. Es ella la que determina el papel de los otros sectores. Las grandes empresas han contado con el apoyo del Estado para ocupar irrestrictamente las ramas dinámicas de la economía, concentrar en sus manos la tecnología moderna, ser protagonista de los procesos de acumulación más acelerados. El resultado es la concentración de la modernidad en los dos primeros sectores y la depresión, subordinación y marginalización de los otros.

¹¹ *Proceso*, número 383, 5 de marzo de 1984.

Lo que nos interrogamos es si la debilidad del sector social de la mediana y pequeña empresas se debe a su inviabilidad intrínseca o a los obstáculos creados por la alianza Estado-capital monopolista.

No todos los países en desarrollo han seguido el mismo modelo. Algunos, en América Latina, no tienen niveles de concentración tan elevados como los de México. En Italia y Japón, países de desarrollo tardío, la empresa mediana y la pequeña industria jugaron un papel importante —pese a la existencia de los monopolios— en el proceso de industrialización. Y es una paradoja que sea precisamente en países que transitan hacia el socialismo, como Yugoslavia y Hungría, en donde la pequeña producción —sobre todo agrícola— haya mostrado una racionalidad y vitalidad insospechadas.

El estatismo no es, por lo tanto, la única alternativa al dominio de los monopolios. Existe un modelo en el cual el poder de éstos puede ser frenado, sin que el proceso redunde en la hipertrofia del Estado. Para ello sería necesario que el sector social, la mediana y pequeña empresas se transformen en sujetos económicos activos.

Estos no son, como muchos suponen, creación del Estado mexicano. Son formas del desarrollo económico que tienen una dinámica autónoma y raíces profundas en nuestro pasado. El sector social se origina en formas antiquísimas, en las cuales se gestaron las fuerzas campesinas de la revolución de 1910 y un movimiento cooperativista que mostraba signos de vitalidad ya en el último tercio del siglo pasado. Las mediana y pequeña empresas son la cuna de una clase media que es el protagonista principal del México moderno. En las últimas tres décadas su función ha declinado debido a la política de un Estado que optó por un modelo de desarrollo basado en la expansión prioritaria de la gran empresa privada y estatal. Su dinámica se ha visto reprimida por una voracidad de un Estado que no tolera espacios fuera de su control y que ha colaborado con entusiasmo a la expansión de los monopolios.

Pero, ¿qué ventaja hay para los trabajadores en un modelo de desarrollo que encara una limitación drástica del poder de los monopolios, la reducción selectiva del sector estatal, la expansión del sector social y de la pequeña empresa y la consolidación de la mediana?

El proceso no debe verse como un regreso al pasado. El sector social, las empresas pequeñas y medianas pueden absorber y producir tecnología moderna. El Estado deberá seguir estimulando más que antes la investigación científica y la producción de tecnología nacional. Pero la tecnología no es neutra, está indisolublemente ligada a la estructura social a la que sirve. Sus prioridades deberán ser adaptadas a un modelo de desarrollo menos concentrado y monopolista, más masivo y nacional. La nueva vía ampliaría el mercado nacional, aumentaría la ocupación, haría menos desigual la distribución del ingreso, fortalecería la independencia nacional.

La diferencia entre un programa “liberal” de derecha y un proyecto antiestatista de izquierda es que el primero, al defender la “sociedad civil”, se refiere al gran capital nacional y extranjero. El segundo, en cambio, presupone un auge cualitativo del sector social, la mediana y la pequeña empresas. Es, por naturaleza, antimonopolista y nacional.

CAMBIAR PARA SEGUIR IGUAL¹²

Desde el 5 de marzo último, algunos mexicanos viven fascinados por el intento de renovación del PRI. La cantidad de tinta vertida sobre el tema demuestra que lo último que muere es la esperanza. En este caso, una esperanza teñida de masoquismo: el amargo placer que se deriva de un persistente autoengaño o de una cruel e inevitable frustración. Pero no hay que caer en el lazo. Sería un error pensar que el invencible no es capaz de introducir reformas en su funcionamiento. El sistema político mexicano ha demostrado hasta la saciedad que puede cambiar para que todo siga igual. Ha habido mudas en el sistema parlamentario, en los grupos dirigentes, en las prácticas administrativas, en la política de la burocracia sindical. ¿Por qué no en el PRI? Es verdad que la institución electoral ha dado muestras de ser la más conservadora de todas. Pero hasta ahora, el incentivo para el cambio era débil. Las últimas elecciones introducen un nuevo factor, el único capaz de promover modificaciones en su seno: el ascenso electoral de la oposición. En primer lugar, la derecha, pero también la izquierda. Para que sobreviva el sistema quincuagenario PRI-gobierno, que excluye la alternancia, el Incólume deberá modificarse y es probable que lenta y contradictoriamente, alguna idea perdida de Carlos Madrazo o del más sofisticado don Jesús se abra paso.

Esta vez, creo que aquellos que piensan que cualquier variación democrática es un avance (sin preguntarse hacia dónde) podrán irse satisfechos a casa. Sólo que los cambios en la máquina electoral del gobierno no se proponen fortalecer la democracia pluralista, sino aceitar los engranajes del sistema corporativo existente.

Si el corporativismo es el sistema en el cual las organizaciones constituyentes, obligatorias, jerárquicas y no competitivas, son reconocidas y autorizadas (si no creadas) por el Estado, que les otorga un monopolio representativo en su esfera de acción, a cambio de cierto control en la selección de los dirigentes y las articulaciones de demandas y apoyos, debemos reconocer que el sistema mexicano se ajusta a esa definición. No un sistema corporativo fascista u oligárquico, sino uno burgués y evolucionista. En México cada sector de la población, obrero, campesino, empresarial, clasemediero, se manifiesta a través de una o varias organizaciones que gozan de un monopolio representativo, a cambio de acatar las limitaciones impuestas por el Estado en el planteamiento de sus demandas y la selección de sus dirigentes. Estas organizaciones han

¹² *Proceso*, número 385, 19 de marzo de 1984.

adquirido un status legal e influyen en el gobierno por encima de las instituciones parlamentarias y judiciales.

El papel del PRI es asegurar que el sistema no se vea perturbado en el área electoral-parlamentaria por la existencia de una pluralidad de partidos políticos, especialmente de aquellos que cuestionan la estructura corporativa. De ahí el partido único, que goza de monopolio parlamentario, a cambio de integrar a las organizaciones de masas que controlan el voto popular. El principio corporativo rige también en esta esfera.

A partir del decenio de los sesenta, el sistema corporativo mexicano comenzó a ser violentamente cuestionado. Movimientos populares de gran envergadura (1958-59, 1968), explosiones espontáneas recurrentes, surgimiento de organizaciones sindicales, campesinas y políticas autónomas, se sucedían rápidamente. También en las universidades el problema de la autonomía se planteó con vigor. Frente a esos procesos, el mundo parlamentario parecía un remanso de plácida tranquilidad. Hasta 1979, la izquierda radical estuvo excluida de las justas electorales y los progresos de la derecha parecían insignificantes. Mientras que las organizaciones sociales del sistema se afanaban —cada una a su manera— por modernizarse, el PRI dormitaba, sumido en un dulce sopor.

La reforma política trasladó bruscamente las tensiones a un nuevo escenario. La integración de los partidos de izquierda, no integrados a las reglas del juego corporativo, produjo el primer reto. Pero éste demostró no ser demasiado perentorio: el diez por ciento de votos que obtuvieron juntos los tres (luego cuatro) partidos de la izquierda no representaban un peligro inmediato. Fue la crisis la que aceleró el proceso. En la frente de la “renovación” priista están estampadas con letras capitales, dos palabras amenazadoras: Chihuahua-Juchitán. El peligro de la multiplicación de experiencias similares en las próximas elecciones será el acicate para el camino. El verdadero motor de las rectificaciones priistas está en la oposición.

Así que cambios habrá. Pero la “democratización” del PRI nada tiene que ver con el advenimiento del pluralismo partidista. Se trata de un esfuerzo por reanimar un sistema con más arrugas que Mr. Magú. Los pasos serán lentos y vacilantes, frenados por intereses endurecidos con más de medio siglo de dominio exitoso. Y mientras tanto, el fraude electoral y la violencia seguirán sufriendo a la reforma interna.

De la abstención como arma política¹³

La campaña electoral ha provocado, en el seno de la izquierda independiente, discrepancias que deben ser objeto de una discusión abierta.

Un sector ha optado por participar en la campaña; otro se inclina a abstenerse. Algunos, aun cuando simpatizan con la segunda posición, se colocan en actitud neutral y sostienen que de acuerdo con la situación específica de cada organismo, es aceptable tanto una posición como la otra.

Ubiquemos, ante todo, la extensión de la discrepancia: Una diferencia táctica no excluye otras coincidencias del mismo orden. En realidad, la divergencia en este campo se produce en medio de un proceso de acercamiento en otros frentes. Se coincide —entre otros puntos— en las formas, de lucha contra el charrismo sindical; en la defensa de las libertades democráticas; en la exigencia de una reforma a la ley electoral y el registro de verdaderos partidos de oposición; en los elementos de una plataforma antimperialista y antimonopolista común, etcétera. Estas tendencias deben ser reforzadas por encima de las discrepancias. Sin embargo, éstas no deben ser soslayadas, porque las divergencias acerca de la campaña electoral expresan diferencias en la apreciación de la situación política actual y los métodos para elevar el nivel del movimiento popular.

Queda claro que la participación de la izquierda en la campaña electoral de 1976 no puede tener como objetivo la conquista de puestos de elección. En un sistema que deja en manos del gobierno la calificación de las elecciones; que cuenta con una ley electoral que impide el registro de partidos independientes; que descansa en la simbiosis estructural entre Estado y partido gobernante; que reprime sistemáticamente y dosifica a su antojo las expresiones de oposición, el régimen parlamentario está irremisiblemente castrado. Mientras persistan todas estas condiciones, la izquierda no puede ser a la vez independiente y contar con una representación electoral significativa.

¿Con qué propósitos entonces, se toma parte en la campaña? Primero, con el de presentar ante el pueblo un programa alternativo a los del PRI y el PAN (que participará en la campaña para senadores y diputados) así como a los hombres capaces de llevar a la práctica tal programa; y segundo, para educar a los trabajadores en la necesidad de participar en cualquier lid política, en todas las formas de lucha posibles.

El argumento principal que se esgrime contra esta posición es el siguiente: en elecciones anteriores se ha producido una abstención electoral considerable. Todo hace pensar que en la actual, ésta será aún más significativa. La abstención es, en buena parte, señal del repudio creciente del pueblo hacia los vicios del proceso electoral y la imposición de los candidatos del PRI. Al no participar en las elecciones, la izquierda ayuda a aumentar el abstencionismo y el desprestigio del

¹³ *El Día*, 27 de febrero de 1976.

sistema electoral en vigor y obliga al gobierno a otorgar el registro a los partidos independientes.

Admitamos que un sector importante del electorado se abstiene de votar porque ha comprendido la inutilidad del acto y repudia la ficción electoral. Sin embargo, nada permite suponer que el número creciente de ciudadanos que adoptan esta actitud, tiene una idea clara acerca de la alternativa al sistema vigente. Al contrario, su repudio al proceso electoral actual no los transforma automáticamente en partidarios de una reforma electoral democrática. Para que se produzca el cambio, es necesaria la acción decidida de la izquierda contra la pasividad, las soluciones descabelladas y los remedios localistas.

Mientras la oposición al régimen electoral en vigor se exprese solamente bajo la forma de la abstención, el gobierno tiene las manos libres para adoptar diversas soluciones siendo el registro de los partidos de izquierda sólo una de ellas. Podría por ejemplo, optar por la democratización interna del PRI o el establecimiento de un sistema de dos partidos al estilo norteamericano que excluya a la izquierda. Para imponer una reforma electoral democrática, un sistema parlamentario que incluya el respeto a los derechos de los partidos de la izquierda independiente, no basta con la abstención tal y como ésta se presenta en la actualidad. Se hace necesaria la presencia activa de estos partidos en todas las esferas de la vida nacional, incluyendo las justas electorales. En otras palabras, para transformar la abstención en demanda de reforma electoral democrática, los partidos de izquierda deben demostrar su disposición y su capacidad de hacer uso de ella. Incluso en las condiciones actuales, un voto por un hombre y un partido que defienda la reforma electoral democrática es mejor que una abstención; una forma de protesta más elevada, definida y eficaz que un no votar.

EL OTRO CANDIDATO

El viernes 9 de abril de 1976, los representantes de la coalición de izquierda (PCM, MOS y LS) visitaron al secretario de Gobernación, licenciado Mario Moya Palencia, para solicitar que la Comisión Federal Electoral inscribiera en las boletas electorales el nombre de Valentín Campa como candidato individual a la Presidencia de la República. La solicitud —que está en el marco de la ley— se basa en derechos consagrados en la Constitución y las atribuciones específicas de la Comisión Federal Electoral. No exige el registro de un partido, sino el de un candidato a un puesto de elección.

La petición somete a prueba el sistema de democracia representativa y no hay duda que la respuesta que se le otorgue, influirá en el ambiente de la última etapa de la campaña electoral y, en general, en la atmósfera política del país.

Pero con inscripción o sin ella, la campaña de Valentín Campa es uno de los hechos políticos más significativos de los últimos años. Prácticamente silenciados por la “gran” prensa nacional —con la honrosa excepción del periódico *El Día*—,

se han venido realizando desde el mes de enero decenas de mítines y cientos de reuniones en los cuales *el otro candidato* y sus seguidores han ido definiendo un proyecto radicalmente diferente a los que enarbolan los conspiradores reaccionarios de Chipinque, y el candidato imbatible del PRI.

Si se analizan los discursos, declaraciones y plataformas de esa corriente, destacan dos elementos fundamentales:

La necesidad de una reforma política que permita a los sectores populares intervenir en la orientación de los destinos del país, por vías democráticas y parlamentarias. La abolición de una serie de leyes y prácticas que ahogan toda expresión ciudadana que no se hace estrictamente en el marco del partido oficial, de los sindicatos oficiales, de las centrales campesinas oficiales, de las universidades controladas por el Estado.

Se llama a terminar con las prácticas represivas que ensangrentaron al país en 1968 y 1971 y que —de acuerdo con la revista *Informática* editada por investigadores de la UNAM— sólo en el último mes de febrero causaron 11 muertos, 21 heridos, 44 detenidos y 2 secuestros.

La urgencia de un programa económico y social que impulse a México a salir de la crisis no a costa de los ya superexplotados trabajadores y sectores marginales, sino reduciendo los inauditos privilegios que los monopolios nacionales y extranjeros han acumulado en los últimos veinte años. Un programa que esté basado no en el endeudamiento externo y las concesiones a las trasnacionales para que éstas —explotando mano de obra barata (estilo maquiladoras)— resuelvan nuestros problemas por medio de la exportación, sino en el desarrollo del mercado interno, la habilitación de las áreas atrasadas y la reorientación de la industria nacional hacia el consumo masivo interno.

La campaña de Campa no representa a todos aquellos que coinciden con esos objetivos medulares. Por una u otra razón, muchos de los que los apoyan han decidido abstenerse de participar en ella.

Pero los logros obtenidos hasta ahora en la difusión del programa y el diálogo con sectores cada vez más amplios del pueblo, el hecho de que la campaña se desarrolla sin ser molestada por el gobierno, demuestra que las luchas del pueblo han logrado reconquistar una forma de expresión que hace mucho le había sido negada.

La campaña de Campa no es única opción política inmediata, pero forma ya parte inseparable del multifacético despertar popular que conoce México en la actualidad.

LA DANZA DE LOS NÚMEROS¹⁴

¹⁴ *El Día*, 22 de julio de 1976.

Uno de los grandes mitos de nuestro tiempo es la estadística oficial. El hombre común vive aplastado por un sinnúmero de tajantes declaraciones: el ingreso per cápita es de... cuatro de cada diez mexicanos mueren de... el adulto promedio consume... Casi no existe discurso en el cual no se afirme categóricamente “Los hechos hablan por sí mismos”.

Desgraciadamente, la sabia advertencia del viejo cínico inglés que afirmaba que existen tres tipos de mentiras: las pequeñas, las medianas y las estadísticas, ha sido olvidada y arrumbada en un rincón.

Para sustituir la fe religiosa en los números por una sana actitud crítica que permita un uso racional de la estadística, recomendamos someter a todos los interesados a un ejercicio terapéutico: el análisis cualitativo del origen y validez de las estadísticas electorales mexicanas. Estamos convencidos de que después de esa experiencia, el sujeto estará vacunado contra la fe ciega en las estadísticas y se encontrará en condiciones de hacer uso de éstas con la misma prevención con que manejará una pistola cargada.

En México, una de las expresiones de la pérdida de la soberanía popular está en que el proceso electoral no está controlado por los partidos o los ciudadanos, sino directamente por el Estado. Este es juez, parte y rector de todo el proceso que regula la organización de las elecciones, la emisión del voto y el recuento de éstos.

El Estado controla la Comisión Federal Electoral, que está subordinada al Secretario de Gobernación y en la cual los partidos de verdadera oposición jamás podrán tener mayoría; sus funcionarios, ya sea como tales o bien como representantes del PRI, forman la mayoría del personal que maneja y controla la documentación y los paquetes electorales, desde las casillas hasta los comités distritales. Entre el famoso medio millón de ciudadanos que tomó parte en la vigilancia del proceso electoral, las personas vinculadas al aparato estatal y al PRI representan un contingente impresionante. En muchas casillas no había más que ellas y en los organismos superiores su participación fue decisiva.

Por eso, el Centro Coordinador de Servicios para Candidatos (CCSC) instalado por el PRI obtuvo la información antes y mejor que la Comisión Federal Electoral, hizo las primeras declaraciones sobre los resultados y, naturalmente, manipuló éstas al gusto de sus directores. Así, algunas horas después de las elecciones sabíamos que “el abstencionismo había sido definitivamente derrotado”, que el PRI había ganado “en todos los distritos” y que JLP había sido elegido “con un número de votos sin precedentes en la historia de México”.

Los mecanismos de control son infalibles. Si hubiera existido una oposición peligrosa, como en 1940 o en 1952, se hubieran encargado de reducir el número de sus votos a un nivel prudente; si surgiera una oposición capaz de arrollar — milagrosamente— la montaña de obstáculos electorales existentes y ganar,

asegurarían la mayoría necesaria al PRI. Pero, obviamente, en las elecciones pasadas no se trataba ni de lo uno ni de lo otro. Y sin embargo se consideró necesario violentar los datos para que éstos cumplieran con tres requisitos indispensables: disminuir la magnitud de la abstención, asegurar una mayoría absoluta al único candidato registrado a la presidencia (si perdiera sin tener oponente, ¡que vergüenza!) y dificultar el recuento exacto y fidedigno de los votos que recibió Valentín Campa.

Si prestamos oídos a los informes de algunas encuestas, a las quejas del PAN y si revisamos cuidadosamente los resultados locales, descubrimos muy pronto que la máquina oficial fue, una vez más, muy diligente. Las credenciales de electores se extendieron sin pedir documentación alguna. Las boletas electorales para presidente llevaban sólo un nombre, inscrito tres veces, y el lugar que se dejó para los candidatos no registrados no era suficiente para que en él se pudiera, con el crayón que se impuso en todas las casillas, escribir un nombre completo. En muchos lugares se hizo votar a todos los empadronados, incluso a los que no se presentaron a la casilla el 4 de julio. En numerosas ocasiones, los votos para JLP se contabilizaron dos veces, como votos de partido y como votos personales. Los votos por Valentín Campa Salazar (¿usted conocía su segundo apellido?) se anulaban si algo faltaba en el nombre y apellidos o si se escribía Campa PCM. Ni estas ni otras prácticas similares afectaron el resultado esencial de las elecciones —porque no había necesidad de ello— pero sí acentuaron su tono en la dirección deseada.

Si las estadísticas electorales pueden ser consideradas como un índice de opinión pública, en México se trata de un índice tan confiable... como el índice de aumento de los precios.

1985: Tres opciones¹⁵

En 1985, aparte de guarecerse de las olas cada vez más enfurecidas de la crisis, los mexicanos deberán ir varias veces a las urnas. Estamos en vísperas de una elección de diputados federales, de la renovación de congresos locales y ayuntamientos en quince estados y de las gubernaturas, en siete.

A nivel nacional, el sistema de partido único se mantiene firme. Pese a la gran campaña publicitaria se puede asegurar que, si bien exhibe grietas, no está amenazado.

En 1979, el PRI sacó 68.35 por ciento de los votos para diputados de mayoría relativa y en 1982, 70.03 por ciento. En los comicios locales de 12 entidades, en 1983 alcanzó 71.16 por ciento y en los de 1984 en Hidalgo, Coahuila, Estado de México y Yucatán mantiene ampliamente su mayoría absoluta. A corto plazo, los rumores acerca de la emergencia de un sistema bipartidista no tienen fundamento alguno.

Los partidos de oposición cosechan entre 25 y 30 por ciento de los votos emitidos y el PAN, el contendiente más importante, no ha logrado sobrepasar 18 por ciento.

Sin embargo, la oposición ha hecho progresos innegables y la mayoría absoluta del PRI tiende desde 1973, a reducirse. En 1979, la nueva izquierda (Partido Comunista Mexicano y Partido Socialista de los Trabajadores) alcanzó 7.36 por ciento de los votos. En 1982, lo notable fue el ascenso del PAN (de 11.06 en 1979 a 17.83 por ciento). En 1983 y 1984, la tendencia se afirma: el PRI sigue perdiendo votos, en deslizamiento lento pero sostenido. Si éste se mantiene al ritmo actual, a mediano plazo puede perder la mayoría absoluta. Para él, el reto es claro: si no logra revertir su trayectoria declinante, la viabilidad de la oposición se irá afirmando en la mente de los mexicanos. El mito de la invencibilidad del PRI estará en peligro, la idea de que México puede seguir caminos diferentes de los escogidos por la "familia revolucionaria" se abrirá paso. Aparecerá en la cultura política nacional un pluralismo sofocado durante cerca de medio siglo. Por ahora, lo que el proceso electoral pone en peligro, no es su poder, sino su hegemonía. Y en esa contienda los fraudes no cuentan. El PRI puede conseguir sus victorias robando urnas e inflando padrones, lo que no puede es detener el deterioro de su consenso.

El gran beneficiado por la crisis, hasta ahora, es el PAN. En 1979 sacó 1.5 millones de votos, en 1982, 3.7 millones. Un aumento de 140 por ciento en tres años. En los comicios locales en 12 entidades, en 1983, obtuvo 723 mil votos, casi lo triple de los 259 mil que había logrado tres años antes en los mismos lugares.

Los primeros datos de las elecciones locales de 1984 indican que el ritmo ha descendido, pero la tendencia ascendente de su voto se mantiene. En este

¹⁵ *Proceso*, número 425, 24 de diciembre de 1984.

fenómeno confluyen probablemente dos procesos muy diferentes: un viraje a la derecha de algunas capas medias amenazadas en su existencia por la crisis y el voto por el contendiente más viable, de sectores que protestan por la crisis, sin ser de derecha. Todo eso, profusamente lubricado por la decisión de un segmento de la gran empresa, decidida a crear una alternativa política a una burocracia capaz de darle sustos como el del primero de septiembre de 1982. A nivel nacional, el PAN sigue actuando, no como contendiente al poder, sino como grupo de presión. Evita los choques frontales con el gobierno y usa su influencia electoral para negociar. Pero en varios estados, su propio crecimiento lo está envolviendo en una dinámica que lo obligará a cambiar de piel.

Los dirigentes del PAN son conscientes de que una cadena de victorias incontestables en estados como Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, etcétera, no son simples triunfos electorales como los del Partido Republicano, en Estados Unidos, o del Conservador en Colombia. Son un reto estructural a un sistema político que excluye los mecanismos de alternancia; que se finca en la continuidad entre Estado y partido gobernante; que depende del monopolio del PRI en la esfera electoral, como el ser humano del aire. ¿Partido de poder o grupo de presión? Esta es la disyuntiva que se plantea desde las filas mismas del PAN. No de otra manera pueden interpretarse las declaraciones de Aguirre Villafaña, primer diputado desafortunado de Nuevo León, quien opina que el PAN no debe ya contentarse con su “medalla de plata”. Pero la dirección nacional no parece compartir su opinión.

No parece 1985, en este sentido, ser un año decisivo. La mayoría que el PAN puede obtener en Sonora o Nuevo León no son suficientes para separar a los hermanos siameses PRI-gobierno. Ahí donde gane por mayoría de votos perderá por fraude electoral. Pero, paradójicamente, a medida que gana votos, el PAN ve cuestionada su naturaleza misma. Si sigue circunscrito a su papel de partido de presión, comenzará a perder seguidores. Si lo traspasa, entrará en choque frontal con el sistema político existente.

Como puede verse, no habrá en 1985 una disputa verdadera por el poder entre el PRI y PAN, ni a escala nacional ni a nivel estatal. Lo que sí va a producirse es una ardua batalla por la adhesión de un pueblo sacudido por la crisis. Pero en ella los contendientes son no dos, sino tres: el PRI, la derecha (PAN-Partido Demócrata Mexicano) y la izquierda (Partido Socialista Unificado de México, Mexicano de los Trabajadores, Socialista de los Trabajadores, Revolucionario de los Trabajadores y Popular Socialista).

Los comicios de 1985, primeros desde el inicio del desastre económico, serán un termómetro más para medir los avances de un proceso subterráneo cuya culminación comienza a vislumbrarse.

EL VOTO SOCIALISTA¹⁶

En 1979, 1.4 millones de mexicanos votaron por partidos de orientación socialista. Tres años más tarde, su número se había elevado a 1.8 millones. En ambas ocasiones, esto representó alrededor de 9 por ciento de los votos emitidos. Es difícil comparar los precarios sistemas electorales de América Latina, pero en la medida en que eso es posible, parece que el socialismo mexicano tiene un peso electoral muy inferior al que en momentos de auge conocieron Chile, Perú y Uruguay; comparable al de Venezuela, Colombia, República Dominicana, Costa Rica y, en cierto sentido, Brasil y superior a los demás países que han tenido sistemas representativos de cierta estabilidad.

Durante cerca de 20 años, la única opción de izquierda registrada era el PPS, que captaba entre 1 y 2 por ciento de la votación. El ascenso del voto socialista está, por lo tanto, relacionado con la legalización de nuevas opciones. En 1979, el PCM y el PST; en 1982, el PRT, y en 1985, el PMT que viene a completar la lista de cinco planillas de izquierda existentes actualmente. No es por lo tanto exagerado decir que el socialismo en sus diferentes versiones, sólo existe como opción electoral hace seis años y que apenas legalizado se ha constituido en una fuerza electoral significativa.

Es difícil todavía hablar de las propensiones del voto socialista. Lo reciente de su constitución y el hecho de que sólo contamos con los resultados de dos elecciones federales y algunas locales, impiden registrar tendencias seculares; Sin embargo, es posible apuntar dos observaciones:

1. La magnitud del voto socialista tiende a crecer, pero lentamente. En las elecciones de 1982 registró un aumento de 30 por ciento respecto a 1979. En los comicios locales de 12 entidades en 1983, fue el doble de 1980. Sin embargo, estos aumentos no son comparables a los obtenidos por la derecha en el mismo periodo. En las elecciones federales de 1982, el PAN y el PDM tuvieron un crecimiento de 120 por ciento respecto a 1979 y en las locales de 1983 su aumento respecto a 1980 fue de 176 por ciento. La oposición no representa, a corto plazo, un peligro para el sistema de partido único. El PRI sigue cosechando 70 por ciento de los votos y es claro que la oposición de derecha e izquierda nunca se unirán. Sin embargo, a nivel local, la hegemonía del invencible se enfrenta a un auténtico reto.

2. El voto socialista está altamente concentrado en cuatro entidades. Alrededor de 33 por ciento proviene del DF; 17 por ciento se origina en el Estado de México; Jalisco y Veracruz aportan 6 por ciento cada uno y 35 o 40 por ciento proviene del resto del país. Es de observarse que, en general, los avances de la izquierda se manifiestan sobre todo en los grandes centros urbanos y las zonas agrícolas más desarrolladas, mientras que el PRI conserva sus reductos en las regiones más

¹⁶ *Proceso*, número 429, 21 de enero de 1985.

atrasadas. Los socialistas están presentes en todas las entidades de la República e incluso en algunos municipios representan un factor hegemónico, pero como fuerza electoral nacional sólo existen en las cuatro entidades ya citadas.

Cuando en 1977 se promulgó la reforma política, las tendencias antiparlamentarias eran todavía muy fuertes en la izquierda y la mayoría de las organizaciones se oponían a participar en elecciones. Estas tendencias han ido debilitándose lentamente y no es sino hasta ahora cuando se puede decir que la casi totalidad de la izquierda se apresta a participar en los procesos electorales directa o indirectamente.

Si bien en el movimiento social la izquierda mexicana es una fuerza dispersa, con una centralidad débil, en el campo electoral esto es menos cierto. En 1979, la mitad del voto de izquierda favoreció a la coalición encabezada por el PCM, que se definió como fuerza electoral más importante. El PSUM, heredero ampliado de la coalición, casi mantuvo esta proporción, ratificando la tendencia a la concentración del voto. Sin embargo, es obvio que a menos que avance en su unidad electoral, es imposible que la izquierda se constituya en opción viable a los ojos del elector mexicano.

En los últimos seis años se han dado algunos pasos en esa dirección. Particularmente frecuentes han sido las coaliciones a nivel nacional y local entre un partido registrado y organizaciones sin registro. Pero la dificultad principal reside en la alianza de los cinco partidos registrados, cuyas diferencias son, para un sector muy grande del electorado, incomprensibles.

Hasta ahora, la principal expresión política de los efectos de la crisis ha sido electoral. El aumento del voto de oposición es la forma que ha escogido una parte del pueblo de México para protestar. La pregunta es ¿quién sabrá aprovecharlo?

La derecha parece estar aprendiendo más aprisa que la izquierda. Su discurso se está volviendo más populista y agresivo; su política de alianzas sociales es ahora más hábil y sus disensiones internas son sorteadas con bastante habilidad. Frente a ella, la izquierda socialista comienza a verse lenta, rígida y dubitativa. Cada día es más evidente que en su seno es urgente una renovación de ideas, prácticas y hombres, una revolución en la revolución. El ritmo del proceso lo fija la crisis. Lo que está en juego, por ahora, es la configuración de la oposición al PRI en las próximas décadas. ¿Quién será el principal contendiente: la izquierda o la derecha?

PIEDRAS NEGRAS EN EL CAMINO¹⁷

El anuncio del triunfo del PRI en Piedras Negras provocó una violenta respuesta cuyo saldo es, hasta ahora, de cuatro muertos y 45 heridos graves. En Monclova, las cosas no llegaron tan lejos, pero la alcaldía fue ocupada y dos candidatos se

¹⁷ *Proceso*, número 427, 7 de enero de 1985.

enfrentan, investidos ambos como alcaldes “electos”. Como mancha de aceite, la airada protesta se extiende rápidamente a otras ciudades de los estados de Coahuila, México y Veracruz. En vísperas de numerosas justas electorales, las señales ominosas se multiplican.

Variaciones sobre un viejo tema nacional: la mayoría de los mexicanos no cree en los resultados electorales oficiales. Cuando la oposición es débil, los miran con escepticismo. Si consideran que el fraude vulnera sus derechos más elementales recurren a la protesta, a veces violenta. Muchos son los ciudadanos que han vertido su sangre en defensa del voto. Quizá no sabían —pobrecitos— que Carlos Fuentes ha afirmado que los mexicanos prefieren sufrir un régimen patriarcal (y quejarse de él) a tener verdadera libertad política.

No importa que la protesta sea contra un fraude perpetrado a la derecha o a la izquierda. La democracia política es indivisible. Se atiende como principio o se reduce a artificio demagógico. Si es defensa legítima del voto, el respeto a las mayorías y el principio de alternancia, merece toda nuestra solidaridad. Bajo un sistema corporativo, las oposiciones de signo adverso se encuentran frecuentemente en la encrucijada de la democracia.

En México, toda elección en la cual participa un adversario que a los ojos del pueblo puede vencer al PRI, es una contienda con represión y violencia. El partido de Estado domina, combinando con sabiduría la búsqueda de consenso y la amenaza velada; el respeto a la legalidad y su oportuna violación. Dispuesto a conceder, se empeña siempre en dejar claro que jamás permitirá que el poder se le escape por la vía electoral. Para desplazar al PRI, la verdadera batalla comienza siempre después de la victoria electoral, real o supuesta.

La experiencia se reproduce cíclicamente y, sin embargo, el pueblo no quiere resignarse. En 1940 surgió una aguda confrontación entre Ávila Camacho y Almazán; el Partido de la Revolución Mexicana (PMR) y el Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN). Al mismo tiempo que pactaba con la oligarquía y orquestaba una hábil campaña para ganarse a las movedizas capas medias, Ávila Camacho declaraba un mes antes de las elecciones: “No quiero que se derrame la sangre del pueblo, que nos debe ser bien preciada. Pero si se ponen en peligro las conquistas de la revolución y es necesario derramarla, será en defensa de esas conquistas” y más tarde: “Si después de las elecciones, los almanistas no quedan conformes, se usará contra ellos la fuerza, consciente y deliberadamente”.

Los comicios de julio de ese año estuvieron tan llenos de fraudes, que nadie conoce los verdaderos resultados. El día de las elecciones las casillas fueron un botín que se disputaban —frecuentemente a balazos— los grupos de choque del partido oficial y los almanistas. En las calles de la ciudad de México, se oían constantemente los movimientos de caballería y policía, así como las explosiones de bombas y armas de fuego. La prensa reportó 27 muertos y 152 heridos.

Tres semanas antes de las elecciones, el PRM aseguró que ganaría con 98 por ciento de los votos: estuvo a punto de cumplirlo. Según los datos oficiales, Ávila Camacho obtuvo 94 por ciento y Almazán sólo 5.7 por ciento. Pese a ello, ambos candidatos se declararon vencedores y ningún mexicano medianamente informado se tomó las cifras en serio. Lo decisivo era lo que haría el PRUN para defender sus votos.

Había, en ese partido, gente que estaba por el levantamiento armado. En septiembre y octubre de 1940 se registraron revueltas almazanistas en Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Sonora, Chihuahua, Durango, Morelos, Coahuila y Puebla. Todas ellas fueron rápidamente sofocadas, pero el número de muertos y heridos pasó del millar. Almazán fracasó en su intento de lograr apoyo de Estados Unidos y regresó a México “renunciando al honroso cargo de Presidente de la República”. El primero de diciembre, Ávila Camacho tomaba tranquilamente posesión. Esto fue hace precisamente 45 años.

La política del gobierno de Miguel Alemán causó fracturas en el seno de la “familia revolucionaria” y oposición abierta en grandes sectores populares. En las elecciones de 1952, la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, que lanzó la candidatura del general Henríquez Guzmán, logró capitalizar la mayor parte del descontento generado.

Durante la campaña, la Federación fue duramente hostilizada. Hubo matanzas en Nayarit y Puebla. Varios militares de alto rango, que apoyaban la oposición, recibieron licencias no solicitadas o fueron enjuiciados. Por lo menos 22 militares perdieron la vida y el primero de mayo del mismo año, una provocación llevó a la cárcel a algunos de los principales dirigentes del PCM. En los siguientes meses, menudearon los secuestros de figuras de la oposición.

El día de las elecciones fue, una vez más, escenario de fraudes descarados. Pero lo más terrible sucedió el 7 de julio, cuando millares de campesinos partidarios de Henríquez Guzmán celebraban la “victoria” de su candidato en la Alameda. Las tropas dispararon contra ellos, matando e hiriendo gravemente a varios centenares. Todos los mexicanos de aquella época coincidían en que la FPPM había logrado aglutinar a sectores muy amplios del pueblo. Sin embargo, según fuentes oficiales, sus resultados electorales fueron más bien magros (aun cuando, no tanto como los de Almazán). El candidato oficial, Adolfo Ruiz Cortines, obtuvo 74.3 por ciento de los sufragios y Miguel Henríquez Guzmán sólo 15.87 por ciento. El PAN, que por primera vez, lanzaba candidato a la Presidencia, sacó 7.82 por ciento y Lombardo Toledano sólo logró 1.98 por ciento. Una vez más, nadie se preocupó demasiado de las cifras, pero millones de ciudadanos estaban convencidos que Henríquez había ganado las elecciones. Esto sucedió hace 33 años. Historias conocidas, sí ¿pero quién se acuerda de ellas? Las campañas electorales locales de los últimos treinta años repiten ad infinitum la misma trama. Sólo cambian los ambientes y el nombre de los personajes. ¿Cuánto de eso ha

hecho desaparecer la reforma política de 1977? Hay sin duda un cambio de grado. Ahora aparecen diputados de minoría en casi todos los estados. Las muertes no son tan frecuentes. Aquí o allá, un presidente municipal de oposición logra mantenerse durante todo su mandato. Por lo demás, las elecciones siguen siendo tan fraudulentas como entonces y el sistema que consagra al partido de Estado está intacto.

Pero lo maravilloso es que este pueblo —que supuestamente prefiere un régimen patriarcal— vuelve a la carga en cada elección con bríos renovados para exigir el respeto a su voto. Y su demanda se vuelve cada vez más perentoria e impaciente.

La carrera electoral¹⁸

La reforma política de 1977 alteró bruscamente la situación de la izquierda independiente. Hasta entonces, ésta se había movido al margen del sistema político establecido. Ahora se veía convidada a participar en él. La respuesta fue variada: mientras algunos sectores como el PCM se apresuraban a responder favorablemente, otros como Punto Crítico mantenían sus reservas hacia el "parlamentarismo". Sin embargo, a medida que la confrontación electoral se colocaba en el centro de la vida política y los movimientos sociales decrecían, la mayoría de los partidos y movimientos organizados dieron pasos para integrarse. Para 1985 se habían registrado tres partidos PSUM, PMT y PRT y tanto grupos nacionales como movimientos populares en Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Durango establecían alianzas para participar en las elecciones. Actualmente si bien siguen existiendo organizaciones que repudian la actividad electoral, la mayoría participa en menor o mayor grado.

La Ley Federal de las Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) que el 19 del presente mes fue sustituida por el Código Federal Electoral, propició también transformaciones en las ideas y la estructura de la izquierda independiente. La perspectiva de un cambio revolucionario a corto plazo, alimentada por los choques violentos y la represión de los años 1958-73 ha ido perdiendo terreno. En cambio la posibilidad de un régimen democrático que garantice la representación de las fuerzas socialistas, gana adeptos.

La visión leninista de una pequeña vanguardia de revolucionarios profesionales que toma el poder encabezando la insurrección popular, cede paulatinamente el lugar a la idea del partido de masas abierto a las diferencias y matices existentes entre los trabajadores. La estrategia de construir un movimiento sindical, campesino y estudiantil independiente se vio condicionada por los trabajos tendientes a integrar un electorado socialista importante.

Sin embargo, la realidad actual no permite zanjar en forma tajante la polémica entre las diferentes posiciones. En un sistema político corporativo de partido único que excluye la alternancia y castra la actividad parlamentaria, el pluralismo auténtico representa una revolución política que no puede ser lograda exclusivamente por la vía electoral. Por otra parte, la lentitud de la respuesta popular a los devastadores efectos de la crisis impide prever su forma y magnitud futuras.

Otro de los efectos de la reforma política ha sido el de propiciar las tendencias a la unidad. En medio de una aguda competencia que llevó a cada grupo importante a buscar su propio registro, se ha impuesto la idea de que si la izquierda independiente no logra unificarse electoralmente, la emergencia de un sistema bipartidista parece inevitable. Los tres ensayos de fusión más importantes se han

¹⁸ *Proceso*, número 531, 5 de enero de 1987.

producido en vísperas de elecciones presidenciales: 1976, 1982 y 1988 y su calendario de actividades se ajusta a las exigencias de la ley electoral. Mientras que en Chile, Uruguay y Perú, Nicaragua y El Salvador, la izquierda ha pasado por largos periodos de colaboración unitaria, sin disolver sus componentes individuales en México predominan los ensayos de unidad orgánica.

El cambio de escenario de la insurgencia obrera, las ocupaciones de tierras y las rebeliones estudiantiles a la confrontación electoral, favorecieron al PAN, que lleva una ventaja de cuatro décadas en ese campo. Sería ilusorio pedir a la izquierda que compita ventajosamente con él desde sus primeros pasos. Y sin embargo, en las condiciones actuales, los resultados electorales y la actividad parlamentaria han terminado por ser los índices más visibles de su actividad.

Considerados en su conjunto, los partidos de izquierda obtienen alrededor de 10 por ciento de la votación, lo que indica la presencia de un electorado socialista importante. Sin embargo, esta cifra no expresa la presencia de una fuerza política organizada de la misma magnitud. Primero está la división cada vez más tajante entre la izquierda independiente y la "oposición leal" al PRI, entre partidos como el PSUM, PMT y PRT por un lado y el PPS y el PST por el otro. Luego la división en el seno mismo de la izquierda independiente.

Los datos electorales demuestran que esta última cuenta con un electorado estable en lento crecimiento. En 1979, el PCM (y la coalición de izquierda), único partido registrado, obtuvo 703 mil votos. En 1982, el PSUM y el PRT lograron un millón doscientos mil votos y en 1985 esos dos partidos con el agregado del PMT, alcanzaron un millón cien mil votos (El descenso en ese último año en el número absoluto de votos se debe a tendencias bien establecidas en las elecciones para diputados). Su participación en la votación global muestra la misma tendencia: 5 por ciento de los sufragios en 1979, 5.5 en 1982 y 6.2 en 1985.

Aun cuando los partidos de la "leal oposición" se han visto beneficiados con sospechosas transferencias de votos provenientes del PRI, puede afirmarse que su votación aparente es sólo ligeramente inferior a la de la izquierda independiente. En 1979, el PPS y el PST obtuvieron 653 mil votos, en 1982, 763 mil y en 1985, 789 mil.

Pero este desempeño deja ser estimulante si se consideran que una de las tendencias más notables es el retroceso sostenido de la votación para el PRI. Mientras que en las elecciones legislativas de 1976 este partido recibía 80 por ciento de los sufragios, en 1979 y 1982 su participación declinaba a 70 por ciento y en 1985 llegó al punto más bajo de su historia con 65 por ciento. Si bien nacionalmente mantiene todavía una cómoda mayoría absoluta, su dominio en el Distrito Federal, Chihuahua, Durango, Baja California Norte, Estado de México, Jalisco, Guanajuato comienza a erosionarse.

No es la izquierda la que aprovecha el crecimiento del voto opositor. Mientras que el número de sus sufragios crece con lentitud, el de la derecha se multiplica. En 1979, un millón 750 mil personas votaron por el PAN y el PDM. En 1982 su número llegaba a la cifra de 4 millones 100 mil y en 1985 alcanzaba la de 3 millones 200 mil. Su participación en el voto total en esos años fue respectivamente de 12.8, 19.6 y 18.2 por ciento. Su porcentaje es aún mayor en el Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, las dos Baja Californias, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

Apenas llegada a la arena electoral, la izquierda se enfrenta ya a un reto perentorio: si no logra superar a marchas forzadas sus limitaciones se verá marginada por una creciente polarización del voto entre el PRI y el PAN. El destacado papel que jugaba como fuerza de oposición extraparlamentaria, en los años 1958-1973, se verá cuestionada por sus fracasos electorales. Para entrar de lleno en la carrera por el voto opositor, la izquierda deberá aprender más aprisa que hasta ahora las reglas del juego electoral. Tendrá que adaptar sus programas y su discurso al estado de ánimo actual de los trabajadores y desprenderse de sus herencias sectarias.

La izquierda independiente tiene un serio problema de identidad electoral. En 1979 se presentó bajo el nombre de Partido Comunista Mexicano. Tres años más tarde, éste había desaparecido y su lugar se veía ocupado por el Partido Socialista Unificado de México y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1985 se agregaba el Partido Mexicano de los Trabajadores y, según todos los indicios, en 1988 habrá un nuevo y radical cambio de siglas. Las constantes metamorfosis no parecen disuadir a los electores más cercanos, pero son un obstáculo insalvable para la conquista del amplio voto no politizado. La actitud hacia la imagen electoral revela una dinámica interna de lucha y fusiones, que no respeta el ritmo de los cambios en la conciencia de los electores.

Otro de sus problemas es que su votación es, geográficamente hablando, más concentrada que la de cualquier otra fuerza electoral. En 1979, el PCM obtuvo 66 por ciento de sus votos en el área metropolitana de la ciudad de México y 14 por ciento más en los estados de Guerrero, Jalisco y Puebla. Para 1985, la situación no había cambiado significativamente, 57 por ciento de los votos del PSUM, PMT y PRT proviene del área metropolitana y otro 17 por ciento de los estados de Jalisco, Puebla y Veracruz. La izquierda independiente está ausente de la mayor parte del país y tiene una participación marginal en varios de los grandes centros de confrontación electoral. Su importancia a nivel nacional dependerá en buena parte, de su capacidad de extender su influencia fuera de sus baluartes tradicionales.

La multiplicación de sus representaciones electorales es fuente de graves problemas. Vista a través del desempeño de sus integrantes individuales, su participación en el voto total tiende a la marginalidad. En 1985, el PSUM obtuvo

3.2 por ciento de los votos, el PMT 1.6 por ciento y PRT, sólo 1.5 por ciento. La influencia electoral de esos partidos no es complementaria, sino competitiva. Lo que gana uno de ellos representa una pérdida para el otro. En 1985, la fuerte reducción de la votación del PSUM (de 980 mil a 578 mil votos) se debió primordialmente a la aparición en la justa electoral del PMT. La baja más aguda de sus sufragios se produjo precisamente en las entidades en las cuales el PMT lograba sus más altas votaciones. En escala menor, también la pérdida de 50 mil votos del PRT puede adscribirse a la misma causa. Pese a la promesa de Heberto Castillo de que los votos para su recién registrado partido provendrían del PRI y sobre todo del PAN, las cifras indican algo diferente. Mientras la votación global de la izquierda independiente se mantenía estática, la de los dos partidos ya registrados se redujo.

La implantación de la izquierda independiente como fuerza parlamentaria dinámica, exige acelerar la transformación de sus ideas y su organización electoral. Y eso debe producirse sin sacrificar su autonomía y sus nexos con los movimientos sociales extraparlamentarios.

Democracia universitaria¹⁹

La reunión del Consejo Universitario, mañana martes 10, puede ser decisiva para el conflicto universitario. Mucho depende de que en su seno se impongan la democracia y la visión innovadora o la cerrazón y el conservadurismo. Puede encaminarse hacia la búsqueda de consenso o bien a la defensa del principio de autoridad. La respuesta que dé a las esperanzas de los universitarios influirá también en su futuro.

El conflicto de la UNAM ha quedado plenamente definido. Ni las campañas de desinformación, ni las calumnias contra los estudiantes, ni los rumores sobre la intervención siniestra de fuerzas externas, pueden ocultarlo. Una vez más México vive un periodo de reforma universitaria.

En 1929, en un ambiente económico y político parecido al actual, los estudiantes de la universidad se lanzaron a una huelga que duró 68 días. Demandaban:

- Autonomía Universitaria
- Paridad entre estudiantes y maestros en el Consejo Universitario.
- Derogación del plan de estudios vigente.

El logro más importante del movimiento fue la autonomía.

El símil no debe ser exagerado. Esta vez, la confrontación tiene un carácter interno, sus expresiones son menos violentas. Pero todo indica que después de catorce años de relativa pasividad, la comunidad universitaria se interna en un prolongado periodo y confrontación que aportará transformaciones importantes en las instituciones de educación superior.

Independientemente de sus motivos iniciales, los protagonistas tendrán que ceñirse al problema que los ha convocado: la reforma universitaria. El impacto de sus actos en la vida nacional dependerá de las soluciones que a este respecto presenten.

El rector Jorge Carpizo inició el proceso. Su documento *Fortaleza y Debilidad* y las medidas aprobadas a principios de septiembre fueron los primeros pasos de una reforma desde arriba, "pasiva" diría alguien. Diseñada en las oficinas de la administración fue aprobada por un Consejo dócil que ni siquiera se tomó la pena de examinarla detenidamente. Algunos universitarios emitieron opiniones, pero sólo un puñado participó en la decisión.

La aparición del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) cambió radicalmente el panorama. Su petición de derogar los acuerdos cuestionaba no sólo la orientación de éstos sino también los procedimientos de la reforma. Si las autoridades hubieran accedido a la totalidad de la demanda, el proceso hubiera quedado

¹⁹ *Proceso*, número 536, 9 de febrero de 1987.

temporalmente trunco. Pero los prolongados regateos transformaron un veto en una proposición alternativa: la realización de un congreso general y democrático de reforma universitaria. Pronto el sindicato de trabajadores se sumó a la iniciativa y actualmente maestros e investigadores se incorporan al debate a través de sus agrupaciones académicas. La reforma se ha vuelto irreversiblemente un proceso desde abajo, "activo". Los universitarios han entrado en escena y no la abandonarán hasta que la representación termine. Si hay reforma, ésta tendrá que contar con la participación activa de miles de ellos cuyas iniciativas influirán notoriamente en el resultado final.

La reforma universitaria puede adquirir cauces democrático—parlamentarios o tonos violentos, pero ellos serán sólo el marco de una inevitable y prolongada confrontación de fuerzas e ideas. Su desenlace puede inclinarse hacia una universidad popular de alto nivel científico o coincidir con el proyecto de la nueva derecha, pero la decisión ya no está exclusivamente en manos del poder.

Una vez más, son los estudiantes los que han abierto las puertas a la democracia. No sólo impusieron su presencia, sino que posibilitan la participación de académicos y trabajadores.

Los universitarios están apenas entrando en materia. Antes de confrontar los diferentes aspectos de la reforma, deben resolver quién y cómo decidirá sobre ellos. El martes 10, el Consejo tendrá que pronunciarse. Puede encauzar a la reforma por una vía parlamentaria o empujarla por la pendiente tradicional de represión-huelga-represión que tan bien conocemos.

Hasta ahora se han dado pasos importantes en la primera dirección. El debate público entre autoridades y estudiantes ha demostrado que ambas fuerzas están abiertas a la negociación. La adopción unánime de la idea del congreso es una prueba de la disposición de las partes a dirimir el problema por la vía del voto de los universitarios.

El conflicto actual se deriva de una diferencia en materia de democracia ¿cuáles deben ser las atribuciones y la composición del próximo congreso? ¿Qué relación guarda éste con el Consejo Universitario, máxima autoridad según la ley orgánica de la UNAM?

Todo indica que sobre asunto tan crucial, la mayoría de los universitarios no se contentarán con ser consultados. Quieren participar con su voto, en la toma de decisiones. A nivel de su plantel, directamente y al de la universidad, por medio de representantes elegidos por votación directa, universal y secreta. Esta es una demanda que ha dejado de ser exclusivamente estudiantil para ser adoptada por el sindicato de trabajadores y numerosos colegios de profesores e investigadores. El carácter resolutivo del Congreso Universitario se manifestaría en su facultad de votar los proyectos de reforma y la de otorgar a los que obtengan mayoría el carácter de obligatoriedad.

Es verdad que la convocatoria de un congreso resolutivo puede entrar en conflicto con la Ley Orgánica que consagra al Consejo Universitario como la máxima autoridad de la institución. Pero por ahora nadie propone la reforma de esa ley. Esa dificultad tiene solución legal, si el Consejo nombra una comisión para que convoque a un Congreso con un fin específico, temporal y limitado y si se compromete moralmente a hacer suyos sus acuerdos.

Queda por ver si este martes, el Consejo da luz verde para el inicio del más importante experimento de gobierno democrático y pluralista en la historia de la UNAM.

HACIA EL CONGRESO²⁰

Las resoluciones del Consejo Universitario el memorable martes 10, representan un paso en la democratización del gobierno de la UNAM. El máximo órgano de gobierno actual ha aceptado delegar en manos de un Congreso mucho más amplio y representativo que él mismo, la legislación de una reforma universitaria global.

Si la reforma universitaria es un conjunto de medidas que transforman profundamente tanto la actividad académica como la administración, el congreso tendrá inevitablemente un carácter constituyente. La nueva estructura de la UNAM será así obra del conjunto de su comunidad.

En la madrugada del día 11, los únicos perdedores fueron los representantes de la corriente más autoritaria de la universidad. El búnker de los que se oponían a la negociación con los estudiantes y al surgimiento de cualquier órgano democrático que limitara la autoridad del Consejo Universitario; los partidarios a ultranza de una reforma universitaria desde arriba y, por consecuencia, represiva.

Los demás participantes en el proceso, salieron ganando. Los estudiantes lograron una gran victoria, gracias a la madurez con la que han conducido su movimiento, su incansable actividad y su disciplina consciente.

Con un gesto de realismo y visión Jorge Carpizo dejó de ser el hombre del 11 de septiembre, para transformarse en el "Rector del Congreso".

Convocados a participar como fuerza autónoma, los académicos recibieron un aliciente a la organización que se manifestó de inmediato en un ascenso del Consejo Académico Universitario (CAU).

Los trabajadores sindicalizados lograron la participación de 12.5 por ciento en la Gran Comisión que prepara el congreso, mejorando considerablemente su participación en el proceso.

Pero la pregunta que se hacen muchos, es si la UNAM como casa de estudios será más eficiente por ser más democrática. ¿Cumplirá mejor con sus tareas

²⁰ *Proceso*, número 537, 20 de febrero de 1987.

nacionales? ¿Se elevará el nivel de enseñanza e investigación? ¿Saldrán sus egresados mejor preparados?

Esta cuestión exige una respuesta clara. A diferencia de lo que sucedió en 1968, el movimiento actual tiene objetivos básicamente universitarios. No se plantea transformar la sociedad, sólo la Universidad. Por eso los criterios para juzgar su éxito o su fracaso, se desprenden de su influencia en el futuro de la UNAM como máxima casa de estudios.

En realidad, sólo existen para la UNAM, tres tipos de gobierno posibles. El primero es el gobierno de la burocracia. Una burocracia cada vez más ligada con y orientada hacia el Estado. Apoyándose en los grupos de poder existentes en las diferentes dependencias, tiende a reproducir las estructuras corporativas existentes en la sociedad política.

El segundo, es un gobierno de democracia universitaria. Este se constituye con los representantes electos por todos los universitarios, con una proporcionalidad determinada por las funciones específicas de la institución. El ejercicio del poder se vuelve un ejercicio plural, sometido a la acción de fuerzas ampliamente representativas.

El tercero es el gobierno de las asambleas. Cada universitario, estudiante, maestro o trabajador es un voto. La asamblea se constituye libremente y sus decisiones son ley. Participa en el gobierno, quien asiste a la asamblea. La administración responde ante ella y es revocable en todo momento.

Ninguno de ellos es nuevo. Todos han sido objeto de experimentos prolongados en la UNAM y en otras universidades. La lucha por la composición del congreso y la apropiación de sus resultados, no puede escapar a la influencia de esos tres modelos.

Estoy convencido que ni el gobierno de la burocracia, ni el de la asamblea son adecuados para la UNAM. El primero, tiende a un eficientismo subordinado a la política presupuestal del gobierno, a la hipertrofia de la administración, la marginación de la mayoría de los académicos y la exclusión de los intereses legítimos de los estudiantes. El otro ignora las ponderaciones representativas que una institución académica como la Universidad impone. Además, el asambleísmo prolongado, desemboca siempre en la restauración burocrática.

La forma de gobierno más adecuada a la reforma es aquella que combina el saber con la representatividad, el conocimiento técnico con la participación estudiantil, la presencia de las diversas corrientes existentes en la Universidad, con la capacidad de decisión. No es una fórmula ideal, sino una búsqueda responsable y a la vez audaz de una combinación entre movimientos estudiantil, actividad magisterial y presencia de la administración.

La convocatoria del congreso en los términos actuales, apunta hacia una reforma bajo un régimen de democracia universitaria. Pero la situación no es irreversible. Fuerzas poderosas intentarán desvirtuar el proceso o prolongarlo hasta la inanición.

Mucho depende del desarrollo de la principal fuerza democratizadora: el CEU. El movimiento estudiantil se interna por un camino que le es poco familiar y que le exigirá un grado de madurez todavía mayor al demostrado hasta ahora. Con la habilidad sin precedente ha sabido pasar de la etapa de la derogación de las medidas a la de la convocatoria del congreso. La que le espera es aún más complicada: la lucha por la composición y realización del congreso.

Pero ahora, las corrientes que confluyen hacia la democracia universitaria, se diversifican y amplían rápidamente: los maestros que desde el principio han apoyado el proceso como Luis de la Peña, Manuel Peimbert, Annie Pardo, han dejado de estar aislados. Toma forma el CAU, por incipiente de organización de los maestros e investigadores democráticos. Algunos directores de facultades, institutos y posgrados como Fausto Burgueño, Arturo Azuela y Sergio de la Peña se definen cada vez más claramente. Consejeros universitarios como López Austin o Héctor Tamayo han hecho público su compromiso con una salida democrática. Y todavía más importante, en muchas dependencias, crece la participación de los universitarios. En la UNAM, puede surgir una democracia universitaria eficiente.

Política a la mexicana

¿Peligro fascista?²¹

Cada vez con más insistencia, los voceros del PRI hablan de un peligro fascista en México. Cruickshank García, dirigente máximo del PPS, va más lejos aún. Ha afirmado que “el imperialismo norteamericano quiere que toda América Latina sea un Estado corporativo fascista... por eso trata de evitar que en México haya elecciones libres y pacíficas y que llegue al poder en forma pacífica el candidato José López Portillo, porque saben que a él no lo han quebrantado”.

¿Será verdad? ¿Existe una fuerza política y militar, capaz de imponer a nuestro país un viacrucis como el de Brasil, Chile y Uruguay? ¿Es este el principal enemigo que debemos tener en mente en el momento actual?

El fascismo es un movimiento inspirado por los grandes monopolios y las oligarquías. Aparece y cobra fuerza en épocas de crisis, *cuando el ascenso del movimiento obrero y popular pone en peligro la hegemonía política de la burguesía y la vigencia del capitalismo*. Se propone salvar a la clase dominante, por medio de la liquidación de las formas de vida democrática, la instauración del terror y el aniquilamiento de las organizaciones populares. Las oligarquías sólo apoyan a los grupos fascistas como un recurso de última instancia. La historia les ha enseñado que las dictaduras fascistas, al exhibir descaradamente el carácter de clase del Estado burgués, al remover las envolturas democráticas que lo arropan, ponen en peligro —a la larga— su existencia misma.

El fascismo no debe ser confundido con un simple golpe militar o un periodo de represión. Se trata de un movimiento que se propone la abolición de la democracia y la instauración de una dictadura que silencia *totalmente* las expresiones políticas de los trabajadores. Para ello, el fascismo debe contar con un apoyo de masas y éste lo encuentra, aprovechando viejos prejuicios y las angustias y sufrimientos que produce la crisis. En medio de visiones apocalípticas sobre el futuro, los fascistas infunden un odio irracional hacia el socialismo y sus portadores, a quienes presentan como los causantes de todos los males y peligros que atormentan al pueblo.

En México existen grupos fascistas. ¿Quién no recuerda al MURO y sus semejantes? Pero ellos no tienen influencia de masas, ni tampoco cuentan con el apoyo incondicional de los círculos más reaccionarios de la oligarquía.

Los monopolios regiomontanos quieren fortalecer su posición como grupo de presión. Por eso impugnan la política del gobierno y exigen que éste renuncie a las tibias reformas que ha esbozado; que reprima al movimiento progresista; que modere su entusiasmo tercermundista. Para lograr sus fines, intentan convertir al PAN en instrumento incondicional de sus designios; compran periódicos; aglutinan a su alrededor a los círculos más descontentos de la burguesía. Pero ¿por qué habría de recurrir a una aventura de tipo fascista? Una cosa es que la Ley de

21 *El Día*, 29 de abril de 1976.

Asentamientos Humanos y los pronunciamientos demagógicos del gobierno sean confundidos por sectores asustadizos de la burguesía media y pequeña con una política de corte socialista, y otra, muy diferente, que los jefes y gerentes de Monterrey los puedan considerar como un peligro para el orden establecido. Sus grupos más recalcitrantes presionan a la burocracia gobernante, pero no cometerían el error de derrocar a un régimen que pese a su verbalismo socializante, les ha asegurado privilegios y ganancias fabulosas, en un ambiente de relativa estabilidad. Y si esa idea pudiera ocurrírseles ¿qué pasos reales han tomado para darle vida a un movimiento de signo fascista?

Al agitar el espectro del fascismo en México, los voceros del PRI aprovechan algunas presiones del imperialismo y sus asociados locales, para darle nueva vida al monstruo derechista. ¡Apoyen al gobierno, porque ya viene el fascismo!

Cuando algún sector de la burguesía se excede, invierten los términos evocando otras imágenes sombrías: “Si no hacen sacrificios, los marginados se rebelarán y les quitarán todo lo que tienen”. ¡Apoyen al gobierno, porque ahí viene el socialismo!

¿Burdo, no? Además, cada día menos convincente.

¿Dónde quedó la nación?²²

En la primera semana de agosto de 1982 estalló en México la crisis económica más profunda que el país haya conocido desde 1929. Primero fueron los aumentos de 100 por ciento en los precios de productos básicos como la gasolina, la electricidad, la tortilla y el pan, que dispararon el proceso inflacionario del año hacia los tres dígitos. Luego una devaluación del peso de más de 70 por ciento que, herido de muerte, inició una vertiginosa trayectoria descendente. Días después, el gobierno de México se declaró incapaz de asegurar el servicio de la deuda externa —una de las más grandes de los países en desarrollo— y comenzó a negociar con la banca internacional una prórroga en los pagos y una reestructuración de la deuda.

Vacías las arcas, el gobierno redujo drásticamente el gasto. Cientos de importantes obras fueron suspendidas y miles de proyectos, archivados. La construcción comenzó a declinar rápidamente, arrojando al desempleo a cientos de miles de obreros. La industria automotriz, que ya desde principios del año pasaba por serias dificultades, se vio obligada a reducir en 25 por ciento su producción y la densa red de industrias conexas siguió el mismo patrón. La industria textil y la de máquinas-herramientas redujeron su producción. El grupo Alfa —baluarte del capital monopólico mexicano— estaba prácticamente en quiebra. Ya en los primeros meses del año, las tasas de interés llegaron a 80 por ciento. La mayoría de las empresas sufrían falta de liquidez e incapacidad de pago, que colocaba a muchas de ellas al borde de la quiebra. Otras, que tenían elevadas deudas en dólares o que dependían de la importación de materias primas, se vieron envueltas en crecientes dificultades. La frontera norte se volvió zona de desastre: las clases medias, golpeadas por la inflación y la desocupación dejaron vacías las grandes tiendas, símbolo de su reciente ascenso.

Las primeras medidas restrictivas del mes de agosto sumieron a los empresarios en un pánico indescriptible. Envuelta en un frenesí de retiros de depósitos y giros al exterior, sembraba y alimentaba los más negros rumores esperando lo peor. Clase dominante sin vocación de poder, reafirmó en aquellos días su fama de mediocridad. Prepotente a la hora del auge y la especulación, en la adversidad se dejó dominar por el pánico.

La crisis no fue rayo inesperado en apacible día de verano. Mientras el gobierno se empeñaba en evadir la palabra, las corrientes socialistas sostuvieron durante los años setenta, la tesis de que la economía mexicana conocía una crisis estructural cargada de peligros. Además, 1976 fue un ensayo general de 1982. Sólo la ceguera y el voluntarismo podían ignorar su mensaje.

Los síntomas de la década eran evidentes: inflación, reducción de la inversión privada, bajas tasas de crecimiento, descenso del ingreso real de los trabajadores,

²² *El Buscón*, número 1, 1982.

crecimiento desmesurado de la deuda externa, déficit en la producción alimenticia, desajustes comerciales crecientes, multiplicación de las quiebras de empresas medianas y pequeñas, desempleo creciente y especulación desenfrenada. A partir de 1978, una recuperación basada en la petrolización de la economía, mientras otros desajustes se acentuaban.

DE UNA POLÍTICA PARA LA CRISIS A UNA CRISIS DE LA POLÍTICA

Durante los nueve años de la crisis, el gobierno mexicano mantuvo una política económica de modernización favorable a los monopolios y al capital especulativo. Mientras se esforzaban en defender su hegemonía introduciendo una reforma política y evitando un deterioro demasiado brusco de los niveles de vida populares, los gobiernos de Echeverría y López Portillo se negaron a adoptar medidas de fondo para modificar el patrón de desarrollo. En esos años se fortaleció la presencia de la izquierda socialista en el país. Sin embargo, a la vez que lograba éxitos en la esfera política, no lograba influir en la orientación económica. Sus posiciones —entre las cuales la nacionalización de la banca y el control de cambios ocupaban un lugar importante— fueron sistemáticamente rechazadas.

El desastre de agosto es el fracaso mancomunado de la política económica del gobierno y el capital financiero que se vieron envueltos en un escandaloso *affaire* de especulación fraudulenta.

Tres semanas después del descalabro económico, se manifestaba abiertamente una aguda división en el seno de la clase dominante. El primero de septiembre, algunos miles de mexicanos se enteran al despertar, que esa misma mañana, en el Diario Oficial se habían publicado sendos decretos nacionalizando la banca e instaurando un riguroso sistema de control de cambios. Seis horas más tarde, todo el país escuchaba en la temblorosa voz del presidente José López Portillo, las razones y emociones que determinaron la medida. Primero defendió la política de su gobierno: “Nuestra política económica no ha sido equivocada; está expresada en planes globales y sectoriales que nos permitieron en el primer año, restaurar la economía que en 1976 recibimos, y crecer en los siguientes como nunca en nuestra historia”.

Luego, señaló a los culpables internos de la grave crisis por la que pasaba el país:

El manejo de una banca concesionada, expresamente mexicanizada, sin solidaridad nacional y altamente especulativa... significó que en unos cuantos años, sustanciales recursos de nuestra economía generados por el ahorro; por el petróleo y la deuda pública, salieran del país por conducto de los propios mexicanos y sus bancos, para enriquecer más a las economías externas, en lugar de canalizar a capitalizar al país... La banca privada mexicana... ha pospuesto el interés nacional y ha fomentado, propiciado y aún mecanizado la

especulación y la fuga de capitales... Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear.

Todavía no se había apagado el eco de esas palabras cuando airadamente, los banqueros dieron a conocer el siguiente día su respuesta: El causante principal de la crisis es la política económica equivocada del gobierno; los ahorradores mexicanos sacaron su dinero del país, porque perdieron su fe en los gobernantes; al querer ir demasiado aprisa en la expansión económica, el gobierno desató la inflación y propició la sobrevaluación del peso. Su tardanza en la devaluación instigó la fuga de capitales. La nacionalización de la banca es una medida innecesaria cuyo objetivo principal es transferir los efectos del fracaso de la política económica sobre la cabeza de los banqueros que no son responsables. "Se ha traspasado un umbral crítico. La solidez de la empresa privada, su futuro, su papel como centro de producción y de empleo, vital para la reconstrucción del país, están en entredicho."

La alianza —no exenta de fricciones— entre el capital financiero empresarial y el gobierno que había sido la base de la conducción económica durante los últimos cinco años, quedaba hecha añicos. Bajo el impacto de la crisis, se había roto un acuerdo que aseguraba al gran capital jugosos beneficios a cambio de su apoyo activo a la política económica del gobierno. A la hora de mayor dificultad, la banca no supo cumplir con sus compromisos de financiamiento del Estado. Por otra parte, la nacionalización —en los términos en que se hizo— es una afrenta a la esencia misma de la libertad de empresas que no será perdonada fácilmente por los banqueros.

Se ha iniciado entre ellos una confrontación dura y prolongada. La fisura es aún más grave si se considera que no sólo pasa entre capital financiero y Estado, sino que atraviesa las filas mismas de la burocracia estatal en el seno de la cual existe ya un sector que está cada vez más lejos de la base social del PRI y más cerca del gran capital privado. La principal preocupación del nuevo Presidente será resanar la grieta. La gran oportunidad que se abre ante las fuerzas democráticas consiste en aprovechar la crisis política para impulsar su propio programa y asegurar la nacionalización radical de la banca.

EN ESPERA DEL "JUICIO FINAL"

Después de los primeros escarceos, la confrontación entre el capital financiero y el Estado ha tomado vías subterráneas. Aparentemente se ha establecido una tregua, lo más probable es que se esté negociando afiebradamente. El gran capital no aceptará una nacionalización radical de la banca, sin librar batalla.

En su artículo primero, el decreto de nacionalización señala que "se expropián a favor de la Nación las instalaciones, edificios, mobiliario, equipo, activos, cajas, bóvedas, sucursales, agencias, oficinas, inversiones, acciones o participaciones que tengan en otras empresas, valores de su propiedad, derecho y todos los

demás muebles e inmuebles, en cuanto sean necesarios a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. El problema es hacia dónde se inclinará el “juicio”. Si lo hace hacia la aplicación general y drástica de la voluntad esbozada en la ley, la decisión del presidente José López Portillo habrá introducido cambios profundos en el sistema de propiedad y las condiciones de acumulación del capital en México. El capital financiero empresarial se verá debilitado y el sector estatal alcanzará una envergadura y un poderío poco comunes en un país capitalista. Si se limita y se tuerce casuísticamente, redundará en una intervención estatal limitada de la banca cuyo resultado será el debilitamiento de las formas especulativas del capital y su reorientación en condiciones favorables hacia nuevas ramas de la producción.

La banca privada mexicana no era un intermediario pasivo entre el ahorrador y la inversión. Cumplía funciones activísimas de creador de moneda, mediador de créditos y promotor de la inversión capitalista, que le permitieron jugar un papel muy importante en la concentración y en la centralización del capital y convertirse en pilar básico del capital financiero. Esta función se consolidó aún más a partir de la creación de la banca múltiple en 1975.

Desplazando progresivamente a la oficial, la banca privada y mixta controlaba dos tercios de la captación. Financiaba el déficit del gasto público, que en la década de los setenta adquirió proporciones impresionantes y era el intermediario inevitable en las transacciones con el exterior. Los cuatro grandes, Bancomer, Banamex, Serfin y Comermex tenían participación mayoritaria en varios cientos de las empresas industriales, comerciales y de servicios más importantes del país y en los últimos años su cartera de acciones no bancarias, de seguros y sociedades de inversión influían decisivamente en la captación en el mercado bursátil. Tan sólo Banamex era uno de los principales accionistas de 23 de las empresas importantes que se cotizan en la bolsa de valores. Además, a través de sus lazos no bancarios, los grandes controlaban una parte importante del ahorro depositado en sus arcas.

Baluartes del capital monopolista y sus ganancias, los círculos de la gran banca eran los representantes de la posición más reaccionaria posible en el México de hoy. Partidarios de la política a la Friedman, que ha sido aplicada en algunos países del Cono Sur, promovían la libertad de acción de las transnacionales, la liberación de los precios, la política de austeridad salarial, la entrada al Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas (GATT), la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reducción del presupuesto público. Por eso la nacionalización de la banca, la intervención del Estado en el corazón mismo del capital financiero debe ser defendido y promovido por todos los sectores progresistas. El Estado mexicano es portavoz del desarrollo capitalista del país, pero es también la forma suprema de organización de una sociedad dividida en clases. En la medida en que se basa principalmente en la hegemonía y no en la fuerza, integra también a los representantes de las otras clases de la sociedad,

incluidas las explotadas. Cada gobierno expresa la cambiante relación de fuerzas y debe tomar en cuenta las demandas y avances populares. Por eso una banca intervenida por el Estado es mejor que una banca controlada exclusivamente por el capital financiero. El paso abre *posibilidades* de aplicar una política anticrisis acorde con los intereses populares y reorientar el desarrollo económico y la distribución del ingreso. La transformación de esa posibilidad en realidad, será motivo de una agria disputa.

EL CAPITALISMO DE ESTADO: UN MAL MENOR

La magnitud, duración y términos de la nacionalización no han sido aún determinados. Una vez que esto suceda, el uso y orientación del nuevo instrumento son inciertos. La banca nacional —como todo el sector estatal de la economía— será un campo de batalla permanente.

El decreto de expropiación no ha sido aún elevado a rango constitucional y los banqueros han apelado legalmente. Sólo los más altos funcionarios directivos han sido relevados de sus puestos. El resto de los gerentes siguen siendo los mismos hombres ligados a la empresa privada. El gobierno ha declarado que regresará al ámbito privado las acciones no bancarias, propiedad de la banca. También ha dicho que el control de cambios será temporal. Aun cuando la banca internacional no ha visto ningún peligro serio en la nacionalización, el embajador estadounidense John Gavin y el FMI han externado su oposición a las medidas iniciales adoptadas por el director del Banco de México, Carlos Tello.

La nacionalización de la banca no fue, como la del petróleo, expresión de una voluntad y un proyecto político largamente sostenido. Mientras que, ya en 1925 el gobierno de Calles planteaba la nacionalización del petróleo, los gobiernos de Echeverría y López Portillo habían declarado en varias ocasiones que la nacionalización de la banca no era posible ni deseable. La nacionalización fue una respuesta de emergencia, un acto que contradice profundamente la política sostenida hasta este momento.

Además viene marcada por matices autoritarios: el sindicato en formación de los trabajadores bancarios ha sido recluido —sin que medie consulta propia— en el apartado B de la ley del trabajo. La banca nacionalizada es un instrumento que puede servir a diversas políticas económicas. Puede seguir el destino de Petróleos Mexicanos (Pemex), que en los años del auge petrolero promovió la expansión del gran capital, la corrupción y el desperdicio en el seno de la burocracia estatal. Puede también transformarse en motor de un viraje estructural de la política económica gubernamental.

Para cambiar el rumbo del país no basta nacionalizar la función bancaria de intermediario entre el ahorro y la inversión, debe afectarse su función de baluarte del capital financiero. Esto significa, ante todo, nacionalizar las acciones industriales y comerciales propiedad de la banca, todas ellas, sin excepción.

Algunos publicistas de izquierda, no han entendido el sentido de la nacionalización y se preocupan de la rentabilidad para el Estado de un complejo tan heterogéneo como el que resultaría de las acciones industriales, comerciales y de servicios propiedad de la banca. El problema central es otro. Se trata de debilitar decididamente al capital financiero; arrancar de su dominio el máximo posible de espacios en la economía nacional. Una vez nacionalizadas todas las acciones en manos de la banca, éstas deben constituirse en la base de dos tipos de empresas: estatales y cooperativas.

El segundo paso es elevar el decreto a rango constitucional en términos que cierren todos los resquicios posibles de participación del capital financiero en la propiedad de las acciones y en la administración de la banca. Los puestos gerenciales deben ser ocupados por personas que apoyen la medida y que estén dispuestas a librar la lucha que se avecina. Al mismo tiempo, debe comenzarse a discutir las formas de participación de los trabajadores en la fiscalización no sólo de la banca recién nacionalizada, sino de todas las empresas estatales.

El tercero, es poner en marcha una nueva política económica —en la cual la banca estatal jugará un papel decisivo— para enfrentarse a la crisis con reformas que defienden el nivel de vida de los trabajadores, amplíen el mercado interno, impulsen el desarrollo de la industria básica y la agricultura cooperativa y modernicen las empresas medianas.

Para vencer las tendencias a reducir el sentido antimonopolista de la nacionalización, debe impedirse que la confrontación se mantenga encerrada en los círculos cupulares de la oligarquía financiera y burocracia estatal.

La banca nacionalizada vio la luz envuelta en una histeria nacionalista sin precedentes. Viniendo de los círculos oficiales esto no sorprende. Cada vez que se crean situaciones críticas —como recuerda Rodolfo Peña en un artículo de *Uno más uno*— la burocracia gobernante hace un llamado a la unidad nacional bajo su dirección. Cada vez que interpela al pueblo, toca sus cuerdas más vitales: la de los mitos nacionales. Pero más sorprendente fue la disposición de algunos sectores de la izquierda a sumarse al coro. Se dijo que la decisión del primero de septiembre recuperaba para la nación una serie de recursos que usufructuaba un reducido grupo de privilegiados, que era un reencuentro de la nación con sus más preciadas herencias históricas y que iniciaba una nueva etapa de dignidad nacional para el Estado y el país. Salto en el vacío. Sólo tardaron algunos días en darse cuenta que el México de 1982 no es el de 1938 y que hoy los vapores nacionalistas sólo sirven para encubrir un estatismo despótico y la realidad de una sociedad cada vez más tajantemente dividida en clases antagónicas.

Hay en la nacionalización de la banca un elemento completamente nuevo en la historia de México. Hasta ahora todas las nacionalizaciones —con excepción de la reforma agraria— fueron aplicadas al capital extranjero; ferrocarriles, petróleo y electricidad son rescates para la nación. En cambio ésta es la primera vez que la

nacionalización se aplica a un sector importante de la burguesía mexicana posrevolucionaria. Mientras que en las expropiaciones anteriores predomina el elemento antimperialista, la actual resuelve un conflicto interno. En un momento de grave emergencia, el Estado recoge una demanda que la izquierda socialista viene sosteniendo hace más de dos décadas. Este no es un acto de unidad nacional frente al enemigo extranjero, sino la revelación descarnada de que existen, dentro de la nación, dos naciones: la del pueblo trabajador y la de los monopolios. La diferencia entre la nacionalización del petróleo y la de la banca expresa el camino recorrido por el capitalismo mexicano. De la supeditación de las contradicciones internas a la lucha contra el imperialismo, a la expresión cristalina de éstas.

La expropiación de un sector de la burguesía no se hizo para debilitar al capitalismo mexicano, sino para fortalecerlo. Su propósito fue poner fin a una fiebre especulativa que ponía en peligro la acumulación de capital y su reproducción. Esa es una manifestación del aumento de las contradicciones internas del sistema. El capitalismo de Estado es un mal menor, no una panacea.

Una cosa es luchar por la nacionalización de la banca, y otra muy diferente, mistificarla. La propiedad estatal no es una propiedad social. La banca no ha sido recuperada por la nación, pasa a manos del Estado del desarrollo capitalista, la asistencia pública y el autoritarismo.²²

México 12 de septiembre de 1982.

Ilusiones perdidas²³

Hace 25 meses México tenía una banca privada que controlaba no sólo la actividad financiera del país, sino que influía también, decisivamente, en la marcha de los sectores más dinámicos y modernos de la industria, el comercio y los servicios.

¿Qué ha sido de ella? El primero de septiembre de 1982 la banca fue nacionalizada. ¿Liquidó esta medida el capital financiero mexicano? ¿Alteró decisivamente la composición del bloque social que domina el país?

Estas preguntas pueden comenzar a ser respondidas. Uno de los servicios que ha prestado la nacionalización de la banca al país —y no es el más insignificante— es el de disipar el mito de la nacionalización.

La historia contemporánea de México está marcada por una serie de medidas de expropiación y nacionalización que han influido profundamente en la conformación del régimen social y económico en el cual vivimos. Pero —fuera de exaltaciones patrioterías— cada una de ellas tiene un significado social diferente, que sólo puede ser dilucidado en el contexto en el cual se produce.

- Intervención de los ferrocarriles en el porfirismo.
- Incautación de la banca en septiembre de 1916.
- Expropiación de latifundios en la segunda mitad de los años treinta.
- Nacionalización del petróleo.
- Mexicanización de la industria eléctrica.
- Nacionalización de la banca (primero de septiembre de 1982).

Medidas que, todas ellas, tienen algo en común: fortalecen el papel del Estado en la economía y la sociedad en general. Para los estatólatras de todos los colores y sabores el análisis termina ahí. Lo que fortalece al Estado es bueno, ergo todas las nacionalizaciones son bienvenidas.

Pero para quien se identifica con los intereses de los trabajadores, la cosa es más compleja. Cada nacionalización tiene un significado distinto y una incidencia diferente en la sociedad.

Desde el primer momento, la nacionalización de la banca se presentó como una medida cargada de posibilidades contradictorias. La ambigüedad misma del decreto del primero de septiembre abría muchas puertas:

Se expropiaban —señalaba— a favor de la Nación las instalaciones, edificios, mobiliario, equipo, archivos, cajas, bóvedas, sucursales,

²³ *Proceso*, número 414, 8 de octubre de 1984.

agencias, oficinas, inversiones, acciones o participaciones que tengan en otras empresas, valores de su propiedad, derecho y todos los demás muebles e inmuebles en cuanto sea necesario a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Pero cuál era el juicio de la Secretaría de Hacienda? Este vendría definiéndose lentamente durante los siguientes dos años.

Se ha dicho que las medidas de los últimos dos años han sido un retroceso respecto a la nacionalización del primero de septiembre de 1982. Mentira. El decreto de ese día memorable, contenía intenciones condicionadas explícitamente al “juicio de la Secretaría de Hacienda”. La banca nacionalizada nunca fue algo diferente a lo que es hoy. El decreto encerraba esperanzas magníficas. La posibilidad de su realización radical sólo existió en algunas mentes cuya fe en el destino popular del Estado mexicano actual es de un candor admirable... y totalmente carente de fundamento.

Gracias al testimonio de Carlos Tello, conocemos ahora algo de la historia interna de la medida. Después de la explosión de la crisis, en febrero de 1982, el presidente López Portillo solicitó un estudio sobre las diversas líneas de acción que podían aplicarse para hacer frente a la crisis. A medida que ésta se fue agravando, cobró fuerza la quinta opción, que incluía la nacionalización de la banca y el control de cambios. Las decisiones fueron adoptadas como solución drástica a una fuga de capitales que amenazaba sumir al país en el caos más absoluto. El sentido estructural de la medida fue dejado abierto para que lo resolviera el nuevo Presidente que entraba en funciones noventa días más tarde.

Los criterios políticos en que se basaba la decisión era —siempre según Tello—: 1) los financieros internacionales no se opondrían activamente, ya que sus intereses no eran afectados. (Por el contrario, la deuda privada contraída con ellos recibía el aval del Estado mexicano); 2) el sector “obrero” apoyaría con entusiasmo; 3) los industriales verían con agrado un paso que privilegiaba sus intereses frente a los especuladores y rentistas; 4) los depositantes actuarían racionalmente, si se les explicaba correctamente el sentido de la medida.

Los hechos confirmaron las expectativas de los promotores de la nacionalización. El apoyo que recibió inicialmente la medida fue muy superior a la resistencia de los banqueros. La posición del Presidente, que se había deteriorado considerablemente, se vio fortalecida de la noche a la mañana. Los banqueros perdieron temporalmente su poder y pasaron de la agresividad prepotente de la primera mitad del año, a una posición defensiva.

Pero desde octubre de 1982, la situación comenzó a cambiar con rapidez. La ausencia de un gran movimiento de masas, la división de la izquierda independiente, las debilidades del movimiento sindical oficial, fueron determinando las características estructurales de la nacionalización. A fines de 1982, se aprobó

una ley que abría la posibilidad de la participación de los empresarios privados en el capital social de los bancos, en una proporción de 34 por ciento. En agosto de 1983, se dieron a conocer las increíblemente favorables condiciones de indemnización. En marzo del presente año se pusieron en venta las acciones de las principales empresas de la banca, incluyendo compañías de seguros, casas de bolsa, etc. La adquisición quedaba sujeta a un orden de prioridades que permitía a los antiguos dueños volver a reconstruir todo su poderío económico. También en la esfera política se produjo una reconciliación. Los banqueros han aceptado la participación del gobierno en la banca, el Estado ha devuelto a los financieros la mayor parte de su poder económico y político temporalmente perdido. En julio de 1984, el presidente de la Asociación de Banqueros, Carlos Abedrop Dávila sellaba el nuevo pacto: “El actual gobierno —dijo— cumple los ofrecimientos que ha hecho de actuar con equidad. Las decisiones finales fueron tomadas después de escuchar las opiniones de los representantes de los accionistas”.

El decreto de nacionalización de la banca produjo una posibilidad de cambios sustanciales en la sociedad y la economía mexicana. La debilidad del movimiento popular y la izquierda fueron decisivos para que ésta no se materializara.

* * *

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúa aceleradamente la restitución, a sus antiguos dueños, de las empresas controladas por la banca.²⁴

El 23 de octubre colocó en la bolsa de valores acciones por 6 mil 673 millones de pesos, la mitad de los cuales corresponden a tres compañías: la regiomontana Vitro, la inmobiliaria El Caballito y Perforaciones Marítimas Mexicanas. Como sucedió en marzo con otras empresas, los antiguos propietarios tendrán una prioridad de 30 días. Luego serán preferidos los otros dueños de bonos de indemnización. Sólo después que éstos adquieran todas las propiedades que les interesen, podrá el público tener acceso al resto de ellas.

Los antiguos grupos financieros reconstruyen rápidamente su imperio en la industria, el comercio y los servicios, adaptándolo a las exigencias de la coyuntura. La estructura monopólica de la economía mexicana se conserva intacta.

El Estado ha expropiado irreversiblemente la banca de depósito. Sin embargo, ésta no será empresa pública descentralizada sino mixta, con participación del capital privado, que tendrá acceso a información e influencia sobre la política crediticia. Las funciones de la banca nacionalizada serán, además, menores que las ejercidas por la privada. Excluyen la actividad financiera no bancaria y la vinculación permanente con empresas industriales.

Las casas de bolsa, las compañías de seguros, las sociedades financieras vuelven a sus antiguos dueños. Esto permitirá a los exbanqueros reconstruir su aparato

²⁴ *Proceso*, número 419, 12 de noviembre de 1984.

financiero. Se forma así un mercado paralelo de capitales que —en una fase de recuperación económica— puede volver a controlar la orientación del crédito. La nacionalización de la banca ha transformado lo que era un coto cerrado del capital financiero en un campo de confrontación entre éste y el Estado, pero los patrones tradicionales de acumulación sólo fueron afectados temporalmente. La prepotencia del capital monopolista fue cuestionada, mas no dañada.

La nacionalización de la banca, tal y como se está plasmando en la realidad, poco tiene de común con la demanda levantada hace mucho por la izquierda. Para ésta, nacionalizar la banca significaba reducir decisivamente la presencia del capital privado en las finanzas del país y sustituir su dominio de las ramas más dinámicas de la economía, con capital estatal y cooperativo. Tenía, además, un sentido político: debilitar a la gran burguesía y crear posibilidades para un cambio en la composición del bloque en el poder. Nada de eso sucedió. En 1982 se habló de banderas arrebatadas: el Estado realizaba, sin la izquierda, aquello por lo cual ésta había luchado prolongadamente. Habría sido más correcto pensar en la manipulación de lemas: el Estado intenta hacer pasar por auténtica una caricatura de nacionalización.

Como muchas otras aspiraciones populares de nuestra historia, el 17 de noviembre de 1982 la banca nacionalizada quedó inscrita en la Constitución. Se inicia un proceso cuya consumación se pierde en el horizonte.

Dos meses después de la nacionalización, la vida política del país comenzó a derechizarse. Los sectores “nacionalistas” de la burocracia se debilitaron. En la izquierda comenzaron a multiplicarse las señales de crisis. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Fue el cambio de gobierno el único culpable? ¿Tuvieron algo que ver en el proceso los eventos políticos relacionados con la nacionalización?

El decreto nacionalizador produjo un estallido de entusiasmo popular. Muchos mexicanos vieron en él el primer paso de una respuesta de corte plebeyo a la crisis. Durante cerca de un mes reinó la esperanza. En esos días, existía en México una fuerza potencial suficiente no sólo para consumir una transformación profunda del sistema financiero, sino también para iniciar una política anticrisis democrática y popular. Pero algunos no quisieron y otros no supieron convocarla. En octubre comenzó a declinar y para noviembre se había consumido íntegramente para dejar el lugar a un vacío político.

Decretada la nacionalización, el gobierno de López Portillo pudo haber encabezado el entusiasmo patriótico que su medida despertó. Hubiera bastado una respuesta favorable a las acuciantes demandas salariales que comenzaron a manifestarse en la segunda semana de septiembre; una oposición más firme a las exigencias de la banca internacional y el FMI, para coincidir con otros pronunciamientos avanzados de política exterior. López Portillo no quiso hacer, en 1982, lo que Cárdenas hizo en 1938: convocar a las masas. La nacionalización quedó como un acto aislado, discordante, contrapuesto a la congelación de

salarios, los frenéticos ires y venires de Silva Herzog a Washington, los desplantes mandones de Larossiere en nuestra propia casa, en fin, la política económica que aplicaba el gobierno. El Estado perdió la oportunidad de hacer frente a la crisis con una política de corte popular. La escena estaba puesta para otra alternativa: la de derecha.

Lo que el gobierno no quiso, la izquierda no pudo o no supo hacer. La coyuntura reveló descarnadamente su dispersión, sus vacilaciones, su lentitud para responder a cambios bruscos. Un sector consideró que el decreto por sí mismo había desarticulado el capital financiero y producido un cambio favorable en el bloque dominante. Su posición se redujo a apoyar al gobierno y llamar a defenderlo contra la inminente ofensiva de la empresa privada. Otro, negó que la nacionalización respondiera a un interés popular genuino. Sólo representaba una adaptación del gran capital a la crisis. La primera posición dejó toda la iniciativa en manos del gobierno. La segunda, se marginó de la respuesta popular. Hubo también quien vio el decreto como una posibilidad no consumada y llamó a un apoyo crítico y vigilante. La división en el análisis se manifestó en una acción lenta, vacilante y contradictoria. Sorprendida por la materialización de la medida que había estado promoviendo durante décadas, la izquierda manifestó su desconcierto sobre todo en el fracaso del Frente de Defensa del Salario, contra la Austeridad y la Carestía, que once días después de la nacionalización reunió a más de cien organizaciones. En él, la nacionalización fue una de las manzanas de la discordia que provocaron la división, dos semanas más tarde. Pero si el Frente no funcionó, tampoco surgió una fuerza (partido, sindicato o movimiento popular) que pudiera constituirse en centro aglutinador de una acción coherente.

Quizá sea difícil aceptarlo pero la nacionalización fue una prueba que la izquierda no pasó. Desde entonces sus problemas se han agravado.

La nacionalización de la banca fue la primera manifestación política de la crisis que sacude al país. No sería la última. Lo importante es saber leer el mensaje que encierra.

Secretos de Estado²⁵

Ahora que el partido oficial se afana en recuperar su influencia menguante, vale la pena reflexionar sobre el origen de ésta. El PRI nunca fue un partido revolucionario. Cuando se fundó el PNR, Zapata, Villa, Carranza y Obregón, los grandes caudillos de la Revolución, habían muerto. Esta había devorado ya a sus hijos. A diferencia del partido bolchevique ruso o el partido comunista chileno, el PNR no fue protagonista de la preparación y realización de la revolución. No es el creador de una nueva idea de sociedad, ni el organizador de las masas en un asalto al poder. El PNR no es un partido revolucionario que se transforma en Estado, sino un aparato creado por un Estado surgido de la revolución. Su aparición responde no a una gesta social, sino a la decisión de un presidente de la República: Plutarco Elías Calles. Su legitimidad se origina no en la sociedad, sino en el nuevo Estado.

Nueva luz sobre los orígenes de éste nos proporciona el libro de Francisco José Paoli: *Yucatán y los orígenes del nuevo Estado mexicano*, publicado recientemente. En los años 1915-18, mientras la guerra civil hace estragos en el resto del país, Yucatán, centro mundial de la producción del henequén, se mantiene relativamente aislado y próspero. Carranza, consciente de la enorme importancia económica de la península, envía a uno de los hombres más destacados de su partido a la cabeza de un numeroso ejército para establecer uno de los primeros gobiernos de la revolución.

El estimulante estudio de Paoli sobre la actuación de Salvador Alvarado en Yucatán permite establecer una nueva claridad acerca de dos problemas esenciales: a) La relación de continuidad entre la revolución y el nuevo Estado; b) El origen de la legitimidad de éste. La conducta de Alvarado en Yucatán no elige un patrón fundamentalmente distinto del adoptado por otros generales revolucionarios en diferentes partes del país. Es, por lo contrario, debido a las condiciones especiales de la región, un ejemplo especialmente exitoso de esfuerzos que, en otras partes, tienen un carácter más esporádico e infructuoso. El conocimiento detallado de experiencias como las de Alvarado en Yucatán, durante los años 1915-18 o los de Villa como gobernador de Chihuahua en 1913-14, demuestran que la Constitución de 1917 no fue sólo un proyecto, sino la codificación de una realidad en marcha; que las medidas adoptadas a nivel nacional en el decenio posterior fueron, en buena medida, la cristalización central de antecedentes locales acumulados durante los años de la revolución.

Alvarado respetó las formas de propiedad y la estructura de clases existente. Ni sus ideales, ni las instrucciones que de Carranza recibía, preveían un cambio radical en el orden del momento. Pero adoptó medidas que afectaban profundamente la situación de todos los estratos de la población y las relaciones entre éstos.

²⁵ *Proceso*, número 408, 27 de agosto de 1984.

Ligó a los hacendados al nuevo poder por medio del establecimiento de una Comisión Reguladora del Mercado de Henequén, que transformó a algunos de ellos en auténticos funcionarios del nuevo gobierno. Estableció una alianza firme con los trabajadores organizados, estimulando la creación de sindicatos y la constitución de la Casa del Obrero Mundial. Buscó el apoyo de los campesinos aplicando enérgicamente las disposiciones tendientes a liberarlos de la servidumbre por deudas y logró el apoyo de las capas medias impulsando la educación y las campañas contra el alcoholismo y la prostitución. El viejo aparato político porfirista fue sustituido en todas sus ramificaciones por partidarios del nuevo régimen.

Muchas de esas medidas fueron irreversibles. La revolución se estaba transformando en Estado, independientemente de la trágica suerte que esperaba a algunos de sus caudillos, como el mismo Alvarado. Para 1917; el nuevo Estado había avanzado lo suficiente en la práctica para transformar su origen en mito. Este pecado original acompañará al PRI en todas sus metamorfosis. Nacido del Estado, no puede aspirar a más *pedigree* que el que éste le otorgue. En México, los partidos surgidos directamente de la sociedad civil son obra de la oposición.

NUEVOS RUMBOS²⁶

El Segundo Informe del presidente De la Madrid —visto en su contexto— proporciona algunas claves, sobre todo en lo que respecta a las mutaciones en el carácter del Estado, que no deben pasar inadvertidas.

El lenguaje usado por el Presidente es congruente con el contenido del documento. La parquedad de los recursos retóricos y la sobriedad de los adjetivos subrayan un énfasis cada vez más transparente del diagnóstico técnico de las situaciones, las soluciones administrativas y la eficiencia.

Miguel de la Madrid se refirió, sin eufemismos, a los “amargos sacrificios, el deterioro del nivel de vida y la reducción del consumo”, pero insistió en que éstos sólo pueden ser superados por la racionalización de la economía y la administración pública. En su discurso, la legitimación de la política actual del gobierno se refiere cada vez menos a los ideales tradicionales de la revolución y cada vez más a la elección de medidas acertadas para responder a la acción inexorable de las leyes de la crisis.

Este elemento está presente desde los primeros días del sexenio. Pero lo que entonces aparecía como un recurso del Programa Inmediato de Reordenación Económica, se define, dos años más tarde, como un proyecto estructural de profundas consecuencias. Y el Presidente así lo manifestó: “No estamos empeñados, dijo, en una simple empresa de sobrevivencia, sino en un proceso nacional de renovación del país”.

²⁶ *Proceso*, número 410, 10 de septiembre de 1984.

Hoy, con mayor claridad que hace dos años, el gobierno de Miguel de la Madrid enfrenta su “realismo” económico y político al “populismo” de Echeverría y López Portillo. Vale decir que la racionalización de la economía y el Estado debe proseguir, sea cual fuere su costo social.

Olvidemos por un momento los aspectos anticrisis de esa política e intentemos discernir su proyección a largo plazo. De mantenerse las medidas adoptadas en el primer tercio del sexenio, los cambios parecen apuntar en la siguiente dirección:

1. Ampliación moderada de la democracia parlamentaria y consultiva y centralización de las decisiones económicas en un aparato burocrático cada vez más eficiente y disciplinado.
2. Debilitamiento del poder de los sectores burocráticos ligados a las organizaciones de masas y ascenso de técnicos capaces de tomar decisiones sin ceder a las presiones del viejo y obsoleto aparato clientelar, en función de planes preestablecidos.
3. Reducción de la intervención directa del Estado en la producción de bienes y servicios; ampliación de las atribuciones del mercado y creación de mecanismos más sofisticados de regulación económica.
4. Renegociación de la deuda externa y los términos de intercambio a costa de una apertura a la inversión extranjera directa; y
5. Transición de una ideología populista y socializante a una cultura tecnocrática, capaz de legitimar esos cambios.

El Segundo Informe es un documento cargado de significados. Pero su importancia reside no en la novedad de sus respuestas, sino en la ratificación intransigente de un curso iniciado hace dos años. La tendencia no es totalmente nueva, ni tampoco puede materializarse en un sexenio. Las resistencias que despierta son considerables y el gran convidado de piedra, el movimiento popular, puede dar signos de vida en el momento menos esperado.

Bajo la sombra de Juárez²⁷

La situación internacional de México es cada día más difícil. La lentitud de la recuperación económica interna y el desplome de los precios del crudo aumentan nuestra vulnerabilidad ante el FMI y los inversionistas extranjeros. La amenaza de un retorno masivo de indocumentados sigue vigente y el tráfico internacional de drogas nos coloca en el centro de un nuevo conflicto internacional.

Pero el peligro principal viene de la política de Estados Unidos en Centroamérica. Es claro que este país no busca un arreglo negociado y está decidido a sofocar, a cualquier precio, la revolución centroamericana. Sólo vacila entre una política de desgaste prolongado y una intervención masiva inmediata. Ambas amenazan envolver a México en el intervencionismo bélico de su vecino del norte.

Las presiones para que México se someta a los dictados del imperialismo son cada vez más poderosas. Las exigencias del FMI, los desplantes de Gavin, el apoyo encubierto al PAN, los ataques a Contadora y la “operación intercepción” no son sino movidas complementarias en un mismo tablero de ajedrez.

Las medidas económicas van aunadas a las políticas. Lo que está en juego esta vez no es un problema pasajero. Se juega el derecho del pueblo mexicano a decidir los rumbos futuros de su desarrollo económico, así como el papel que debe desempeñar nuestro país en la situación política cada vez más complicada de Centroamérica y el Caribe. En estos momentos, cada paso puede tener consecuencias futuras insospechadas. La declaración de Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda, de que “los gobiernos de ambos países no sentimos que exista un problema de fondo”, no convence. Parece más bien un intento de mantener al pueblo al margen de un conflicto cada vez más grave.

Las experiencias pasadas enseñan que, en momentos de confrontación internacional, la fuerza de México está no en su poderío militar o económico o en la habilidad de sus diplomáticos, sino en la disposición de su pueblo a defender su soberanía.

La expedición punitiva de Inglaterra, España y Francia contra México, en 1862, tuvo como pretexto la suspensión del pago del servicio de la deuda extranjera, pero sus verdaderos motivos eran mucho más profundos. Los gobiernos conservadores de Europa soñaban con una nueva Santa Alianza que impusiera la paz imperial en todo el orbe. La unión de tres potencias para restablecer el orden en un México convulsionado, era una advertencia para el resto del mundo. Palmerston, el primer ministro inglés, quería intervenir en la guerra de secesión norteamericana a favor del sur y esperaba que México proporcionara una ocasión para debilitar al coloso del norte. Napoleón III deseaba distraer a los franceses de una situación europea cada vez más amenazante, con una aventura militar exótica y frenar la expansión de Estados Unidos. El gobierno español se proponía

²⁷ *Proceso*, número 437, 18 de marzo de 1985.

recobrar su influencia perdida en Latinoamérica y prestar un servicio a su aliado francés. El emperador de Austria deseaba deshacerse de un hermano molesto. Algunos tenedores de bonos interiores mexicanos esperaban que el valor de éstos aumentaría con la creación de la monarquía y los conservadores querían el poder. Pero una vez llegados a México, Inglaterra y España se dieron rápidamente cuenta de que la expedición presentaba más problemas de los esperados. El general Prim escribía a un amigo en París:

Qué fatalidad que el gobierno del Emperador no conozca la verdadera situación de este país... las fuerzas que están aquí a las órdenes del general Lorencez no bastan, ni para tomar siquiera a Puebla... cuidado, que no niego que las tropas francesas lleguen a apoderarse de Puebla y también de México, lo que sí niego resueltamente es que basten los batallones que hoy tiene el conde de Lorencez. Las águilas imperiales se plantarán en la antigua capital de Moctezuma, cuando vengan a sostenerlas 20 mil hombres más... porque México es de los países que, según Napoleón I, "si el ejército es de mucha gente, se muere de hambre y si es de poca, se lo come la tierra...". Pienso que el Emperador de los franceses está muy lejos de querer lo que los comisarios están haciendo; esos señores le están comprometiendo más y más hasta el punto que cuando quiera retirarse de la descabellada empresa, no podrá, porque ha empañado el lustre de sus águilas...

Los franceses en cambio, persistieron en una aventura que había de transformarse en un desastre premonitorio de los que habían de seguir precipitando tres años más tarde el derrumbe del Imperio. Subestimaron —como lo habían hecho en España medio siglo antes— la vitalidad del pueblo mexicano, y su conciencia nacional vigentes pese al caos de la guerra civil. No supieron ver que México se encontraba sumergido en una revolución social que estaba sacudiendo la apatía y la resignación causadas por la derrota frente a EU. Tampoco tenían una idea realista del grado de consenso alcanzado por los liberales y su capacidad de impulsar con su posición intransigente y audaz la resistencia popular.

La moratoria de dos años de la deuda externa decretada por Juárez, el 17 de julio de 1861, fue un acto cuyas consecuencias para México fueron tan trascendentales como las Leyes de Reforma. En las condiciones imperantes en aquel entonces, representaba una segunda declaración de independencia. Por medio de esa medida, el gobierno de Juárez ratificaba que los asuntos internos tenían prioridad sobre los externos.

¿No había previsto Juárez la respuesta de las potencias afectadas? Es probable que sí. Y, sin embargo, no podía hacer otra cosa: estaba en juego el derecho de la revolución iniciada en 1854 a hacer uso de los magros recursos existentes para

consolidar su poder. Renunciar a ello, era darse por vencidos ante la sola posibilidad de una agresión extranjera. Juárez juzgó que la nación había llegado al límite de las concesiones posibles. O era soberana, o no era nada. Y su juicio demostró ser certero. La moratoria y las Leyes de Reforma fueron los pilares del primer Estado mexicano estable.

No estamos, en verdad, ante una situación tan dramática, pero el exceso de concesiones hoy, puede hipotecar la independencia futura de México, ya de por sí condicionada.

Descentralizar o morir²⁸

Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido.

Elías Canetti

Del jueves 19 de septiembre al jueves 3 de octubre se registraron en la ciudad de México 74 sismos superiores a los 3.4 grados Richter e inferiores a los 5.6 grados, con la excepción del ocurrido el viernes 20, que tuvo una intensidad de 7.3 grados.

Sismólogos de diferentes partes del mundo, incluyendo mexicanos, habían advertido en múltiples ocasiones que la metrópoli se estaba agigantando en una zona sísmica muy activa y que los grandes terremotos eran no sólo posibles, sino probables. El miércoles 2, el Servicio Sismológico Nacional confirmó que existen en la costa del Pacífico, zonas propensas a sufrir fuertes sismos en los próximos quince años que podrían afectar a la ciudad de México, construida sobre una superficie de origen lacustre, particularmente vulnerable, incluso a terremotos con epicentros muy alejados.

El desastre de San Juanico fue previsto por los expertos, que han advertido también que la contaminación está acercándose rápidamente a los límites aceptables; que los problemas de suministro de agua serán pronto irresolubles; que el equipo existente no es suficiente para hacer frente a un incendio de grandes proporciones; que el exceso de ruido es ya una amenaza para la salud mental.

Por segunda vez en un año, la muerte roza a la ciudad de México con su mano helada, dejando tras de sí una inmensa estela de destrucción humana y angustia colectiva.

El año de 1985 es cuando el temor a lo desconocido dejó de ser el torturante privilegio de unos cuantos ecologistas para transformarse en la zozobra, la ansiedad y la tristeza de millones de ciudadanos.

Lo que hace poco algunos gritaban sin encontrar oído es hoy patrimonio de todos: el monstruo de 18 millones de habitantes es una bomba de tiempo. Puede estallar en cualquier momento, en cualquier lugar, por muy diversas causas.

La ciudad de México es la concentración urbana más grande del mundo, en un país inmenso que cuenta con zonas muy escasamente pobladas. Es no solamente la capital política, sino también la industrial, financiera, comercial y cultural del país. Está ubicada en el menos adecuado de los lugares posibles: asentada sobre un subsuelo blando, se está hundiendo; situada en una zona sísmica, conoce temblores periódicos y está además lejos de fuentes de agua y energía. Producto

²⁸ *Proceso*, número 466, 7 de octubre de 1985.

de un éxodo incontrolable de las zonas rurales, sigue creciendo a un ritmo vertiginoso.

¿Cómo y cuándo se llegó a esta situación? ¿Cuál es el sentido de ese sinsentido?

En 1910, la zona urbana de la capital tenía una población de sólo 400 mil habitantes. En 1940, ésta era de poco más de 1.5 millones. El crecimiento desmesurado data del último medio siglo. No es una “herencia del pasado”. Es resultado claro y directo de la política de los gobiernos posrevolucionarios y del modelo de desarrollo industrial que conoció el país en esos años.

Ya antes de 1940, el crecimiento de la ciudad estaba ligado a la concentración de poderes y al crecimiento del aparato burocrático de un Estado que a partir de 1926 intervenía cada vez más directamente en las actividades económicas. La administración pública fue en esos años la fuente de empleos de mayor expansión. En los años veinte, la emigración provenía sobre todo del norte, asolado por la revolución. Se trataba de una clase media que buscaba seguridad y la industria ejercía poca atracción. No fue sino en los decenios de los treinta y los cuarenta, cuando ésta comenzó a crecer y la mano de obra afluyó de todo el país, alentada por la inversión pública y la industria de la construcción. Sin embargo, todavía en 1940, sólo 25 por ciento de la industria nacional estaba concentrada en la capital y las costumbres, formas de trabajo y de alojamiento, así como la vida social de las colonias, correspondía más a la era porfiriana que al México de los sesenta.

Después de 1940, el poder público no alteró su política de concentración. El gobierno federal, controlando 90 por ciento de las inversiones públicas, siguió haciendo nuevas dependencias y paraestatales en la capital. Mientras los gobiernos estatales y los municipios languidecían, los edificios y construcciones públicas monumentales de México se multiplicaban simbolizando una modernidad que debía ser el principal monumento de un Estado cuya razón de ser es la modernización.

El Estado “revolucionario” no pudo resistir la fascinación que ha ejercido Tenochtitlán, reina y dominadora absoluta del Anáhuac, sobre todos los gobernantes autoritarios y patriarcales. Cuentan los historiadores, que en el Juicio de Residencia que se le abrió a Cortés en 1529, quince de los 22 testigos afirmaron que éste había decidido construir la nueva capital sobre las ruinas de la ciudad azteca, pese a la oposición expresa de los demás españoles que no consideraban el lugar apropiado. ¿Pero cómo podía el gran conquistador resistir la tentación de ocupar el trono del Moctezuma, soberano de soberanos?

Así también, los gobiernos presidencialistas iniciadores de la gran era industrial de México, no podían renunciar al centralismo monumental.

A ellos se sumaron los especuladores en tierras y bienes raíces que han hecho inmensas fortunas con la compraventa de tierras agrícolas transformadas en urbanas; el capital extranjero y mexicano que prefiere los servicios baratos y el mercado seguro de la gran ciudad y rehúye cualquier iniciativa de pionero en la provincia, incluso si ésta se encuentra cargada, a largo plazo, de posibilidades.

Ahora que el reloj está por marcar la hora cero, cabe preguntarse ¿qué podemos hacer todavía?

Lo primero es abandonar las vaguedades, las generalidades tranquilizadoras, las ambigüedades escurridizas. Para no desesperar, para creer, el pueblo del DF, uno de los más politizados del país, quiere saber a ciencia cierta qué pasos se van a dar, en qué lugares, con qué dinero y quién será directamente responsable.

El gobierno de Miguel de la Madrid adoptó desde su primer año la descentralización como uno de sus lemas principales. Ahora debe pasarse de los lemas a los hechos, sin confundir descentralización de la vida nacional, que entraña grandes pasos democratizadores, desarrollo de la provincia, movilización de fuerzas sociales en todo el país, con la reubicación física de algunas secretarías o las dependencias secundarias de éstas.

¿Quién teme a la unidad?²⁹

A partir de 1968, la izquierda en el mundo ha sufrido transformaciones profundas; una de ellas es su diversificación. En casi todos los países presenta la imagen de una gran heterogeneidad de corrientes, organizaciones y enfoques. Sin embargo, dentro de esa pluralidad, podemos distinguir dos tipos de izquierdas: las que exhiben un alto grado de centralidad y las dispersas. Ejemplo de las primeras son las de Italia, Francia o Chile, países en los cuales uno o dos partidos así como un número reducido de centrales sindicales aglutina a la mayor parte de la izquierda. En cambio, en países como Alemania Federal, Estados Unidos, Perú y Argentina, la izquierda está constituida por una multitud de fuerzas, ninguna de las cuales puede aspirar a la centralidad. En las de ese tipo, el problema de la unidad se plantea en forma recurrente y en ciertas condiciones adquiere una importancia vital.

La izquierda mexicana pertenece, obviamente, al segundo grupo. Cinco partidos registrados: una veintena de grupos políticos de significación local o regional; multitud de movimientos populares organizados; varias federaciones sindicales o sindicatos independientes, representan un movimiento disperso en el cual las confrontaciones son más frecuentes que la colaboración. Durante los primeros años de la legalización (1975—1982) esa diversidad representaba más una ventaja que un obstáculo. En la ausencia de grandes confrontaciones y posibilidades inmediatas, en un ambiente de auge económico (por lo menos los años 1978-81), la izquierda dispersa expresaba mejor la heterogeneidad de un país en el cual la sobreposición de realidades históricas distintas parece un corte geológico.

Sin embargo, en los últimos dos años, la situación ha ido cambiando. La crisis viene acompañada de una ofensiva de derecha en todos los ámbitos: política de austeridad, tecnocratización del aparato estatal, predominio de los medios de difusión masiva de orientación reaccionaria, concesiones en la política centroamericana, actos de violencia como el asesinato de Buendía y el atentado contra José Rodríguez, presiones cada vez más acentuadas sobre el sindicalismo organizado, son otros tantos síntomas de un viraje sutil, pero persistente.

En el campo electoral el ascenso vertiginoso del PAN crea el peligro real de un bipartidismo a la mexicana (un partido en el poder, el PRI, y un opositor privilegiado, el PAN). En estas circunstancias, los problemas de la unidad vuelven a adquirir importancia inmediata. Es muy difícil que en las condiciones de dispersión actual, la izquierda pueda oponerse con alguna eficacia a estas tendencias.

La unidad o división de las organizaciones de izquierda es un problema que se desprende de la relación de éstas con el movimiento popular. Por lo tanto, no es

²⁹ *Proceso*, número 406, 13 de octubre de 1984.

un valor absoluto. Los criterios para unir o dividir no pueden ser otros que los intereses presentes y futuros de los trabajadores; las necesidades del movimiento; las relaciones de fuerza a corto y largo plazos. Cuando a veces es necesario enfatizar una posición o enfrentarse a tendencias negativas dentro de la izquierda, porque las necesidades del movimiento popular así lo exigen, es preferible dividir a unificar. La cuestión de la unidad sólo puede plantearse si se completa con los inevitables ¿cuándo? ¿cómo? ¿con quién? y ¿para qué? Oponerse a la unidad puede a veces ser impopular... pero no por eso menos necesario.

La ofensiva de la derecha, en plena ausencia de una respuesta popular de envergadura nacional, coloca a todas las organizaciones de izquierda en una situación precaria. Por un tiempo la resistencia sólo puede provenir de las fuerzas organizadas. Por eso, la búsqueda de acuerdos está a la orden del día, sobre todo en dos campos críticos: el electoral y el de resistencia a la política de austeridad. En el primero, todos los partidos de izquierda son de oposición, puesto que compiten con el PRI y el PAN por el voto popular (aun cuando a veces el PPS se “alía” con el PRI). La reducción del número de las opciones electorales de izquierda, así como la inclusión de organizaciones sin registro en las elecciones tendrá, sin duda, un efecto benéfico sobre la magnitud global del voto para la izquierda. Aquí, el obstáculo principal es la ley electoral que, con intención inequívoca obliga a cada partido registrado a luchar por su existencia en todas las elecciones, anulando las formas de unidad más eficaces. Por eso las alianzas entre partidos registrados y grupos sin registro han avanzado más que la colaboración entre partidos con registro. Si esta situación no se supera, el futuro electoral inmediato de la izquierda (que en su conjunto sólo reúne 10 por ciento del voto nacional) no es muy prometedor.

La situación en el segundo campo es diferente. Aquí, el obstáculo principal está en el seno de la izquierda misma. Su raíz se encuentra en las profundas diferencias que existen respecto a la política hacia el gobierno y el plan de austeridad. Mientras que algunas organizaciones se niegan a aliarse con cualquier fuerza que esté ligada con el Estado o mantenga actitudes conciliatorias hacia él, otras, que fincan su política en la construcción de una convergencia con sectores progresistas de la burocracia gobernante, se resisten a colaborar con organizaciones que hacen del ataque al gobierno la médula de su actividad política. Dentro de estos dos extremos, los matices son muchos e importantes. En realidad, hoy más que nunca la principal manzana de discordia en el seno de la izquierda es la política hacia el gobierno, el estilo de la oposición y la relación con los movimientos populares independientes. Esta es una diferencia que, en las condiciones actuales, seguirá vigente. Inclusive, cabe decir que la colaboración entre las fuerzas que se definen en uno u otro sentido tenderá a hacerse más difícil. Pese a ello, se han producido esfuerzos unitarios esporádicos, como las jornadas de paro nacional que, a pesar de lo limitado de los resultados en la

población, crean antecedentes importantes en las relaciones entre organizaciones de izquierda.

Existe otra forma de unidad, mucho más compleja y difícil y esa es la fusión orgánica de varias organizaciones en una sola. Sin duda, la izquierda no puede esperar convertirse en una fuerza nacional de alternativa, sin la aparición de polos de centralidad estables más significativos que los que existen en la actualidad. En el último decenio se han producido varios intentos en esa dirección, el más importante de los cuales es el PSUM.

La experiencia de éste demuestra, sin embargo, que su éxito depende en última instancia de la definición de ciertas tendencias de la vida política nacional que, por ahora, sigue todavía sumidas en la bruma: la evolución del sistema electoral, que dista mucho de garantizar la verdadera alternabilidad pluripartidista; el significado de los cambios que se están dando en el movimiento sindical oficial; el carácter y forma de la respuesta popular a la crisis, que aún no se ha producido; la evolución de una situación internacional cada vez más explosiva y el futuro de la revolución centroamericana, son los principales. Depende, también, de la superación de dos tradiciones nefastas en el ejercicio del poder en el seno de la izquierda: el caudillismo y el monolitismo burocrático.

La izquierda mexicana, como la de muchos otros países, vive un compás de espera. La coyuntura política ha desembocado en un sistema de equilibrios inestables que puede romperse en cualquier instante. En esas condiciones, más que éxitos portentosos, debemos esperar la acumulación de experiencias unitarias que irán desgastando las causas innecesarias de la dispersión y preparando condiciones para tiempos más propicios.

Adios al PCM

Un partido de nuevo tipo³⁰

La opinión pública sólo se enteró de la existencia del Partido Comunista Mexicano en los años 1976-1979. Antes, los comunistas eran noticia únicamente en los partes policiacos o como piedra de escándalo en referencias a “tumultos” estudiantiles o huelgas “injustificadas”.

Pero eso no le impedía al PCM existir. Lenta y azarosamente, un grupo de mexicanos fue forjando un hecho político ignorado por la opinión pública. Editando periodiquitos marginales, reuniéndose en hogares campesinos, hablando en patios fabriles y aulas universitarias, escribiendo desde cárceles, se fueron integrando a la vida política del país sin ocupar los titulares de los grandes matutinos ni ser nombrados en los programas noticiosos de la televisión.

La opinión pública no es por lo tanto, sinónimo de lo político. Ligada al poder, influida por los grupos financieros que controlan la radio, la televisión y los grandes periódicos, es un reflejo deformado, censurado y estreñido de los miles de choques grandes y pequeños, masivos e individuales, decisivos y cotidianos de la lucha de clases que constituye el alma escondida de toda sociedad burguesa.

La opinión pública tiene un don especial para ignorar la gestación de los grandes cambios en la conciencia y el estado de ánimo de las mayorías trabajadoras y magnificar las nimiedades de la politiquería. En vísperas de la revolución mexicana de 1910, los diarios sólo tenían espacio para glorificar al dictador que inauguraba los magnos festejos oficiales del Centenario de la Independencia. Una prensa que apenas dejó traslucir la gestación de un 1958 o un 1968, se vuelve afónica comentando la caída de un secretario con personalidad o el ascenso al gabinete de un advenedizo con suerte.

Ahora, el PCM está presente en la opinión pública. Esto le permitirá al ciudadano interesado presenciar un espectáculo desconocido para él. A raíz de la preparación del XIX Congreso, que se celebrará en marzo de 1981, se intensifican las discusiones y luchas que acompañan casi siempre en el seno del PCM, la definición de la orientación política y la renovación de los órganos dirigentes.

Todo indica que éste no será un congreso más. El XIX Congreso, sean cuales sean sus resultados, tendrá un efecto positivo o negativo de una magnitud sólo comparable con la del Congreso extraordinario de marzo de 1940, que hizo patente el estallido de una profunda crisis, o el XIII Congreso de 1960, que marcó el primer paso de la recuperación del PCM.

Para los comunistas, el reloj marca la hora de la reflexión, de un “conócete a ti mismo” radical e intransigente. Ya es tiempo de desprenderse de la fatiga de la ilegalidad, de los fantasmas del pasado y de las ilusiones del futuro petrolero, para ser revolucionarios mexicanos del año 1980.

³⁰ *Proceso*, número 212, 24 de noviembre de 1980.

Este es un momento en el cual los antiguos militantes no pueden decir “he cumplido, me voy a casa” y los nuevos no tienen derecho a creer que la historia comienza con ellos. Está en juego el futuro del movimiento popular que en las próximas décadas puede ganar mucho y perder todavía más.

Para algunos observadores poco entendidos, las agudas discusiones que sacuden actualmente al PCM son truenos que anuncian una inminente tempestad de divisiones. Permítanme desengañarlos. Las fuerzas responsables que luchan por definir la orientación del Partido, son centrípetas, no centrífugas. Su perspectiva es modelar la práctica política del partido, no buscar soluciones fuera de él. El XIX Congreso será sin duda escenario de combates, pero sólo un improbable intento de impedir, por medio de sanciones administrativas la saludable confrontación, puede transformarlo en el inicio de una cadena de divisiones.

Hay comunistas que piensan que debatir públicamente los problemas que aquejan al partido debilita su influencia. Se equivocan. El PCM es un partido en ascenso, que cuenta con los recursos humanos e ideológicos necesarios para superar la crisis (agudización de contradicciones) que se anuncia.

Quien desconozca la vida interna del Partido podría suponer que el ambiente de preparación del Congreso es de entusiasmo y optimismo. En efecto, a partir de, 1975, el Partido ha acumulado éxitos innegables: dos importantes campañas electorales nacionales; el registro electoral; la conformación con otras fuerzas de un grupo parlamentario de 18 diputados; avances en los esfuerzos unitarios con otras tendencias; presencia en los medios de difusión; instauración de un acto cultural masivo anual; la fiesta de *Oposición*; crecimiento importante del número de miembros y cierto desarrollo de la democracia interna.

Hay miembros de la Comisión Ejecutiva que quisieran terminar su descripción en este punto. El ejercicio del poder les impide advertir las contradicciones y peligros que se multiplican en su rededor. Pero son cada vez más los militantes que saben que en lugar de optimismo y seguridad en el futuro, derivados de los éxitos obtenidos, está invadiendo al Partido un profundo malestar que tiene manifestaciones diversas y que se hace presente en todos los niveles e instancias.

Los éxitos vienen envueltos en un enjambre de signos ominosos que hacen incierto el presente y dudoso el futuro. Un gran malestar flota en el ambiente partidario, en el cual proliferan las preguntas y escasean las respuestas confiables. Recordamos: la historia está llena de ejemplos de triunfos que se vuelven fracasos y viceversa. Y así como de derrota en derrota en los años 1960-1975 llegamos a las victorias de hoy, adivinamos que si ahora nos equivocamos, éstas pueden transformarse en las derrotas de mañana.

La legalización del Partido abre grandes posibilidades y multiplica los peligros para el movimiento democrático. Se trata de actuar para aprovechar esas posibilidades y prevenir los peligros. La transformación del Partido puede desembocar en la

consolidación definitiva de su presencia en el paisaje político mexicano o en una serie de derrotas que establezcan su marginalidad. La salida depende de lo que hagan los comunistas en los próximos tres o cuatro años. Una cosa es segura: el momento exige de ellos la misma dedicación y esfuerzo que fueron necesarios en los días aciagos de persecución y aislamiento, sólo que ahora, ligados a nuevas cualidades.

Al mismo tiempo que el partido pasaba a ocupar un nuevo lugar en la vida nacional, la práctica política, la estructura interna y las perspectivas del PCM han tenido mutaciones profundas. Impulsado por las fuerzas objetivas desatadas por la nueva situación y las medidas prácticas adoptadas por un sector de la dirección, el partido de los años sesenta y principios de los setenta está siendo sustituido por otro nuevo. Ideas, símbolos, valores y prácticas del pasado pierden su eficacia y los nuevos tardan en surgir. Los viejos militantes ven cómo se derrumban varios pilares del viejo partido; los nuevos descubren que la imagen que tenían de éste al ingresar en él, rápidamente deja de corresponder a la realidad. Pero los cambios reales son mucho más rápidos que las modificaciones en la teoría y la conciencia de sus militantes. Crece el número de comunistas que se sienten no como participantes activos de una transformación con objetivos conocidos, sino como simples agentes de un proceso cuyo sentido se les escapa. Puesto que el viejo partido y su práctica política no han sido sometidos a una evaluación crítica seria y las causas y objetivos de los cambios no son definidos, muchos comunistas conocen las dudas y la incertidumbre del gran malestar. Un malestar que no es sino la intuición de tres interrogantes que flotan en el aire:

1. ¿Los cambios que están sucediendo en el partido responden a una orientación consciente o son fruto de la acción de fuerzas que no podemos controlar? ¿Nosotros dominamos el cambio o el cambio nos domina?
2. Si las transformaciones se deben a una orientación consciente, ¿cuál es la concepción teórica de partido que las inspira? ¿En dónde y por quién está formulada?
3. El nuevo partido que está surgiendo, ¿es realmente un partido revolucionario de la clase obrera y las fuerzas de alternativa o un engendro reformista de las capas medias?

Hasta ahora, la preparación del Congreso se realiza en medio de la dispersión ideológica y política. La dispersión no consiste en la diversidad de opiniones, sino en la multiplicación de problemas sin respuesta, en la falta de capacidad para centrar la discusión alrededor de los problemas que constituyen el meollo de la situación actual.

Pero antes de partir a la conquista del mundo circundante, hay que salir a la búsqueda de nuestra propia alma.

¿INEXISTENCIA HISTÓRICA O VAGUARDIA MESIÁNICA?³¹

El XIX Congreso ha suscitado una discusión teórica sin precedentes. Aun cuando se trata de algo que apenas se inicia, es evidente que su importancia se proyecta más allá de ese evento.

El manifiesto *Por la renovación del PCM* que ayudó a impulsar ese proceso, ha recibido muchas adhesiones, pero ha sido también blanco de múltiples deformaciones y enconados ataques. Analicemos dos de ellos.

Para Enrique González Rojo, teórico de las diversas corrientes que conforman el espartaquismo mexicano, nada de lo que suceda o pueda suceder en el PCM tiene algo que ver con la constitución de un partido obrero revolucionario en México.

Como la irrealidad histórica de un partido (se refiere al PCM) lo define a todo él como un organismo que en su estructura fáctica, no representa los intereses históricos de la clase obrera, tanto un ala como otra no son sino el conflicto tormentoso de tendencias que desde el punto de vista de la clase obrera, se configuran como fantasmales... [Aun cuando la minoritaria] tiene la posibilidad de escapar de las negras consecuencias implicadas en su tímida crítica del partido actual. (E. González R., E. González Ph., y A. E. Pérez Valladares, *Proceso*, 22.1.1981).

En el extremo opuesto, Eduardo Montes nos ofrece una imagen invertida del PC, al cual concibe como

sujeto revolucionario, como organización con iniciativa histórica propia, fruto ésta de la teoría, de la ciencia, de la experiencia de las revoluciones obreras victoriosas y las derrotadas, todo lo cual utilizado como un instrumento de análisis, le permite examinar la realidad política y formular un proyecto de la transformación, el que llevado a la práctica social se alimenta de ella, se corrige por ella y se revisa y reelabora. (*Uno más Uno*, 23.1.1981).

Así, de acuerdo con uno de nuestros críticos, el PCM es un partido históricamente inexistente para la clase obrera. Y según el otro es, ni más ni menos, que ¡un sujeto revolucionario! Para el primero, nuestra crítica del partido actual es tímida, para el otro es liquidacionista.

Entre estos compañeros y nosotros existe una diferencia metodológica esencial. Ellos abordan los problemas de la construcción del partido revolucionario en México, partiendo de una verdad abstracta, absoluta. Nosotros, del examen histórico del movimiento obrero y la situación concreta en la que nos encontramos. Los últimos veinte años demuestran que el PCM no es ajeno al movimiento

31 *Proceso*, número 223, 9 de febrero de 1981.

popular y obrero. Ha estado presente en muchas de sus luchas y su política encuentra un eco creciente. Pero es necesario ser ciego para considerar que el partido comunista se ha fundido con las masas trabajadoras o que ejerce en la práctica el papel de vanguardia de la clase obrera.

El panorama real es mucho más complejo que cualquiera de los dos esquemas. Coincido con González Rojo cuando sostiene que en México no existe todavía *el o los* partidos de la clase obrera. Pero lo que él —encerrado en su torre de marfil doctrinaria— ha dejado de ver, son los progresos acaecidos en estas últimas dos décadas: Poco a poco han comenzado a aparecer los elementos constituyentes de ese partido: pensamiento científico y programas, cuadros políticos a varios niveles, organizaciones partidarias, sindicatos politizados, difusión de las ideas socialistas, etc. El PCM es uno de esos elementos. Un elemento que ya en 1968 tuvo importancia y que ahora puede comenzar a jugar un papel central. Pero para ello, es necesario ante todo, que se libere de los vapores del vanguardismo mesiánico y como decimos en el manifiesto, deje de concebirse como “portador de una fuerza autónoma distinta y superior de la que emana de su situación real en el movimiento.” Un examen inicial demostraría que en nuestro país se producen miles de luchas populares en las cuales el PCM no participa; que en aquéllos en los cuales aparece como fuerza dirigente, comparte casi siempre ese papel con otras corrientes socialistas y que en la clase obrera, su influencia es casi nula. Lo que olvida Eduardo Montes es que en esas condiciones un partido como el PCM puede tener algunas cosas que enseñar, pero tiene muchas que aprender. En primer lugar de las masas, pero también de otros partidos o corrientes socialistas, de los sindicatos y de diferentes organizaciones obreras.

Para cumplir con eficiencia y realismo el papel que les ha deparado la historia de México, es necesario que los comunistas se deshagan de su mesianismo vanguardista y se vean como lo que son: un factor importante en la conformación de un partido obrero revolucionario.

El partido no es ni será el dueño de una verdad científica otorgada de una vez para siempre. Las masas no son una serie de individuos capaces sólo de acción espontánea cuando no está el PCM. La ciencia de los comunistas ha demostrado ser un instrumento que se preserva sólo a costa de una constante autocrítica. Las masas han probado que pueden crear y democratizar sindicatos, construir organizaciones campesinas y de colonos, liberar infinidad de huelgas exitosas e iniciar grandes batallas nacionales sin la dirección de comunistas.

En la historia del PCM, la idea del vanguardismo ha jugado siempre un papel conservador. Ha frenado la autocrítica y obstaculizado el cambio. Ha imbuido a los militantes de un espíritu sectario y dificultado las relaciones con nuestros aliados. Ha sido baluarte de todos los dogmas que, carentes de sustento teórico y empírico deben apoyarse en una idea de excepcionalidad mesiánica.

Hace veinte años, Revueltas elaboraba su teoría de la inexistencia histórica como respuesta a un vanguardismo que violaba todos los hechos. Hoy los autores del artículo *La inexistencia del PCM* la han llevado hasta el absurdo, negando al PCM el papel que ha sabido ya ganarse en el proceso de constitución de un partido socialista revolucionario.

En 1959, en un documento llamado ¡Defendamos con firmeza los principios leninistas de la edificación del Partido! se colocaba a Revueltas y a la célula Carlos Marx en la disyuntiva de renunciar a sus ideas o abandonar el partido. Hoy luchamos precisamente para que esto no vuelva a suceder. A eso se resume nuestra defensa al derecho de las corrientes de opinión en el seno del partido.

La batalla no ha terminado. Irónicamente, la respuesta de la mayoría del CC al desplegado del 21 de noviembre se tituló *En defensa de la línea de la política del PCM* y en ella se acusaba a los firmantes de "calumniar al Partido". Pero esta vez no terminó en expulsiones sino en una victoria de la democracia: La minoría del Comité Central ganó el derecho de publicar libremente sus posiciones al menos durante el periodo anterior al Congreso.

LA DISPERSIÓN IDEOLÓGICA³²

No puede existir un partido político históricamente significativo sin ideología propia. El partido que no cuenta con un sistema explícito de ideas, juicios y creencias que sirven para explicar y justificar su existencia y conferir un sentido histórico preciso a su actuación, es flor de un día. Puede obtener éxitos impresionantes e inesperados, pero éstos serán pasajeros. Puede ocupar un periodo prolongado de la historia de algún sector social, pero el rastro que dejará será perecedero.

Sin embargo, no en todos los partidos históricos mexicanos como el PRI, el PAN o el PCM la ideología juega el mismo papel. Los partidos que están comprometidos en la conservación o la reforma de la sociedad capitalista no necesitan esforzarse demasiado para elaborar su propia ideología. La ideología dominante en la sociedad es la de la clase que ejerce el poder económico y político. Como falsa conciencia, se origina espontáneamente en el sistema de producción capitalista. El Estado, los medios de difusión masivos, la escuela, la familia se encargan de reproducirla e interiorizarla. El partido burgués no necesita, así, preocuparse demasiado en producir una ideología diferente a la que priva en la sociedad, sino sólo en escoger su propia variante que lo distinga de otros partidos. El partido revolucionario se enfrenta a una situación completamente distinta.

LA DISPERSIÓN IDEOLÓGICA

Las condiciones de existencia de la clase obrera y de los demás trabajadores los hacen especialmente receptivos a las ideas del socialismo, pero no pueden llegar

³² *Proceso*, número 215, 15 de diciembre de 1980.

espontáneamente a ellas. Esto le confiere al partido revolucionario una tarea que no conocen los partidos del “establishment”: la de transformarse en el laboratorio social en el cual se funde el pensamiento científico marxista con la práctica política de la clase obrera y los trabajadores en general. No se puede comprender la relación entre el militante revolucionario y su organización si no se entiende cabalmente la función ideológica única que ésta desempeña.

En largas reuniones y discusiones acaloradas, en experiencias y luchas comunes, hombres y mujeres del pueblo crean y reproducen una nueva concepción del mundo que los rodea, una esperanza en una vida mejor, la confianza en su capacidad de influir en la historia de su pueblo y de la humanidad. Los intelectuales y los políticos pueden elaborar la teoría. La creación de una nueva ideología enfrentada a la de la clase dominante, capaz de enraizarse en el pueblo, es la obra cotidiana, complicada e impercedera de todos los militantes, inclusive los iletrados.

Mientras el PCM fue un pequeño grupo de hombres y mujeres relativamente aislados de las fuerzas populares, su unidad ideológica se basó en las “verdades incontrovertibles” del marxismo-leninismo que predominan en el movimiento comunista internacional. A partir de 1960, en un proceso lento y zigzagueante, comenzaron a manifestarse algunas ideas y juicios originales, relacionados, sobre todo con la realidad mexicana, que empezaron a conformar una identidad propia.

Según la visión dogmática, el marxismo-leninismo estaba expuesto en las obras de Marx, Engels y Lenin y los dirigentes del movimiento comunista internacional, así como una serie de manuales elaborados en la Unión Soviética. La unidad de los comunistas estaba cimentada en verdades sólidas como rocas.

A partir de finales del decenio de los sesenta, las seguridades comenzaron a derrumbarse. Las polémicas teóricas entre los partidos comunistas de URSS, China y el eurocomunismo; la experiencia de nuevas revoluciones; los crecientes problemas de los países socialistas; el desarrollo del pensamiento marxista y su penetración en amplísimas capas de la intelectualidad, pusieron a prueba esta doctrina y fueron socavando la inconmovilidad de esas “verdades”. Se estaban creando las condiciones y la necesidad de una renovación profunda de la ideología del PCM.

Esta necesidad se hizo más acuciante aún, cuando en la segunda mitad de los años setenta comenzaron a afluir, a las filas del partido, miles de personas que no conocieron la época “marxista-leninista” y que traían al PCM ideas marxistas y no marxistas, ajenas a la vieja ideología.

No sin reticencias, el dogmatismo comenzó a ceder. Pero no para dejar el lugar a una nueva ideología, sino a una situación que puede ser calificada de dispersión ideológica.

El PCM es ahora, ideológicamente hablando, un partido sumamente heterogéneo. Pero el peligro no está en la gran diversidad de influencias presentes en sus filas. Está, más bien, en que no se ha iniciado aún el proceso de superación crítica de esa heterogeneidad. Esgrimiendo la frase “el PCM no es una secta filosófica”, algunos compañeros defienden la idea de un partido cohesionado exclusivamente alrededor de su programa político. Están equivocados. Ningún partido revolucionario puede desarrollarse en la indefinición ideológica. O bien el PCM conquista una identidad ideológica a un nivel cualitativamente superior al anterior, o su capacidad de acción e influencia están en peligro.

En algunos sectores del PC se discute acaloradamente. Pero el debate no se presenta como un proceso colectivo de elaboración y asimilación de problemas centrales bien definidos, sino como una dispersión de discusiones aisladas sobre una gran diversidad de problemas inconexos. En este campo, el Comité Central ha perdido la iniciativa. No logra colocarse en el centro del proceso de renovación ideológica, ni fijar con claridad los problemas teóricos centrales, a cuyo estudio y debate deben dedicarse los militantes. Es más, algunos de los últimos documentos de este órgano demuestran que no es ajeno a esa dispersión. Desechados los manuales, nadie sabe qué lecturas recomendar. Perdido el escudo protector del dogmatismo, los dirigentes no producen textos educativos.

Reconocer la existencia de un estado de dispersión ideológica no es como sostiene Eduardo Montes en un artículo reciente, añorar el pasado monolítico. Es, por lo contrario, el primer paso en la aceptación de la necesidad urgente de iniciar la difícil tarea de la renovación ideológica del PC.

La nueva unidad ideológica no puede basarse en un regreso a los viejos dogmas, sino por el contrario, en una superación crítica de éstos. Su forma no puede ser el monolitismo, sino la pluralidad: debate activo y permanente de los problemas contemporáneos del socialismo. Pero los órganos de dirección del PC a todos los niveles, deben transformarse en los productores principales de ideas, alternativas y soluciones teóricas e ideológicas que superen el estado de dispersión e inicien el proceso de renovación.

Como fenómeno ideológico nacional, el marxismo mexicano sólo puede ser la asimilación-superación crítica del liberalismo radical, la versión democrático-revolucionaria de la ideología de la Revolución Mexicana y el humanismo cristiano que tiene sus raíces en las obras de Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga y Sahagún. Su surgimiento es el fruto del encuentro de los dirigentes naturales de los movimientos sociales con los exponentes del marxismo contemporáneo mexicano en el calor de la acción política.

LIBERTAD DE CORRIENTES³³

33 *Proceso*, número 220, 19 de enero de 1981.

A medida que aumenta la discusión en el seno del PCM, los problemas se definen y las posiciones se aclaran. En dos recientes entrevistas, la primera publicada en la revista *El Machete* (noviembre 1980) y la segunda en *Razones* (15-28 de diciembre del mismo año), Arnoldo Martínez Verdugo, secretario general del PCM, abandona la ambigüedad y emite una serie de opiniones que van mucho más allá de los documentos oficiales, invitando así a la polémica.

Uno de los problemas abordados por AMV con mayor amplitud es de la democracia en el seno del partido. Esto es, sin duda, el problema de organización más importante, no sólo para el PC, sino para todos los partidos políticos de la izquierda mexicana.

Toda organización es una combinación de democracia y centralismo. Pero no existe ningún modelo universal aplicable a todas las condiciones de lucha. La experiencia histórica del movimiento obrero y de las revoluciones del último medio siglo indica que cada etapa del desarrollo, cada situación nacional particular, exige combinaciones diferentes entre el centralismo y la democracia, acordes con las tareas específicas de cada periodo y el nivel de conciencia de las masas. Una teoría de la organización no puede por lo tanto, sino derivarse de una teoría de la revolución en las condiciones específicas de cada país y de la estrategia aplicada en cada periodo.

El movimiento revolucionario ha conocido varias grandes polémicas a este respecto. A raíz de la publicación del *¿Qué hacer?* de Lenin en 1902, se desarrolló una viva discusión con la participación destacada de otros socialistas rusos y de Rosa Luxemburgo. A principios de los años veinte, la formación de la III Internacional fue acompañada de una nueva polémica sobre problemas de organización. Los movimientos estudiantiles de 1968 volvieron a poner en el orden del día el tema que, a partir de entonces, sigue siendo ampliamente debatido. En América Latina, las obras del Che de los años 1960-67 y las de Régis Debray, sobre todo su famoso *Revolución en la Revolución*, plantean el problema en relación a las condiciones de nuestro continente. Hoy, después de la legalización de la izquierda y la reforma política, el tema se vuelve actual en México. Es más, sus premisas fueron ya planteadas en polémica que inició Arnaldo Córdoba con su ensayo *La política de masas y el futuro de la izquierda en México*. Porque el estudio de la organización del partido revolucionario se inicia con el planteamiento del estado actual de la relación entre el partido y masas y entre los diferentes partidos socialistas en México.

Martínez Verdugo plantea el problema de la democracia en el partido en términos extraordinariamente limitados, los que se refieren a los derechos de todo comunista a participar libremente en la discusión y a hacer conocer públicamente sus posiciones. Se trata, pues, de un derecho de expresión individual. Esto es ya importante. En la medida en que los militantes están inmersos en el movimiento popular, se asegura que los problemas de éste y las tendencias ideológicas

presentes en su seno se manifiesten y sean debatidos en el partido: que éste, refuerce, por medio de la libertad de expresión sus vínculos ideológicos con las masas.

Pero eso no es suficiente. Todos sabemos que las opiniones individuales pesan poco en un partido más o menos numeroso. El problema es si éstas tienen el derecho de fundirse, sin obstáculos, en corrientes colectivas de opinión política. Lo que se debe hacer explícito es si se quiere un partido con una corriente hegemónica única y un universo de posiciones individuales discrepantes, o una organización en la cual varias corrientes de opinión definidas confluyen y luchan en la definición de una posición mayoritaria. Si lo deseable es un partido monolítico modernizado o un partido democrático pluralista.

A este respecto AMV adopta una posición conservadora. Para él, la libertad de discusión tiene como objetivo evitar la conformación de corrientes: “la formación de fracciones o de corrientes estables —escribe— puede evitarse si somos capaces de garantizar un clima respetuoso y abierto de discusión y una más amplia participación de los militantes en la elaboración de la política”. Y en otro lugar reitera: “a nivel de dirección no fomentamos la formación de corrientes”. Así, pues, no cabe la menor duda que AMV está por un partido en el cual pueden existir muchas opiniones individuales, pero una sola corriente de opinión. ¿Pero qué es esto sino una versión adornada del viejo partido monolítico? Si el militante individual que mantiene discrepancias con la posición mayoritaria no puede ligarse con otros que coinciden con él, ¿cómo puede luchar por la victoria de sus opiniones?

La vida interna de los partidos obreros estuvo siempre abierta a la existencia de corrientes de opinión definidas. Así eran la II Internacional —cuya experiencia no fue sólo negativa—, el partido bolchevique de Lenin y la III Internacional hasta 1924. Sólo durante los años 1926-56 dominó totalmente el partido monolítico. Y la verdad es que AMV no logra desprenderse de esta herencia. Especialmente inquietante resulta, en ese sentido, su afirmación de que no se “fomentan” en la dirección las corrientes de opinión. Esto significa que éstas quizá puedan ser toleradas en la base, pero no deben aspirar a penetrar en los órganos ejecutivos, que siguen siendo tan monolíticos como antes.

Hasta ahora la democratización a medias ha resultado tan nefasta como el monolitismo. Es en ella donde hay que buscar los orígenes de la dispersión ideológico-política que reina actualmente en el PC.

Pero lo más importante es saber si el partido monolítico modernizado (con derecho de expresión individual y una sola corriente de opinión) es el más adecuado para las necesidades actuales del movimiento revolucionario en México. Yo opino categóricamente que no. La izquierda socialista mexicana se encuentra en sus etapas iniciales de organización. Pulverizada, sectarizada, sólo puede irse aglutinando en partidos que sirvan de forjas, en las cuales las viejas posiciones,

diferencias, estilos, prejuicios, se fundan paulatinamente en un nuevo metal. Los trabajadores no son aún socialistas. Confluyen al movimiento político revolucionario con sus múltiples bagajes ideológicos. ¿Dónde, sino en el partido, se transformarán éstos en un socialismo mexicano?

Esto exige no sólo la libertad de opinión individual, sino también la libertad de corrientes. La disyuntiva organizativa es: modernización del partido monolítico y aislamiento, o creación de un partido democrático y plural que pueda servir de cauce a las grandes corrientes del socialismo mexicano.

LOS PELIGROS DEL PARLAMENTARISMO³⁴

El PCM es un partido que ha participado en muchas campañas electorales. En cambio, en el pasado, sólo en 1928 había contado con un representante en la Cámara de Diputados, y eso por brevísimo tiempo. Su secretario general de aquel entonces, Hernán Laborde, fue desaforado después del primer discurso. No es sino en 1979, cuando el PC queda integrado por primera vez a la vida parlamentaria del país. Esto exige un examen del lugar de la acción parlamentaria en su política.

El problema no consiste, como lo pretende la resolución mayoritaria del Comité Central del 6 de diciembre, en "si el PCM debe o no presentarse a las elecciones con su propia política sin concesiones al gobierno y a la burguesía, o debe abstenerse". La Corriente Renovadora no ha planteado en ningún momento que en las condiciones actuales el PCM deba privarse de participar en las elecciones y en la Cámara de Diputados.

Consideramos, por el contrario, que la presencia de la Coalición de Izquierda en la Cámara, es un logro importante para todos los trabajadores. Hasta ahora, este foro sólo estaba abierto a los defensores del régimen social establecido, con sus críticos reformistas. Hoy están presentes en él los voceros de una política que conduce a la transformación socialista de la sociedad.

El verdadero problema es otro y puede plantearse en los siguientes términos. ¿Qué papel debe desempeñar la acción electoral y parlamentaria en el conjunto de las actividades que desarrolla un partido revolucionario en la hora actual en México?

En nuestro país las cámaras no juegan un papel determinante en las lides políticas. Ahogadas por el dominio del partido-estado (PRI), el presidencialismo, la ley electoral restrictiva y el fraude, hace mucho que han dejado de ser un centro de decisión política. No sólo están ausentes en ellas las luchas populares, sino las verdaderas contradicciones entre los grupos de la clase gobernante.

La reforma política actual no ha modificado esa situación. Las luchas populares seguirán decidiéndose en la fábrica, el campo de labores, la calle, el sindicato. Los

³⁴ *Proceso*, número 214, 8 de diciembre de 1980.

conflictos entre los diversos sectores de la burguesía serán resueltos en las oficinas presidenciales y las *coulisses* de las secretarías. Al llevar a su representante revolucionario a la Cámara de Diputados, el pueblo ha ganado un foro importante, no una posición de poder. En ese sentido, la dirección de una organización obrera, campesina o popular vale más que una curul.

En el marco de la lucha por la democracia en México, el partido revolucionario debe proponerse desarrollar la vida parlamentaria. Pero no puede otorgarse a la nueva actividad un papel prioritario, sin afectar negativamente el carácter mismo del partido.

El último año se realizaron elecciones locales en catorce entidades del país. Según los datos oficiales, en algunas de éstas la abstención fue de 84 por ciento. En ninguna fue menor de 70 por ciento. Todo indica que las elecciones no son en México la forma principal que adquiere la lucha de clases. Darles en la vida del partido una importancia mayor que la que les otorga el pueblo, equivaldría a desvincularse de éste. La cuestión no es, por lo tanto, si debe o no tomarse parte en ellas, sino cómo hacerlo sin descuidar la atención prioritaria de otras formas de lucha.

Hay que precaverse contra las ilusiones y la dependencia de la actividad parlamentaria que nos alejen de las organizaciones sindicales y el movimiento popular, de acuerdo a una clara escala de prioridades, he ahí la difícil tarea que debe iniciar el XIX Congreso.

En busca del tiempo perdido

El 6 de noviembre de 1981 dejó de existir el PCM. Por decisión unánime de su XX y último congreso, se fusionó con otras fuerzas de izquierda, para constituir una nueva organización, el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). ¿Disolución de una corriente histórica o metamorfosis formal como las que ha conocido el partido oficial que, transitando del PNR al PRM y finalmente al PRI, no ha perdido su esencia de partido en el poder?

La pregunta no puede ser aún contestada. De las seis corrientes que iniciaron la fusión, tres acabaron por retirarse de ella. Por otro lado, el viejo grupo dirigente del PCM se aseguró posiciones rectoras en el nuevo partido mientras que la gran mayoría de los militantes comunistas, desilusionados, se desmovilizaban.

Una cosa parece segura: la creación de un partido de orientación y estructura completamente diferente al PCM no ha cambiado la idea que la dirección de éste tiene de su pasado. Cuatro años después de la fusión, Arnoldo Martínez Verdugo, que fue secretario general de esa organización publica en Grijalbo, una historia del PCM. ¿Balance crítico de la historia de una organización superada o apología del desempeño de una dirección que ha cambiado de nombre sin cambiar de maneras?

La Historia del Comunismo en México es una historia oficial. Cinco de sus autores son miembros de ese grupo dirigente, dos, militantes que trabajaron largos años recopilando materiales, el último, un reciente recluta del aparato de ese partido. Pese a que sólo aparece como editor de la obra, Arnoldo Martínez Verdugo (AMV) es el autor intelectual de las ideas matrices que recorren como hilo invisible el conjunto de los ensayos. Los demás autores, punto más punto menos, comparten su visión del pasado.

Estamos no ante una obra de investigación autónoma, sino ante una historia emanada del poder. Pocos son los partidos políticos que han tenido la osadía de presentar una historia dirigida por su jefe máximo. El conflicto entre partidismo y objetividad, intereses y verdad, es demasiado lacerante. El hombre cuyo oficio es sumar adeptos convenciendo de la justeza de sus ideas, no es el más idóneo para hacer la historia crítica de esas ideas. El principal depositario de los secretos políticos de un partido no es el indicado para dirigir su descubrimiento y revelación. El protagonista de múltiples luchas para apartar del poder a rivales peligrosos, no es el apropiado para hacer la evaluación del papel de éstos. Existe, es verdad, un antecedente: *La Historia del Partido Comunista (b) de la URSS*, redactada por una comisión del Comité Central encabezada por Stalin y publicada en 1938. Pero sus resultados fueron tan nefastos, que no tuvo muchos émulos, ni siquiera durante el reinado del estalinismo en el movimiento comunista.

Eso no significa que las historias oficiales carezcan de interés. Son testimonios de la visión que el poder tiene de sí mismo y de su pasado. Generalmente, nos dicen

mucho sobre el pensamiento de la dirección, poco sobre la historia del conjunto del partido. Como sucede en el libro reseñado, tienden a reducir el papel de miles de militantes a la condición pasiva de ejecutores mecánicos de una línea elaborada por una dirección providencial. Los disidentes ven sus posiciones distorsionadas o son simplemente borrados de la historia. El papel del partido en la vida nacional es magnificado y el de otras fuerzas, ignorado. Los errores de direcciones pasadas son inflados, los de la actual, minimizados. De todo eso hay en abundancia en la *Historia del Comunismo en México*.

La obra tiene la ventaja de ser la primera historia del PCM que cubre los 62 años de su existencia. Sin embargo, esto no la autoriza a desconocer otras contribuciones a las cuales no se hace referencia alguna o merecen sólo una cita marginal. Para hablar nada más de libros o tesis que tratan con alguna extensión el tema:

Víctor Alba: *Historia del comunismo en América Latina* (1954); Robert J. Alexander: *Communism in Latin America* (1957); José Revueltas: *El proletariado sin cabeza* (1962); Rollie Poppino: *International Communism in Latin America 1917-1963* (1964); Karl M. Schmitt: *Communism in Mexico* (1965); Boris Goldenberg *Kommunismus in Lateinamerika* (1971); M. Márquez Fuentes y O. Rodríguez Araujo: *El Partido Comunista Mexicano* (1973); Donald L. Merman: *The Comintern in Mexico* (1974); G. A. Lozano y Nathal: *Creación del Partido Comunista Mexicano y primeros años de participación en la vida política nacional* (1981); I. Marvan Laborde: *Frente popular, alianza y movimiento obrero en México durante el cardenismo* (1982).

A esto habría que agregar multitud de artículos aparecidos en diferentes revistas y libros. Pese a su envergadura y sus aportaciones esporádicas, la *Historia del Comunismo en México* no representa una superación sustancial de esas obras, ni por la vastedad de su información, ni por la profundidad de sus interpretaciones, ni por su objetividad. No es un nuevo punto de partida, sino una aportación más a una literatura todavía muy deficiente.

La historia de un partido importante —y el PCM lo es— es la historia política de un país, vista desde un punto de vista particular. Es la historia de su relación con la clase o bloque social que le da sustento; las ideas políticas y la cultura que lo caracterizan; sus programas, estrategias y tácticas; su actividad práctica a nivel nacional y local; su relación con el Estado y las organizaciones sociales no partidistas; sus cánones organizativos y estilo político; sus vínculos internacionales. Es la historia de sus grupos dirigentes, pero también de sus militantes de base; de sus luchas internas, escisiones y recomposiciones y de sus alianzas.

La confirmación de todos esos elementos forman la historia total del partido. El historiador puede optar por dedicar su atención a uno de ellos o escribir una

historia total. Pero la elección del objeto de estudio es un momento teórico decisivo en la investigación. Sin él, hay crónica, ideología, literatura; no historia.

Fruto de la pluma de varios autores, la *Historia del Comunismo en México* carece de un método común. Por lo contrario, presenta un abigarrado panorama de temas y enfoques. Cada ensayo —por lo tanto cada periodo— presenta diferencias notables en la riqueza de información, el objeto de estudio y el rigor del método. A cada contribución sus méritos y defectos particulares. El nombre de la obra debió haber sido *Ensayos en la historia del Partido Comunista Mexicano* y no el muy ambicioso y por lo tanto frustrante, de *Historia del Comunismo en México*.³⁵

Para muchos comunistas, la fundación del PSUM representó la oportunidad de crear un partido de nuevo tipo que venía precedida por una crítica del PCM.

Pero para los autores de la *Historia del Comunismo en México* la perspectiva parece ser diferente. Los juicios sobre los sucesos y los hombres, sus silencios y repeticiones, confluyen a justificar y exonerar el pensamiento y la acción del grupo dirigente de los años 1960-1981. Desde las filas del PSUM, la vieja dirección sigue librando las batallas de un pasado que domina sus recuerdos. La pregunta es ¿si el PCM era tan exitoso, por qué fue necesario disolverlo?

El autor de los primeros dos capítulos (1919-1929) es Arnoldo Martínez Verdugo. Desde el punto de vista documental, son los más valiosos del libro. Sin embargo, su interpretación adolece de deformaciones notables.

Martínez Verdugo identifica la historia del partido con la del grupo dirigente, en el sentido más estrecho de la palabra. Su obsesión son las biografías detalladas de los notables y las listas de firmantes de documentos fundamentales. La base, en cambio, los comunistas del pueblo, no aparecen en ningún momento. La dirección es todo; los militantes nada. Es verdad que en el periodo estudiado por él, la membresía del PCM no pasaba de algunos cientos. Pero este mismo hecho le otorga a cada uno de ellos la calidad de fundador de una corriente, en su barrio, su fábrica, su aldea. Olvidarlos, significa regresar a la idea de que la historia la hacen exclusivamente los dirigentes. En una visión reduccionista extrema, la “historia del comunismo” se reduce a la del PCM y ésta a la de algunos dirigentes. La parte ha englutido el todo, apropiándose de sus atributos.

Escribiendo sobre los dirigentes, AMV pasa con frecuencia del papel de historiador al de fiscal y juez, absolviendo o condenando. Así, Manuel Díaz Ramírez recibe el título de “dirigente histórico del PCM” (p. 35) que le es negado a otros protagonistas del periodo fundador. El criterio parece ser el de la duración en el poder. Son “históricos” los dirigentes que se perpetúan en su puesto, saliendo victoriosos de las luchas internas, los otros según esto serían los “ahistóricos”.

35 *Proceso*, número 492, 7 de abril de 1986.

José Allen, en cambio, es enviado sin miramientos al patíbulo. Refiriéndose al descubrimiento de Barry Carr, Paco Ignacio Taibo II y Roberto Vizcaíno de documentos norteamericanos que infieren su vinculación con el Servicio Militar de Inteligencia de Estados Unidos, AMV afirma:

Aunque ninguno de los historiadores arriba mencionados ha dado a conocer los textos de los documentos que les sirvieron de base, sino sólo citas fragmentarias tomadas de los archivos nacionales de Estados Unidos, y el autor de este ensayo no ha tenido acceso a las fuentes citadas, los datos que han aportado son suficientes para excluir a José Allen del movimiento revolucionario y comunista (p. 51).

Martínez Verdugo acepta como prueba incriminatoria suficiente, documentos cuyo contenido exacto desconoce, haciendo a un lado otros testimonios sobre la conducta del acusado. Pero eso no es lo más grave. Se adjudica el derecho de “excluir del movimiento revolucionario y comunista” a José Allen. Aquí, el secretario general sustituye al historiador, AMV acaba de expulsar a Allen del pasado del PCM y por lo tanto del Panteón Oficial. Pero una cosa es la mitología y otra muy diferente la historia. En la primera sólo hay dioses y demonios, en la segunda, los actores son hombres con cualidades y defectos. El movimiento socialista es Kautski y también Rosa Luxemburgo, Stalin y naturalmente Trotsky; Manuel Díaz Ramírez y quiérase o no, José Allen, Hernán Laborde y Encina, Arnoldo Martínez Verdugo y José Revueltas. Los triunfadores de hoy son los vencidos de mañana. El ganador puede expulsar al perdedor del partido, pero no tiene el poder de excluirlo de la historia.

Preocupado con los datos personales de los líderes, AMV olvida sus ideas. El gran mérito del PCM fue precisamente la continuidad de su ideología socialista. Sobre eso encontramos muy poco en los dos capítulos de la *Historia del Comunismo*. Se nos dice que los primeros años fueron de transición entre anarquismo y socialismo. ¿Pero cuáles eran las ideas de esas corrientes y cómo se produjo la metamorfosis? Se habla de los “demócratas revolucionarios” pero no se dice nada acerca de sus ideas y la relación que guardaban éstas con las comunistas. El surgimiento del comunismo como ideología en nuestro país está por hacerse. Por ahora, debemos contentarnos con la de sus dirigentes.

El periodo 1929-1934 es cubierto por el ensayo de Gerardo Peláez. En él hay una preocupación mayor que el marco histórico de la actividad del partido. La crisis, la política de los gobiernos del periodo, la situación de la clase obrera y los movimientos sociales son introducidos como elementos inseparables de la vida de éste. GP está menos interesado en el destino de los dirigentes, más en el de las posiciones políticas y la actuación del PCM en su conjunto.

Apenas nacido, el PCM comienza a dividirse. Pero la primera gran ola de expulsiones se produce en 1929. Junto a Ursulo Galván Rivera, Luis G. Monzón,

decenas de comunistas son arrojados fuera de las filas del partido. Hasta la desaparición de éste, el fenómeno se repetirá cíclicamente. Cada viraje tiene su división, cada derrota sus expulsados. El partido crece con lentitud y se desangra regularmente. Casi desde su fundación, el movimiento comunista está compuesto por el PCM y sus expulsados. Muy frecuentemente el número de éstos es superior al de los militantes. Característica congénita del PCM, fue su incapacidad de resolver sus diferencias políticas y sus luchas por el poder, en términos democráticos. Ninguna de sus direcciones pudo tolerar en el seno del organismo la oposición sistemática. Toda lucha por el poder terminó por la marginación o expulsión de uno de sus protagonistas. El origen de esta plaga —una de las tradiciones más nefastas del PCM— es una concepción monolítica del partido en el país de la heterogeneidad política. Y así surge una de las paradojas más impresionantes de México: Un partido oficial que asimila y disuelve las divergencias más extremas con una sorprendente flexibilidad y una izquierda que se dispersa en múltiples células intransigentes, intolerantes y excluyentes.

Gerardo Peláez estudia con acierto la represión que se abate con saña sobre el PCM en esos años y la heroica resistencia de los comunistas, pero no capta el significado fatal de la primera gran ola de expulsiones que inicia una tradición suicida. Registra bien, el viraje sectario de 1929, pero no se da cuenta que ya hacia 1933 pese a que el discurso sigue siendo sectario, en la práctica, el PCM está inmerso en una vasta política de alianzas.³⁶

Los ensayos que cubren los años 1935-1981, están inspirados en las tesis desarrolladas a principios de los años sesenta por AMV en *PCM Trayectoria y Perspectivas*. Repetida incesantemente en escritos y conmemoraciones posteriores, esa concepción es una mitificación del papel de la última dirección del PCM.

El mito se desarrolla en tres actos: *génesis, renovación y transfiguración*.

Génesis. El grupo encabezado por AMV, llega a la dirección por medio de una lucha que desplaza a la dirección de Dionisio Encina. Para demostrar la legitimidad de su origen, debe probar que esa lucha interna fue justa y necesaria. Luego, durante 21 años se mantiene en el poder, derrotando innumerables sublevaciones, algunas de ellas protagonizadas por miembros fundadores del mismo grupo. Para demostrar la legitimidad de su permanencia en el poder, se ve ahora obligado a probar que las otras luchas internas fueron erróneas e innecesarias.

En el ensayo de J. Encarnación Pérez, sobre el sexenio de Cárdenas, se sostiene que el VIII Congreso extraordinario de 1939 que colocó en la dirección a Dionisio Encina, fue orquestado por la Internacional Comunista en un ambiente similar a los juicios de Moscú de 1936. Laborde y Campa fueron expulsados por impedir

³⁶ *Proceso*, número 493, 14 de abril de 1986.

que el PCM participara en el asesinato de Trotski. Luego, el origen de la dirección encinista es espuria, impuesta desde afuera y estalinista.

Los años en que el partido fue dirigido por Dionisio Encina son caracterizados por Gerardo Unzueta como *La crisis del PCM*. En su ensayo sobre el periodo 1940-58, es inútil buscar un acierto de esa dirección o incluso el nombre de sus componentes. GU, que tiene una propensión a las periodizaciones hiperbólicas, distingue incluso dos fases de la crisis: la de 1940-48 y la de 1949-56. La primera está signada por la alianza con los gobiernos y la expulsión de la mayoría de los cuadros formados en el periodo de auge del movimiento obrero de los años treinta. La segunda, por el enfrentamiento “inconsecuente” con el gobierno de Alemán y el de Ruiz Cortines, así como la incapacidad de resolver los problemas internos del partido. En resumen, un balance totalmente negativo: un cuadro deprimente de pasividad, atraso y errores garrafales. La imagen recibe sus toques finales en la lucha interna de 1956-59, durante la cual los encinistas representan la resistencia al cambio, la manipulación de los congresos y conferencias, la antidemocracia. La lucha encabezada por AMV, venció a una dirección de origen bastardo y además, completamente incapaz. Nada queda por agregar.

Pero la legitimación del grupo victorioso, no podía ser completa sin la condena categórica de las otras fuerzas que el periodo de 1956-59 lucharon contra el encinismo, desde posiciones mucho más radicales: las que encabezaban José Revueltas y Mario Rivera. De esa tarea, se encarga Alejo Méndez en su ensayo *Por la Renovación del Partido*. En ella aprendemos que la conducta de Revueltas fue “deleznable” (p.254) y sus posiciones “liquidadoras” (p. 256).

Pero la verdad es mucho más compleja. La mayoría de los comunistas que en 1940 se oponían a la dirección de Laborde—Campa, desconocían el incidente Trotski. En cambio estaban conscientes de los estragos de la línea oportunista adoptada desde 1937. Para ellos, la lucha interna respondía a exigencias de política nacional. La trayectoria de la dirección encinista no se distingue por sus aciertos, pero el periodo que les tocó protagonizar es uno de los peores que ha conocido la izquierda en general. A pesar de ello, el partido sobrevivió y participó activamente en las luchas populares. Los protagonistas de la lucha interna de 1956, se formaron precisamente en esos años.

Revueltas no era ningún liquidador. Su crítica del PCM y los cambios que proponía, iban más a fondo en muchos aspectos que los del grupo de Verdugo. Al exigir a la célula Carlos Marx que renunciara a sus posiciones, se impidió una transformación más esencial del partido en los sesenta. El XIII Congreso en el cual el grupo de Verdugo obtuvo la mayoría, no fue tan limpio y su victoria no se logró sin el aval soviético. La realidad es siempre compleja y contradictoria, las historias oficiales maniqueas.

Renovación. El segundo acto del mito es la redención del partido por la nueva dirección encabezada por AMV. El ensayo de Fabio Barbosa *Acción y Búsqueda*

Programática es uno de los mejores del libro. Considera, acertadamente, que el periodo considerado por él, 1960-1967 se caracteriza por la radicalización de la línea política y la actividad del partido. El desarrollo de un programa que prevé el estallido de una nueva revolución; la participación del PCM en las luchas populares; la etapa “concejista”; la insistencia en la independencia respecto al gobierno, han sido fielmente recogidos. Lamentablemente, no hay una apreciación crítica de su vida interna ni de sus relaciones con los movimientos populares y sus dirigentes. Habiéndole tocado el relato de los mejores años de la nueva dirección, se le escapan los errores que le habrían de producir una crisis a partir de 1968.

Los últimos dos artículos de Juan Luis Concheiro y Eduardo Montes, están íntegramente dedicados a demostrar que a partir de ese año el partido dejó atrás sus crisis; según ellos están marcados por el surgimiento de una nueva democracia; la plena adecuación a las condiciones de México; el crecimiento constante e influencia y elaboración de una línea política acertada. En ellos el tono apologético se vuelve más denso y en el último abundan las falsificaciones, silencios intencionales e incluso trucos publicitarios.

Concheiro ignora el conflicto con Siqueiros que llevó a la revocación de éste del Comité Central y calla la expulsión del viejo dirigente campesino Orona. Al referirse a las presiones que obligaron a Manuel Terrazas y Fernando Cortés a abandonar el partido, (p.354) las reduce a una “separación” por discrepancias ideológicas sin explicarnos cómo y por qué dos de los más antiguos y prestigiados dirigentes del partido se vieron obligados después de varias décadas de militancia, a dar ese doloroso paso. Pero quizá el momento más lamentable es el que se refiere a la visita de Luis Echeverría a la Universidad. Para evitar una referencia positiva a Joel Ortega, que había más tarde de oponerse a la dirección, escribe “Los comunistas impusieron un orador en el acto el cual expresó con claridad la nueva política de los comunistas”. El nombre del “orador” que se hizo nacionalmente famoso por su valiente respuesta al Presidente, quedó borrado de la historia oficial del PCM.

Eduardo Montes por su parte, se destaca en la tergiversación que hace de las posiciones y la actividad de la corriente renovadora que logró apoyo entre los militantes del Distrito Federal y llegó a representar un tercio de los delegados al XIX Congreso. Sostiene que éstos defendían la idea de un partido monolítico, cuando los renovadores fueron los pioneros de la tesis de un partido pluralista en la ideología y abierto a la formación de corrientes organizadas. Falsea su desempeño en el Distrito Federal atribuyendo a maniobras, el prestigio logrado en la denuncia de una dirección local en completa bancarrota y oculta que su gestión fracasó por la permanente hostilidad de la dirección nacional.

Pero las realidades son reacias a las versiones oficiales. Si el periodo 1940-56 merece en su conjunto el apelativo de “crisis”, muchos de los años 1960-82 podrían tener el mismo nombre. La democracia en el PCM no se desarrolló

suficientemente para evitar las rupturas desgarradoras por razones ideológicas, de poder o política. Las escisiones continuaron a un promedio de una cada dos años. Debido a ello, la izquierda en ese periodo se desarrolló más que el PCM. El ascenso numérico de ese partido ni siquiera refleja el crecimiento demográfico del país. Pese a que Montes habla de una quimérica campaña de reclutamiento de 100 mil miembros, la verdadera militancia osciló en el periodo, entre 600 en los años más negros y 12 mil en los momentos culminantes, menos de lo que el partido contaba en el periodo cardenista. En cuanto a la adecuación a las condiciones de México, éste es un tema a debatir. Hoy día es más claro que nunca que las debilidades de la izquierda sólo pueden ser superadas en el seno de un partido de características radicalmente diferentes a los partidos comunistas tradicionales, cosa que el PCM nunca dejó de ser. En cuanto a la línea política de esa dirección, sufrió las mismas oscilaciones pendulares entre sectarismo y oportunismo que las de las direcciones anteriores, derivadas de la concepción instrumentalista del Estado y la política.

Transfiguración. Según la versión oficial, al fundirse con el PSUM, el PCM conoce una metamorfosis genética. La historia oficial del Comunismo en México parece probar lo contrario.

La vieja dirección del PCM sobrevivió. Incapaz de renovarse ideológicamente, demostró una notable capacidad para adaptarse a prácticas oportunistas. Pero esta contradicción produjo la desmovilización de la inmensa mayoría de los militantes comunistas, trabajadores e intelectuales de los años de la semilegalidad.

Como en muchas otras partes del mundo, el movimiento comunista ha sufrido en México un colapso quizá fatal. Pero sus experiencias son patrimonio del conjunto de la izquierda que sólo puede superarlas, conociéndolas tal y como realmente fueron.³⁷

Arnoldo Martínez Verdugo, editor, *Historia del Comunismo en México*. Editorial Grijalbo, México, 1985.

³⁷ *Proceso*, número 495, 28 de abril de 1986.

Del PCM al PSUM

El 15 de agosto de 1981 las direcciones de cinco organizaciones socialistas decidieron proponerle a sus agremiados “unificar sus fuerzas en un solo partido”. El anuncio causó estupor en algunos círculos y no faltó quien lo interpretara como un acto inspirado exclusivamente en motivos electorales. El suceso tiene sin duda sus condicionantes y efectos coyunturales. Pero pensar sólo en ellos equivaldría a ver la cresta de las olas e ignorar las profundas corrientes que fluyen bajo ellas.

Pese a que el socialismo no es aún la forma de expresión orgánica de un sector decisivo de la población trabajadora, a partir de 1968 se multiplican los activistas políticos insertos en las masas que elevan su nivel de conciencia y organización, se forman grupos dirigentes capaces de concebir globalmente al país y elaborar programas y tácticas coherentes, se desarrolla el pensamiento socialista diferenciándose de otras tendencias.

Pero todo eso se encuentra disperso, pulverizado, desperdigado. Se alberga en grupos de acción sindical, campesina, de colonos; en revistas, periódicos, suplementos culturales, seminarios y por fin, en una decena de partidos y organizaciones que no son sino fracciones de un movimiento único, el movimiento del socialismo mexicano. En estas condiciones, la creación de uno, dos o tres centros de cohesión, capaces de articular los elementos que constituyen el movimiento, se transforma en necesidad vital: en un país de omnipresencia estatal marcada por la pesada herencia de un sistema de partido único, un socialismo atomizado no tiene futuro alguno.

Las causas de la dispersión son diversas. Olvidemos momentáneamente las objetivas, para pensar en las que se originan en el movimiento político. La más antigua debe buscarse en el seno del PCM, en el cual un largo invierno estalinista y sus persistentes resabios, transformaban toda discrepancia de fondo, toda lucha interna, en una división. Otra nace con los grandes movimientos espontáneos de la década de los sesenta (sobre todo el de 1968) que produjeron agrupaciones que se empeñaron en transitar por vías propias y desiguales el camino que lleva de la rebelión democrática al socialismo.

Hace ya algunos años que en el seno de la izquierda se confrontan dos ideas acerca del futuro del movimiento revolucionario. Una que sostiene que la dirección de éste surgirá en el seno de tal o cual organización, grupo o corriente que es portadora de la verdadera posición revolucionaria. Otra, que considera que el partido socialista como realidad histórica existe por encima de las organizaciones actuales, que no son sino la expresión de su pulverización.

La polémica es esencial, porque de cada una de estas posiciones surge una práctica y un estilo radicalmente diferentes. La primera es inevitablemente vanguardista y excluyente. Confronta a las demás tendencias y su discurso como algo externo al movimiento y la verdad. La segunda se concibe como parte de un

todo más complejo y ve los discursos rivales como algo que sólo puede ser superado si se asimila el núcleo de la verdad que contienen.

Es ese contexto como hay que ver la fusión del PCM, PMT, PPM, PRS y MAUS. Como una estación obligada en la trayectoria de un movimiento socialista que se caracteriza por una dispersión paralizante. Un imperativo para una fuerza social que sólo puede afirmarse en la negación dialéctica de sus grupúsculos, segmentos y fracciones.

El 15 de enero de 1977, después de largas deliberaciones, los representantes de los cuatro partidos mencionados firmaron un manifiesto que exhibía coincidencias fundamentales sobre la situación del país. Luego se iniciaron pláticas sobre la posibilidad de la unidad orgánica.

El 21 de marzo del mismo año, Arnoldo Martínez Verdugo informaba al Comité Central del PCM sobre esas iniciativas, en los siguientes términos:

En las últimas semanas tomó cuerpo la idea de examinar las posibilidades de emprender un trabajo de unificación orgánica de estas organizaciones en uno o dos partidos... En la discusión, los representantes de nuestro partido arrancaron de la idea de que existen bases objetivas para que se examine seriamente la posibilidad de unificar las fuerzas de las cinco organizaciones...

En el proceso unitario tampoco deben ocupar el primer lugar determinadas urgencias políticas, como las que surgen del calendario electoral. Es legítimo abordar con toda oportunidad la participación unificada de la izquierda en las elecciones federales próximas... Pero la integración de un solo partido debe verse con mayor profundidad como el resultado de una comunidad de ideas en torno de los problemas fundamentales de la teoría, de la estrategia y la táctica políticas y de la concepción del partido apto para la transformación revolucionaria.³⁸

En aquella ocasión el intento no tuvo éxito, pero la semilla quedó sembrada. Luego siguieron las sesiones conjuntas de los comités centrales del PPM y el PCM, la participación solidaria en luchas populares, tres años de experiencia electoral y parlamentaria en la Coalición de Izquierda.

En su XVIII Congreso (23 al 27 de mayo de 1977) el PCM consideró que la unidad orgánica de los marxistas es una necesidad que se deriva no de causas coyunturales, sino de la trayectoria histórica del socialismo mexicano.

Por una serie de particularidades del desarrollo del movimiento obrero mexicano y del marxismo —se dice en el informe a éste del marxismo— especialmente por la crisis en la que el partido se

38 Informe al IX Pleno del Comité Central del PCM, 21 de marzo de 1977.

debatíó durante largos veinte años de 1940 a 1960, surgieron en nuestro país otros partidos y organizaciones, además del PCM, empeñados en aplicar el socialismo a las condiciones de México...

De tal modo que nuestro objetivo de transformar al PCM en un partido de masas tiene que contar con este factor nuevo. Surgió la posibilidad de crear en nuestro país un gran partido revolucionario de la clase obrera, no sólo por los esfuerzos directos del PCM, sino por la contribución que a esta tarea prestan otros partidos y organizaciones socialistas...

Nosotros llevamos el nombre que consideramos corresponde a los objetivos y a los principios del partido de la clase obrera.

Sin embargo, no hacemos del nombre de la organización un fetiche: si surge una verdadera necesidad de cambiarlo, debemos estar dispuestos a elegir otro nombre. Esta no es cuestión de principios.

No seríamos los primeros en dar ese paso. Cuando de la confluencia de grandes corrientes históricas del movimiento obrero nace la necesidad de fundirse en un solo partido... la situación del nombre puede darse.³⁹

Estamos, por lo tanto, ante una idea y una práctica que tardó cinco años en germinar. La conciencia unitaria se abrió paso con dificultades venciendo viejos prejuicios y "vanidades de partido".

La dispersión no es sólo una cuestión organizativa. Tiene manifestaciones políticas e ideológicas que atraviesan incluso los partidos existentes. La fusión de organizaciones no resuelve por sí misma el problema de la unión política e ideológica.

Este es un proceso prolongado que continuará aún después del Congreso Constitutivo del nuevo partido y que requiere de la aportación no sólo de los militantes de las cinco organizaciones, sino de miles de socialistas aún no organizados.

Porque de lo que se trata, no es de construir un PMT, un PCM o un PPM ampliado, sino un partido de nuevo tipo. Un partido que recoja todas las aportaciones de cada una de las cinco organizaciones al movimiento revolucionario y se esmere en superar todas sus limitaciones, errores, taras y atrasos particulares. Un partido con profundas raíces en la realidad nacional y atento a recoger las experiencias del movimiento revolucionario mundial. De los socialistas depende que lo que suceda no sea sólo la fusión de cinco partidos, sino la construcción de un partido de nuevo tipo más acorde con los tiempos y las necesidades actuales de los trabajadores mexicanos.

³⁹ *Proceso*, número 252, 31 de agosto de 1981.

La fusión será renovadora si transcurre en medio de un examen serio de los problemas de la izquierda, sus perspectivas y tareas; de las características del partido de nuevo tipo y sus proyecciones nacionales e internacionales. Si en este examen participan no sólo las direcciones, sino todos los militantes de los partidos y sus simpatizantes. No hay contradicción entre este proceso y la campaña electoral, si ambas se centran en el mismo objetivo: sumar fuerzas en la lucha por la democracia y el socialismo.

La fusión no elimina por sí misma los grandes problemas a los cuales se enfrenta el movimiento revolucionario mexicano: partido y movimiento espontáneo; parlamentarismo y acción de masas; reformas y revolución; partido socialista y clase obrera. Todas estas interrogantes seguirán vigentes como antes, pero ahora se plantearán en el seno de un organismo que puede hacer más para su solución práctica que cualquiera de los anteriores.⁴⁰

UN PARTIDO HISTÓRICO

La fusión de seis organizaciones socialistas es un acto de autocrítica política. Entraña el reconocimiento tácito de que ninguna de ellas puede, por sí misma, transformarse en una gran fuerza obrera y popular y el abandono de vanguardismos y caudillajes parroquiales. Esto puede parecer un lugar común. No lo es si se concibe como punto de partida para el examen de los problemas de la construcción del nuevo partido.

Es más, el verdadero debate sobre el partido socialista de nuevo tipo sólo puede iniciarse después de la desaparición de las organizaciones existentes y sus particulares razones de ser, porque esta es la condición para liberarse de prejuicios como el que sostiene que existe un tipo de organización política aplicable a todas las latitudes y etapas del movimiento revolucionario.

Esta idea, nacida de la absolutización de las experiencias de la III Internacional y alimentada por el exangüe desarrollo de los partidos políticos en nuestro país, es completamente ajena al pensamiento y la práctica política de Marx, quien veía en las diferentes formas que adoptaba la organización obrera, sólo contingencias de la lucha de clases. En una carta a Freiligrath del año de 1860, escribe: "La Liga, lo mismo que la Sociedad de las Estaciones del Año y que centenares de otras sociedades, son sólo episodios en la historia del Partido que nace espontáneamente, por doquier, del suelo de la sociedad moderna; yo me he esforzado por disipar el equívoco de que por 'Partido' entendía la Liga, cuya existencia terminó hace ocho años, o la redacción del diario, que dejó de salir hace 12 años. Por Partido yo entendí el Partido en el gran sentido histórico del término".

A lo largo de su vida, Marx y Engels actuaron en el seno de organizaciones muy diversas. Sin embargo, nunca se propusieron "crear un partido" de acuerdo con

⁴⁰ *Proceso*, número 214, 8 de diciembre de 1980.

cánones preconcebidos. Preferían, por lo contrario, apoyarse en las organizaciones existentes del movimiento obrero. Primero colaboraron en una pequeña organización internacional, de unos 200 o 300 miembros (la Liga de los Comunistas 1847-1852). Luego en una amplia federación de organizaciones obreras disímiles (la Primera Internacional, 1864-1872), y hacia el final de sus vidas estuvieron estrechamente ligados a un partido de masas de orientación marxista (la Socialdemocracia alemana, 1870-1890).

Después de participar activamente en las labores de la Liga y la Primera Internacional, los dos revolucionarios decidieron su disolución, una vez que llegaron a la conclusión de que esas formas organizativas no correspondían ya a las necesidades del movimiento. También era frecuente que apoyaran, para ciertos países, formas de organización obrera que consideraban inadmisibles para otros. Hacia 1880, se oponían en Alemania y Francia a cualquier fusión hecha a costa de los programas socialistas que ya estaban echando raíces en el seno de las masas obreras. En cambio, para Inglaterra y Estados Unidos apoyaban todos los movimientos que apuntaban hacia la formación de un amplio partido de los trabajadores, por más atrasados que fueran sus programas. No hay formas de organización eternas ni recetas universales. El partido “en el sentido histórico” es la conciencia y la actividad autónoma (*Selbstätigkeit*) de la clase obrera.

En América Latina la idea de la revolución socialista estuvo asociada durante cuatro décadas (1920-1950) con un modelo de partido. Fueron necesarias la revolución cubana, la ola revolucionaria de la década de los sesenta, Chile, Nicaragua, El Salvador para socavar el mito. Pero ahora no ve el que no quiere: cada revolución crea sus propias formas de organización. Y el problema de un partido revolucionario sólo puede abordarse partiendo de una teoría de la revolución.

La izquierda mexicana no carece de tradiciones partidistas. El PCM logró una hazaña respetable: sobrevivir sin doblegarse 62 años de persecuciones y errores, manteniendo encendida la antorcha de la autonomía proletaria. El PP fue durante algunos años la esperanza de un partido de masas trabajadoras. El movimiento guerrillero aportó su lección de abnegación y disciplina. Los miembros de lo que hoy es el MAP enseñaron cómo se constituye una corriente política-cultural. Y lo más importante es que estas experiencias viven en la conciencia de los sectores populares que las compartieron.

Todo eso debe ser recogido por el nuevo partido, que tendrá, sin duda, sus elementos de continuidad. Nadie se propone comenzar desde cero. Pero también habría rupturas. Los cambios en la situación del país y la confluencia de seis fuerzas tan diferentes entre sí, impiden volver sobre pasos ya andados. Quiérase o no, el nuevo partido será algo inédito en la historia de la izquierda mexicana. Y para recorrer el camino que lleva a él es necesario salir de las parroquias y volcarse en el movimiento.

El primer momento de unidad se expresará en proyectos de declaración programática, plan de acción y estatutos que servirán de base a las discusiones preparatorias del primer congreso del nuevo partido. La aprobación de esos documentos por las direcciones de los seis organismos, debe ser considerada como un logro de gran significación para la izquierda. Su contenido disuelve todas las dudas acerca del carácter esencial del nuevo partido. Este será socialista, revolucionario y antimperialista. Será un partido autónomo y de oposición a los gobiernos de la gran burguesía, vuelto hacia la clase obrera y las masas trabajadoras, pero esos documentos llevarán también la marca indeleble de las organizaciones que confluyen en el nuevo partido. En muchos aspectos, no son un viaje al futuro, sino un adiós al pasado. Por su parte, el congreso constitutivo del nuevo partido no puede ser la culminación sino el principio de un proceso de renovación y búsqueda. Primero hay que despedir con honores a las seis organizaciones salientes. Luego, pasaremos a construir un partido socialista de nuevo tipo.⁴¹

DEMOCRACIA Y FUSIÓN

Ahora que se ha iniciado la formación de un nuevo partido socialista, no es ocioso recordar que cada paso dado durante el proceso de definición influye decisivamente en la fisonomía de la nueva organización. Cada resolución, cada medida organizativa o política adoptada en el periodo intrauterino, marcará profundamente la vida del nuevo partido para muchos años.

Han pasado más de 50 días desde que se planteó —en pláticas informales entre dirigentes— la posibilidad de unir orgánicamente a varios partidos de izquierda. Desde entonces, los trabajos de la fusión se han mantenido constreñidos al nivel más alto de las direcciones políticas de las organizaciones. El inevitable proceso de conocimiento de hombres y posiciones y la elaboración de los primeros proyectos de documentos básicos exigía la centralización. El proceso de fusión debía inevitablemente comenzar por el acercamiento y la coincidencia entre las direcciones.

Pero llenados estos requisitos, se inicia la gran prueba para la democracia en el nuevo partido. ¿Cómo concebir la fusión? ¿Cómo un acuerdo entre aparatos dirigentes o cómo un proceso en el cual miles de militantes construyen el nuevo partido abordando con iniciativa propia la infinidad de problemas prácticos y teóricos en que se resume el proceso?

La fusión es, ante todo, la fijación de las bases políticas y organizativas de la unidad que se plasma en la declaración de principios, el programa y los estatutos. Pero no es sólo eso. Es también la confrontación entre diferentes líneas sindicales, políticas campesinas, prácticas universitarias; el encuentro entre varias formas de organización; la solución de problemas y litigios a nivel regional y local;

41 *Proceso*, número 254, 14 de septiembre de 1981.

el contacto entre varias tradiciones y corrientes ideológicas. ¿Cuál es el papel reservado en ese proceso a las direcciones y cuál el que deben asumir los cuadros y militantes en los diferentes niveles?

La respuesta que se dé a esta interrogante influirá decisivamente en la fisonomía del nuevo partido por lo menos en tres aspectos básicos:

Relación entre dirección y militantes.

Grado de integración de las viejas organizaciones en la nueva.

Nivel de participación de los miembros en el proceso de fusión.

Si la dirección se excede en el centralismo pretendiendo tomar todas las decisiones y controlar los detalles, el nuevo partido será incapaz de absorber la rica gama de iniciativas presente actualmente en el movimiento.

En un proceso como el que vive actualmente la izquierda mexicana, las direcciones más que controlar deben estimular la actividad, la conciencia y la capacidad de organización de los militantes. En el proceso de fusión, la iniciativa es más importante que la jerarquía; la apertura más útil que la disciplina; la búsqueda de nuevas soluciones más urgente que la defensa de viejas posiciones.

Es fundamental que todos, dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, conozcan el plan de la fusión, el calendario de sus etapas, las tareas que les esperan. Que cada persona tome la decisión individual de participar activamente en ella y lo haga en el seno de una organización.

No existen muchas alternativas. Es esto, o la fusión desde arriba.⁴²

FANTASMA EN EL SEGUNDO CONGRESO

En algún lugar Marx dice que cuando los hombres hacen su propia historia, la tradición de los muertos oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos, y cuando éstos se disponen precisamente a revolucionarse y a revolucionar las cosas, a crear algo nunca visto, es cuando temerosos conjuran en su auxilio a los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas, su ropaje. Esto es precisamente lo que sucedió en el II Congreso del PSUM. “Dinosaurios” y “Renos”, que habían estado invernando durante dos años, salieron de sus cuevas para proyectar sus sombras sobre el discutido evento. El suceso no merecería nuestra atención —al fin y al cabo también los espíritus tienen sus derechos— si alguien no hubiera pretendido hacer pasar a los fantasmas por vivos y a los vivos por fantasmas.

Una de las principales aportaciones del PSUM a la izquierda es que en él se trata de construir un partido democrático, en el cual se expresen libremente diversas ideologías y corrientes de opinión política. Una unidad en el pluralismo. Pero

⁴² *Proceso*, número 256, 28 de septiembre de 1981.

precisamente cuando se da un paso en esa dirección, hay quien conjura de mala fe los espantajos del pasado. En el II Congreso del PSUM se produjeron alineamientos encontrados —que pueden ser duraderos o no— respecto a la táctica política de ese partido. Pero hay quien quiere hacernos creer que no hay tal. Que lo que verdaderamente sucedió fue una segunda edición del XIX Congreso de PCM ampliado y corregido por la presencia de nuevas fuerzas. Lo grave de la intentona es que nos distrae de la verdadera discusión del presente, a saber: la táctica política que debe seguir la izquierda frente a la crisis y la política del gobierno actual, para obligarnos a aclarar problemas del pasado.

Comencemos por una historia de fantasmas: “los dinosaurios” (dinos) y los “renovadores” (renos). El mote “dinosaurio” comenzó a usarse profusamente en 1980 para designar una posición en el seno de la izquierda. Si no me equivoco, apareció por primera vez en el número de junio de la revista *El Machete* para calificar a alguien que atacaba al PCM por “eurocomunista”. En el número 4 de la misma revista, Rodolfo Echeverría propuso, sardónico, un concurso de “neodinosaurios”, a los cuales se podía calificar de estalinistas, dogmáticos, doctrinarios, prosoviéticos, esquemáticos, atrasados, etcétera. Tres meses después, los redactores identificaban a los “dinosaurios” con los que “en la izquierda aún mantienen posiciones conservadoras y ortodoxas”. El 20 de noviembre del mismo año, 15 compañeros del Comité Central de ese partido, firmaron un documento cuyo encabezado era “Por la renovación del PCM”. Debido a ello, se les apodó “renovadores” (renos).

En el XIX Congreso del PCM (marzo de 1981) los apelativos, imprecisos desde sus orígenes, adoptaron una nueva connotación, todavía más confusa, se llamó “dinosaurios” (dinos) a todos los que apoyaban la posición de la Comisión Política (mayoría) y “renos” a aquellos que simpatizaban con los disidentes (minoría). Ambos bloques eran muy heterogéneos. La importante fuerza de delegados no alineados (la cuarta parte del total) no mereció de comentaristas maniqueos una apelación al mismo nivel.

En cuanto a los renos, quedaron en minoría, pero no fueron expulsados del partido y siguieron formando parte de él a todos sus niveles hasta la disolución del PCM, en noviembre de 1981. Fueron sin embargo objeto de una campaña de descrédito permanente por algunos sectores de la mayoría que comenzaron a usar el mote de reno para atemorizar a cualquier disidencia. En febrero de 1981 se había publicado el libro *Por la renovación del Partido Comunista Mexicano*, que contenía el manifiesto del 20 de noviembre y algunos artículos de renovadores. De la lectura de estos y otros documentos, se desprende que los “renos” eran una corriente ideológicamente heterogénea, unida alrededor de las siguientes posiciones.

1. Socialismo democrático. El socialismo no es sólo la propiedad de los medios de producción, sino también la socialización del poder político. Se critica la situación

en los países del llamado socialismo realmente existente, partiendo de la idea que no hay socialismo sin democracia.

2. Partido ideológicamente pluralista. Hasta entonces, el PCM había sido un partido ideológicamente monolítico. Se proponía abrirse a las diversas corrientes del marxismo así como al nacionalismo revolucionario y el socialismo cristiano.

3. Partido democrático con libertad de corrientes. “La renovación del partido — decía el manifiesto— sólo es posible en condiciones de una avanzada democracia interna que comprende: derecho a la información; libertad de comunicación entre todos los organismos del partido: participación efectiva de todos los miembros en la elaboración y aplicación de la línea; respeto a corrientes de opinión que no menoscaben la unidad... En el partido puede haber diferencias de opinión y de estilo. Pero éstas no pueden ser soslayadas y encubiertas por la conciliación. Deben, por lo contrario, tener la posibilidad de desarrollarse en concepciones y corrientes claramente definidas”.

4. Un partido orientado no hacia las capas medias emergentes, sino hacia la clase obrera. En otra parte del citado libro se dice: “El carácter obrero de nuestros partidos no debe ser enfocado dogmáticamente... No podemos partir para su solución de un modelo válido para todos los tiempos y latitudes sino de una situación nacional concreta... El problema es si el movimiento democrático mexicano será durante mucho tiempo, lo que es hoy. Sostenemos que esto no será así. En los próximos años, a medida que la clase obrera se consolide y los vapores de la lucha nacional contra los residuos de la vieja sociedad y el imperialismo se desvanezcan, la clase obrera irá ocupando un lugar político cada vez más definido y se irá transformando en el contendiente principal de la burguesía”.

5. Un partido de acción popular y no solamente de opinión. Al insertarse en los órganos del Estado (Cámaras) y la opinión pública, el partido no debe alejarse de las demandas cotidianas y locales del movimiento popular.

Mientras el PCM siguió existiendo, los renos persistieron como corriente. Pero una vez desaparecido ese partido, la tendencia de los renovadores que había surgido tardíamente en el último año de la vida del PCM, se disolvió. Desde entonces no tuvo ya expresión ideológica o política separada, ni constituyó un bloque a nivel nacional. Algunas de sus ideas, que no pudieron plasmarse en el PCM, se están haciendo realidad en el PSUM. Otras, son patrimonio de la izquierda y tema de discusión futura.⁴³

43 *Proceso*, número 360, 26 de septiembre de 1983.